

102ª REUNION — Continuación de la 5ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 2 DE 1964

**Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig, Miguel P. del Pero
y Guillermo A. Belgrano Rawson**

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
AGUIRRE CAMARA, José
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARROYO, Ramón F.
ÁVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CASTELLAR, Miguel A.
CATALÁN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo A.
CHEBLE, Francisco R.
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMINGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo

FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, José M.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ NUÑEZ, Isidro
FERREIRA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio
GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRE, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEÓN, Luis Agustín
LESCANO, Edmund A.
LILJESTHÖM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José B.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MENDEZ DOYLE, Abel Victor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGURRIA, Camilo
MUÑOZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
NOUGUES, Isaías J.
OCAMPO, Carlos E.

OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Angel H.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ, Raúl
PERNASSETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor E.
SARRULLE, Oscar E.
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
SOLARI, Juan Antonio
TARULLI, Pascual
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TROCCOLI, Antonio A.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE de PÉREZ TORT, Lidia
VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

ANTÓN, Luis
ARRASCAETA, Félix de
AVETA, Francisco O.

AUSENTES, CON LICENCIA:

BOFFI, Luis L.
 COGGIOLA, Luis S.
 DIAZ O'KELLY, Felipe F.
 MERCADO, José Ignacio
 PEÑA Y LILLO, Silvestre
 SCALITER, Juan
 VACA LOBO, Juan Manuel

AUSENTES, CON AVISO:

CALVÓ, Carlos Alberto

CORNEJO LINARES, Juan Carlos

FERRARI, Luis
 LLORENS, Héctor
 MONTE, Ricardo Alvaro
 PALACIOS, Alfredo L.
 POSSE, Melchor S.
 REQUENA, Raúl María
 ROBERTO, Mario
 SCHAPIRA, David

AUSENTES, SIN AVISO:

ACHIARY, Juan C.

CALABRESE, Pablo

CARO, José Armando
 DIAZ, Diógenes C.
 FERNANDEZ MENDY, Julio O.
 GALEANO, Roberto A.
 GODOY, Ruperto Honorio
 MARTÍNEZ, Ramón S.
 PÉREZ GALLART, Alcides B.
 RENÉ, José María
 ROMEU VERDIER, Gabriel
 TACHELLA, Eliberto S. J.
 VIÑALS, Fernando J.

SUMARIO

- 1.—Continuación de la sesión. (Página 6754.)
- 2.—Información solicitada por el señor diputado Ghioldi. (Página 6754.)
- 3.—Estatuto de los Partidos Políticos. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda (orden del día 417). Se aprueba en general. (Página 6754.)
- 4.—Cuarto intermedio. (Página 6811.)
- 5.—Apéndice:

Inserción. (Página 6812.)

—En Buenos Aires, a los dos días del mes de diciembre de 1964, a la hora 11:

1

CONTINUACION DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en general de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, contenidos en el orden del día 417, sobre Estatuto de los Partidos Políticos (1).

2

INFORMACION

Sr. Ghioldi. — Pido la palabra para solicitar una información a la Presidencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Deseo preguntar a la Presidencia si ha llegado algún mensaje o notificación del Poder Ejecutivo tendiente a dar una explicación sobre lo que sucede actualmente en el país, y cuáles son las razones de la inquietud generalizada y de las preocupaciones del Poder Ejecutivo con respecto al orden público.

— Véanse los Diarios de Sesiones del 30 de noviembre y 1º de diciembre de 1964, páginas 6608 y 6719, respectivamente.

Formulo la pregunta porque supongo que los diputados nacionales de la República Argentina no estaremos condenados a tener noticias sobre nuestro país solamente del extranjero y las provenientes de las cancillerías de países hermanos. Supongo que el Poder Ejecutivo, en oportunidad del presente debate sobre cuestiones políticas, estará muy preocupado de hacer llegar la última palabra a la Cámara. Por eso pregunto si ha llegado algún mensaje del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que no ha llegado ningún mensaje del Poder Ejecutivo relacionado con el tema que plantea el señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Entonces, espero que ello se produzca en las próximas horas, porque de lo contrario tendremos que seguir esperando noticias de las embajadas extranjeras respecto de lo que sucede en la Argentina.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado: creo que lo que sucede en el país es de conocimiento de todos los argentinos.

3

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Sr. Presidente (Mor Roig). — Prosigue la consideración en general de los dictámenes sobre Estatuto de los Partidos Políticos.

No encontrándose en el recinto el señor diputado Pedrini, tiene la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — Señor presidente: estamos asistiendo a un debate rico en matices doctrinarios. Entiendo que el saldo de este debate sobre el Estatuto de los Partidos Políticos prestigia a este Parlamento de la proporcionalidad.

Al igual que otros señores diputados hice llegar a la Comisión de Asuntos Constitucionales algunas observaciones sobre el anteproyecto de dictamen. Fueron atendidas algunas, que eran inquietudes propias, y otras que eran comunes con las que sostenían algunos señores legisladores. Otras, en cambio, no corrieron la misma suerte. Pero de cualquier manera es plausible la labor desarrollada por la comisión.

Podría decir, en líneas generales, que este Estatuto de los Partidos Políticos peca de extenso y que, en algunas oportunidades, cae en

el reglamentarismo que ya ha sido censurado por algunos señores diputados en el curso del debate.

Alabo la preocupación con que ha querido prevenirse la comisión de muchas faltas que hacen a las prácticas políticas de antaño y que pueden ser también de hogaño, pero me temo que cierto reglamentarismo torne el texto confuso en algunos aspectos.

Algunos bloques han hecho reservas expresas, y otros las han manifestado particularmente en lo que se refiere al texto del artículo 22. Este artículo ha sido censurado incluso por la mayor parte de los bloques que han apoyado en general el dictamen de la comisión, lo ha hecho el señor diputado González Bergez en el curso de su exposición pronunciada ayer por la noche. Algunos señores diputados se han detenido con sus observaciones en determinados incisos. En meditada y medulosa exposición lo hizo el señor diputado Musacchio, del bloque de la UCRI, al analizar, por ejemplo el inciso a) del artículo 22, donde se establece que no cumplen con las condiciones democráticas los partidos que postulan la concentración del poder político, social o económico. Tal cual está redactado este inciso es evidente que resulta confuso, porque podrían ser proscriptos los partidos que postularan, por ejemplo, la existencia de una entidad sindical única. Por lo tanto, en el análisis de este inciso me remito a los conceptos del señor diputado.

En cuanto al artículo 22, he formulado observaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales, particularmente en lo que respecta al inciso i). Me resulta confuso en su redacción. Francamente, no lo entiendo.

El inciso i) habla del desconocimiento del derecho de las mayorías a gobernar y de las minorías a controlar la gestión gubernativa. Espero que en su oportunidad la comisión, por la vía correspondiente, aclare el significado de este inciso. Es decir, informe si se refiere al procedimiento a seguir por los partidos políticos en el colegio electoral, o si alude a su actitud en función de gobierno. Desde luego que en el respeto a las mayorías y a las minorías —ya que todas al fin son gobierno—, radica el fiel ejercicio de la democracia. Pero yo me pregunto: ¿cómo, cuándo y en qué forma se cumple este derecho de la mayoría? Esto depende de la interpretación que se haga del juego correcto y normal de nuestro régimen representativo.

Pienso que en este punto, en síntesis, está el corazón o el cerebro del estatuto que estamos considerando.

En el debate en particular he de reiterar esta pregunta a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales: ¿qué se entiende por el derecho de las mayorías a gobernar? ¿Se entiende acaso la conducta a seguir en el colegio electoral que obligue en cierta forma a votar por la primera minoría? Esta pregunta

me parece fundamental. Hemos vivido una experiencia reciente; un partido político con el 25 por ciento de los votos, la mayoría mayor, digamos, de las que se presentaron a los comicios, fue apoyado por electores de otros partidos, que le dieron así mayoría. ¿Debe ser esta la norma en el futuro?

Quiero aclarar que, así como postulo la supresión lisa y llana de este artículo, fundamentalmente soy también enemigo de toda clase de proscripciones. Hablemos con claridad. ¿Cuáles son los grupos políticos que en este país y en esta coyuntura electoral, particularmente, están sujetos a posibles o eventuales proscripciones? Son el peronismo; en cualquiera de sus manifestaciones o a través de los partidos políticos que pudieran representarlo, y el comunismo. Personalmente entiendo que los dos partidos deben actuar con absoluta libertad. A aquellos que dicen que deben mantenerse determinadas barreras para fortalecer la democracia, les digo que ésta tiene su mejor defensa en su ejercicio pleno. Creo que la libertad se defiende acentuando la práctica de la libertad. Creo que el mejor antídoto para combatir el totalitarismo, en cualquiera de sus formas, es el ejercicio de la democracia, y el ejercicio cabal de la democracia y de la libertad demanda posibilitar la intervención de todos los sectores sin proscripciones de ninguna naturaleza.

Pero así como entiendo que esta libertad debe ser amplia, no sujeta siquiera a interpretaciones de tipo judicial, también considero que la democracia, como sistema de vida, debe defenderse; y que al dar posibilidades iguales a todos los grupos políticos para cambiar un sistema de vida —cambio factible por el triunfo de algunos de esos grupos— la fracción victoriosa debe contar, para serlo de verdad, con la auténtica mayoría, esto es, con el 51 por ciento de los votos. Por eso entiendo que no puede establecerse una cláusula que sugiera la necesidad o entañe la obligación moral de que en el colegio electoral se deba votar por la minoría mayor. Estimo que en el juego normal y limpio de la democracia los partidos democráticos deben votar por el partido que ha recibido la mayoría de los votos, siempre que ese partido ofrezca garantías de mantener el régimen democrático de gobierno. Eso es lealtad para con la ciudadanía y para con la democracia, y es la manera en que han procedido los partidos políticos en la última contienda electoral.

Pero cuando el partido minoritario que tiene eventualmente la mayoría no ofrece garantías de continuidad para el régimen democrático, los partidos tienen la obligación —no la opción, sino la obligación— de unirse para evitar cualquier cambio brusco por el que no se ha pronunciado la mayor parte de la opinión pública.

Hago estas reflexiones, señor presidente, porque me inquietan mucho las implicancias futuras de este inciso. Lamento que no esté presente el señor presidente de la Comisión de Asuntos

Constitucionales porque desearía que me explicara claramente si este inciso i) está referido a la acción de los partidos políticos en el gobierno, o alude a la acción a seguir por los representantes de los partidos políticos en los colegios electorales. De cualquier manera considero que para evitar ambigüedades posteriores del tipo a que me he referido, lo mejor es eliminar este inciso. Desde ya, anticipo mi opinión de que se debe suprimir todo el artículo.

Entiendo que se ha querido terminar con las proscripciones. Este es el espíritu de la Cámara. Se ha querido dar fiel cumplimiento a la cláusula constitucional que fija nuestra forma de gobierno como republicana, representativa y federal. Republicana, es decir democrática: el gobierno es de todos, el gobierno es del pueblo; representativa, pues se lo ejerce por medio de representantes. Pero todos los ciudadanos, sin exclusiones antidemocráticas, a través de sus representantes, deben ejercerlo.

Al hablar de la representatividad no puedo dejar de mencionar algunas expresiones acertadas que han sido vertidas con referencia a la crisis de representatividad que padecen los partidos políticos argentinos en este momento. Este es el gran problema que está afectando al mismo régimen democrático: la crisis de representatividad.

El diputado Musacchio, citando al jurista español Jiménez de Parga, que a su vez reitera algunos pensamientos de León Duguit, manifestó que la crisis de la representatividad se da en la falta de contacto que existe entre la base, el elector primario, y el legislador o gobernante que lo representa. Es decir, en ese vacío que se produce automáticamente después del comicio, entre la base y la cúspide. Entre una y otra, por falta de comunicación directa, comienzan a actuar los grupos que ayer analizara en su exposición, meditada y medulosa, el señor diputado Muniagurria, los grupos llamados de presión o de interés, y que, como acertadamente manifestaba el diputado Musacchio, actúan en ese vacío en virtud de transformadores políticos, distorsionando muchas veces la opinión pública, es decir, la del elector primario, y llevando, ya transformado, el pensamiento real de su representado al hombre que está en la función de gobierno.

Naturalmente, este proceso distorsionador es una de las causas —quizá la causa fundamental— de la crisis de la representatividad de los partidos políticos. Entiendo, señor presidente, que ésta es una de las causas, pero no la única. El señor diputado Musacchio también manifestó que esa crisis de representatividad se daba porque el gobierno —y esto se dijo durante el debate sobre los contratos de petróleo—, ante realidades concretas no pudo cumplir adecuadamente con los programas electorales. Entonces se pierde la autenticidad y se cae en crisis de la representatividad. Yo diría que esta crisis

en los partidos políticos actuales que han tenido oportunidad de ocupar el gobierno, estriba fundamentalmente en que antes del comicio la energía se despliega en acentuar la estrategia electoral y no en perfilar con la misma seriedad los objetivos de gobierno; que la acción de los partidos está enfocada más, en relación con esa estrategia que con la posibilidad de llevar sus objetivos a la práctica cuando se llega al gobierno. Por ello, cuando se arriba a la función pública se cae en esa crisis de la representatividad porque resulta imposible cumplir desde arriba lo que se prometió desde abajo.

Es necesario que todos los partidos políticos ajusten su conducta preelectoral con seriedad, para que su actitud en el gobierno pueda ser homogénea; porque si no, esta crisis persistirá y quitará definitivamente autenticidad a los partidos políticos. Serán vanos y estériles, entonces, todos los esfuerzos que hagamos, por más estatutos que dictemos para salvar la democracia.

Enfocando el reglamento que va a reglar la vida y el juego de las instituciones clave de la democracia y que le va a dar jerarquía legal, casi diría constitucional, no podemos menos de referirnos al régimen de la proporcionalidad. Este estatuto, quizás imperfecto, tiene el mérito de ser sancionado por el primer Congreso de la proporcionalidad, evidentemente, acabada expresión de democracia. Cuando me refiero a este ensayo feliz, a la proporcionalidad, lo hago no sólo en cuanto posibilita que en el recinto parlamentario estén representadas todas las corrientes de opinión, sino a su vigencia en la elección del presidente de la República, por vía de un colegio electoral elegido con el sistema.

Yo estimo, a la inversa de muchos sectores, que el actual Poder Ejecutivo y el actual presidente de la República son los primeros votados y no optados por una gran mayoría argentina. El pueblo, hasta esta última elección, no tuvo otra posibilidad que la de optar entre dos figuras que se perfilaban con las mayores posibilidades. Es decir, que sólo optaba. En cambio, merced al sistema utilizado en esos comicios, el actual presidente, el señor Illia, es el único votado por la ciudadanía; aunque lo fuera en segundo grado. El pueblo argentino votó en primer término a los candidatos de su preferencia, a los propuestos por sus respectivas agrupaciones políticas; y la UCRP reunió alrededor del 26 ó 28 por ciento de los sufragios, lo que no constituye, de ninguna manera, mayoría absoluta. Pero en el colegio electoral los representantes directos de la gran mayoría del electorado, libremente, y sin componendas, con una limpieza que hace historia y sienta un precedente digno en la Argentina, eligió a la minoría más votada y le dio el aval a ese presidente. No lo tuvo en primer grado porque el pueblo argentino —felizmente— no está afectado por concepciones masivas. Es incapaz de

discernimiento político; y en la instancia de segundo grado, a través del colegio electoral, eligió al candidato que, con diversidad de matices, nucleaba, empero, según el sentir de los partidos políticos, el sentimiento general mayoritario.

Por eso yo sostengo que este gobierno no ha sido elegido simplemente por el 26 por ciento de los votos. Está apoyado por la auténtica mayoría del pueblo argentino; y esto ocurre por primera vez en la historia política argentina, gracias al sistema de la representación proporcional.

Sr. Sago. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Amura. — Sí, señor diputado.

Sr. Sago. — Lo que expresa el señor diputado puede aceptarse dentro de la relatividad con que se mueve la democracia argentina en los últimos años, porque desde el año 1930 hasta ahora, francamente, no hay un solo presidente que haya sido elegido con el verdadero sentido democrático del pueblo argentino. Hay presidentes que entraron por proscripciones; otros por fraude; y otros, sí, por el voto masivo del pueblo. Pero con una relatividad tan grande que podemos decir que desde el año 1930 hasta ahora la democracia argentina no ha funcionado con el verdadero sentido democrático que le quiere dar todo el pueblo.

Sr. Domínguez. — Estire la fecha un poco más. El fraude no nació en el año 30 en el país. Los que hemos vivido antes de esa fecha lo sabemos.

Sr. Casas. — Y excepto la década de 1945 a 1955.

Sr. Ghioldi. — Sí, porque de 1945 a 1955 hubo una dictadura.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — De acuerdo, señor diputado Sago. Yo no he dicho que éste es el ensayo más perfecto sino que es el primer ensayo feliz de la proporcionalidad. Naturalmente que no puede ser perfecto. Hay que tener en cuenta que venimos de la distorsión y la anarquía, de manera que la proporcionalidad ha dado la posibilidad a una mayoría argentina de tener un presidente representativo de esa mayoría. Aca tendríamos que llegar a hacer el análisis de los gobiernos votados por grandes mayorías.

Sr. Sago. — No existe gobierno de la proporcionalidad. Hay un Parlamento, pero el gobierno no lo sigue ejerciendo el Poder Ejecutivo, como cuando la ley Sáenz Peña. La absoluta y total responsabilidad del gobierno está en el partido que ha triunfado. Se llama gobierno de la proporcionalidad cuando los distintos sectores políticos tienen responsabilidades en alguna acción de gobierno.

Sr. Amura. — Yo entiendo que esta experiencia realizada en nuestro país —y esto ya referido al mecanismo y al régimen electoral— es promisoría. Probablemente el señor diputado se refiera a que no estamos en un régimen parlamentario. De acuerdo; pero por regla general, en los países europeos con régimen parlamentario el Poder Ejecutivo se halla sujeto al Parlamento, porque viene de él, y entonces se impone la coalición. Este es un inconveniente con que han tropezado los países que tienen ese régimen, porque el Ejecutivo se encuentra ligado a los vaivenes y a las contradicciones del Parlamento y a los cambios súbitos de política. Esto ha acarreado —y es lo que motiva la preocupación de los dirigentes políticos de esos países— la inestabilidad y las frecuentes crisis de los gabinetes.

En nuestro país se ha realizado un feliz ensayo. Yo entiendo que también hay un presidente de la proporcionalidad porque, si bien el Poder Ejecutivo no puede ser un mosaico de opiniones como es el Parlamento, ha sido elegido en el Colegio Electoral, sin componendas y libremente, por otros partidos políticos, incluso por aquellos que son opositores en este Parlamento. Y la gran ventaja de este régimen nuestro de la proporcionalidad es que, una vez elegido, el presidente de la República no queda sujeto a los vaivenes de la política.

Por eso entiendo que este ensayo, respecto a la composición del Parlamento y a la elección del presidente de la República, puede ser el primer paso para dar una solución acertada al problema político. Queda perfectamente asegurada la división de los poderes, la independencia del Ejecutivo con respecto del Legislativo, y posibilita a la vez que todos los sectores intervengan en la elección del presidente.

Yo entiendo que es un ensayo afortunado y plausible, incluso para el gobierno, porque este Congreso, en el que ningún sector tiene mayoría absoluta, ha logrado la grata experiencia de lograr la colaboración de todos los bloques para no obstruir la labor del gobierno. Esto debe reconocerlo el Poder Ejecutivo; todo el Parlamento ha colaborado. Lo han hecho todos los bloques, aun los opositores recalcitrantes; y yo no puedo dejar de mencionar en este recinto y en esta oportunidad la posición levantada y sería, durante el debate del petróleo, de un diputado opositor perteneciente al bloque justicialista, el señor diputado Villanueva, quien en su exposición procuró comodizar la acción del gobierno con respecto a la política petrolera a seguir, pensando realmente en el país más que en la estrategia política, y procurando clarificar la posición de los poderes públicos para dar solución satisfactoria a problemas fundamentales de la República. Este ejemplo del señor diputado Villanueva, que me complace en recalcar, ha sido el patrón común

de este Parlamento que ha contribuido para que este primer intento de proporcionalidad haya resultado un ensayo exitoso.

Por otra parte, aunque no voy a mencionar el nombre, sí quiero citar el concepto, que es importante, de un prominente dirigente radical del pueblo, quien me manifestara particularmente, poco tiempo después de realizados los comicios en el país y de haber sido ungidos los actuales presidente y vicepresidente de la República: «Yo soy partidario del sistema de lista incompleta, del régimen de mayoría y minoría. Ha sido prácticamente un estandarte de nuestro programa; hemos nacido a la vida pública, a la función de gobierno gracias a esta ley, que costó años de luchas y de sacrificios; pero entiendo que la proporcionalidad en cierta forma está contribuyendo a pacificar a la República. Creo que puede ser uno de los vehículos para pacificarlo y yo, dirigente radical, que he abogado por la ley Sáenz Peña, voy a medir el éxito de la gestión de gobierno en relación directa con el éxito que este gobierno procure al primer ensayo de representación proporcional realizado en el país.»

Esta es la opinión de uno de los más prominentes dirigentes del radicalismo del pueblo, opinión que por cierto lo honra.

—Suenan la campanilla indicadora de que ha vencido el término de que dispone el orador para hacer uso de la palabra.

Sr. Amura. — Advierto que ya ha expirado el término de mi disertación, de manera que no voy a insumir más tiempo en mérito a la labor de esta Cámara y a la necesidad de votar hoy, en general, este proyecto.

Tendría que decir muchas cosas más sobre este ensayo de la proporcionalidad realizado en el país, pero voy a concluir mi exposición significando que por encima de los defectos de este estatuto, es un primer ensayo para dar la jerarquía que corresponde a las organizaciones cívicas, a los partidos políticos. Hay que estimular permanentemente a estas organizaciones para que se constituyan en escuela de la democracia, en ateneos para el estudio de los problemas públicos y en gimnasios intelectuales para el ejercicio del poder.

Quizás este proyecto sea muy ambicioso, quizá requiera podas que lo agilen, porque la democracia es algo más que una mecánica o una yuxtaposición de tecnicismos: la democracia es una forma de vida que, como la libertad, uno de sus atributos máximos, más se siente que se enseña. Pero reitero que esta libertad debe defenderse y que este proyecto ha procurado, de buena fe, esa defensa.

Sin embargo, evitemos que las corazas sean demasiado rígidas, al extremo de impedir los movimientos. No nos asuste la libertad. Siempre ha tenido reservas suficientes para combatir al despotismo; nunca le han faltado a la libertad

esas reservas. No nos atemorice que por una cláusula omitida pueda colarse en este recinto alguna gente del totalitarismo. Casi mejor que lo tengamos aquí para controlarlo y no que multiplique sus esfuerzos en la clandestinidad para minar las instituciones.

La experiencia nos dice que la presión no se elimina multiplicando los cerrojos, sino por el contrario, abriendo válvulas de escape o suprimiendo las causas que provocan esa tensión. Esta es la técnica que yo espero de este instrumento cívico; un cauce y no una compuerta; un canal para que todas las expresiones cívicas puedan exteriorizarse, disciplinarse, robustecerse y convertirse en fuerzas fecundas para brindar al país las soluciones y los hombres que la República demanda para su desarrollo y para su consolidación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Cantoni.

Sr. Cantoni. — Señor presidente: en mi carácter de diputado nacional por San Juan, perteneciente a la Unión Cívica Radical Bloquista, deseo intervenir en este debate en el proyecto de ley orgánica de los partidos políticos.

Estimo que el dictamen de la mayoría, producido por las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, merece en general el apoyo de los diversos sectores políticos que componen esta rama del Parlamento. No obstante, he de señalar algunas objeciones, tal vez más de forma que de fondo, inspiradas en el proyecto en consideración.

Durante la discusión en particular me referiré concretamente a las prescripciones contenidas en el inciso b) del artículo 39, en cuanto ellas importan, a mi criterio, un desconocimiento, quizá por omisión o por considerarlo tácito, de la esencia federalista de nuestro sistema de gobierno, taxativamente establecida en el artículo 19 de la Constitución Nacional en vigor. Esta consigna al respecto: «La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal».

Abundando en otras consideraciones voy a recordar a Edmund Burke, que sostiene que un partido político es «un núcleo de hombres unidos para promover mediante un esfuerzo conjunto el interés nacional sobre algún principio particular en el que todos están de acuerdo.» Esta aserción es exacta, señor presidente, pues todos, absolutamente todos quienes formamos parte de este honorable cuerpo, aun con distintos puntos de vista y diferentes posiciones filosóficas, coincidimos en lo primordial: en el progreso y el engrandecimiento de la patria común.

Bien lo ha dicho Burdeau: «Todas las tendencias que se enfrentan en la vida política, todos los poderes rivales cuya competencia hace al fondo de la actividad pública, todas las di-

versidades de temperamento, de aspiración y de gusto que separan a los hombres, sus ambiciones como sus intereses, se expresan hoy a través de los partidos políticos.» Y, agrega: «El partido es la forma concreta de los poderes, es la figura tangible de las ideas de derecho, es el instrumento por el cual el individuo tiene el sentimiento de participar en la vida política.» Vale decir, que estructurar jurídicamente los órganos, mediante los cuales se manifiesta la ciudadanía en sus múltiples formas creadoras es mejorar el poder político gestando el bien general de la comunidad.

Puede intuirse de lo dicho que la vida de tales asociaciones tiene íntima relación con las instituciones básicas de la argentinidad. Si ellas son débiles o imperfectas no cumplirán sus objetivos y favorecerán cualquier aventura de tipo absolutista o de frustración de las esperanzas populares.

Bryce, el insigne tratadista británico, comentando las instituciones públicas de los Estados Unidos de América en 1888, decía que «El espíritu y la fuerza de los partidos han sido tan necesarios para el funcionamiento de la máquina gubernativa como el vapor para la locomotora o, lo que es lo mismo, para cambiar la comparación, la asociación y la organización de los partidos son para los órganos del gobierno, lo que los nervios motores para los músculos, tendones y huesos del cuerpo humano. Transmiten la fuerza motriz, indican las direcciones en que han de moverse los órganos.»

Aun antes de aparecer la obra aludida, Grover Cleveland en el momento de aceptar la candidatura a la presidencia de la Unión, declaraba en 1884 que «los partidos son la consecuencia necesaria de nuestras instituciones».

Apelando a juicios de tan eminentes pensadores nos cabe preguntar: ¿qué consecuencia sobrevendría de no contar con un estatuto capaz de garantizar a la ciudadanía el pleno goce de los derechos constitucionales de elegir y ser elegido?

Los defectos del régimen hasta ahora vigente están a la vista. Excluye de la participación en el acto fundamental de la democracia, el sufragio universal, a grandes masas de electores proscritos en virtud de normas que, pretendiendo salvaguardar la esencia del republicanismo, lo han vulnerado en lo primordial, al suprimir, lisa y llanamente, el imprescriptible principio de la igualdad ante la ley. Al respecto, recuerdo el decreto de Mariano Moreno al suprimir el «Decreto de honores al presidente de la Junta». Decía el fogoso secretario del primer gobierno patrio: «La libertad de los pueblos no consiste en palabras ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad y ese canto maquinal es muy compatible con las cadenas y opresión de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos

sean libres observemos religiosamente el sagrado dogma de la libertad.»

El nuevo ordenamiento a través del resorte de la ley permitirá la intervención de todas las tendencias en que se divide el pensamiento político argentino, con la natural e ineludible sujeción a la letra y al espíritu de nuestra Carta Fundamental. Únicamente procúrase evitar el riesgo de caer en regímenes contrarios a las auténticas tradiciones de la República.

Esperamos que por la vía de las interpretaciones judiciales no quede jamás desvirtuada una ley generosa y amplia de la que el pueblo espera resultados mensurables y positivos.

Sin duda, el dictamen de la mayoría —ya lo he dicho— no significa la elaboración de un proyecto perfecto o que contemple el ideal que todos ambicionamos. Empero, indica un rumbo, un saludable rumbo para sobreponernos a los cataclismos cívicos que han resquebrajado gravemente las instituciones angulares de la Nación, provocando un peligroso y general estado de descreimiento.

Desquiciado el país por imperio de circunstancias que no es del caso analizar en este momento, necesitamos nuevas bases y puntos de partida, como los enunciados en su época por Alberdi, para recomenzar nuestra marcha irguiéndonos sobre la postración, la atonía y el escepticismo.

Ya el ilustre tucumano recién citado, en sus *Bases*, se oponía a la monarquía y expresaba: «El problema del gobierno posible en la América antes española, no tiene más que una solución sensata: ella consiste en elevar nuestros pueblos a la altura de la forma de gobierno que nos ha impuesto la necesidad: en darles la aptitud que les falta para ser republicanos.» Señalaba el autor de *El crimen de la guerra* los peligros de la federación pura para las provincias que podrían quedar separadas del cuerpo de la Nación y mostrábase partidario de un sistema mixto federal y unitario, que es el que creo debemos propugnar en todo tiempo.

«Las cosas felizmente nos traen hoy —sostenía el estadista— al verdadero término, al término medio que representa la paz entre la provincia y la Nación, entre la parte y el todo, entre el localismo y la idea de una República Argentina.»

De este equilibrio o armonía entre las facultades del poder central y las que corresponden a las provincias saldrán las soluciones que reclaman insistentemente todos los habitantes de nuestro dilatado territorio.

Así como Alberdi buscaba la fórmula salvadora así nosotros debemos imitar tan patrióticas inspiraciones. Luchemos, entonces, porque esta Nación por todo concepto privilegiada, no vuelva a dar al mundo el deplorable espectáculo de los regímenes autocráticos, ni tampoco el de los vengadores o «libertadores» que engen-

dran a su vez insensibles camarillas oligárquicas.

Bien sabemos que por el camino de la reacción de un sector contra otro en el poder, se dan las condiciones para que impere la disolución anárquica que desemboca fatalmente en subversión de los valores y en el caos total.

Nos encontramos, como antes decía, en otro recomenzar. Todo hay que hacerlo o rehacerlo conforme a los nuevos tiempos que nos toca vivir. Para ello urge crear las armazones jurídicas imprescindibles y planificar, empezando por nosotros mismos, los hombres políticos, los moldes en los cuales ha de adquirir forma nuestra democracia.

Esas direcciones son las que debemos dar con el concurso de la ley orgánica de los partidos políticos. Y en tal sentido, la primera conquista que todos anhelamos será la de la unión argentina, haciendo imposible la existencia de hijos y entenados.

No importa cuáles sean los desvelos o las discrepancias que puede ocasionar este debate; lo importante reside en no dejar nada sin prever, ni nada librado al azar de las improvisaciones.

Creemos que el estatuto es honrado en sus postulaciones, pero todos tenemos la obligación de prever sus alcances y observarlo con ojos analíticos. De él depende, en gran medida, un futuro de paz y de orden, de madurez cívica o un continuo enfrentamiento entre facciones, cuando no la quiebra del régimen democrático mediante la usurpación, siempre en acecho, de la fuerza.

He hablado, señor presidente, del descreimiento colectivo hacia los hombres y las organizaciones políticas. Tal vez esta dañina proclividad se debe a la falta de una adecuada ley que dé a las agrupaciones cívicas orientaciones claras y a los electores normas de conducta que no permitan equivocar el derrotero.

También hay en todo esto —y debo recordar aquí a mi ilustre comprovinciano Sarmiento, cuyo apotegma «educar al soberano» tiene plena vigencia— un problema de educación popular.

Pero cualesquiera fueren las causas de nuestro deterioro institucional, lo cierto es que debe reivindicarse el prestigio de la palabra «política», mejorando sus prácticas y ciñéndose a estrictos cánones éticos.

Quiero recordar a un ilustre hombre público argentino, Leandro N. Alem, que en 1880, desde su banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, afirmaba: «Yo también pertenezco a un partido político; pero debo decirlo con franqueza, que un partido político si no quiere descender, si quiere merecer los respetos del país, no debe nunca lanzarse en estas corrientes impropias e inmorales; un partido político tiene una grave misión que llenar; no es un grupo de asaltantes o una logia tenebrosa que está en acecho del poder, como un botín,

sin escrúpulos en los medios que empleo; un partido político tiene más alta misión, repito, y las fuerzas inteligentes que dirigen sus movimientos, graves responsabilidades y muy graves deberes que llenar. Ellos no deben descender al seno de las masas de sus adherentes para corromper su conciencia y contrariar su espíritu de este modo; por el contrario, debe levantarlo a esas regiones serenas, donde el cumplimiento del deber, la lealtad del sentimiento respecto a la ley y a las instituciones del país, constituyan un culto permanente.»

Creo, señor presidente, que esta ley orgánica ha de permitir el funcionamiento de partidos políticos con el sentido docente que quería Alem. Sólo así la idea del político profesional como sinónimo de deshonestidad y corrupción desaparecerá, desvaneciéndose de la mente de muchos ciudadanos la imagen de que el político que no roba o delinque en el ejercicio de sus funciones es simplemente porque no tuvo oportunidad.

El fortalecimiento de tal concepción de la política, a la que nosotros no somos ajenos, por supuesto, nos llevará a organizar los poderes que la República reclama y reclamará siempre. Entonces el desprecio que suele suscitar el político profesional se trocará en respeto y, acaso, en admiración hacia los sacrificios que realiza en aras de la felicidad de sus compatriotas.

Pensaba el publicista suizo Bluntschli que un partido —la palabra parte— así lo indica— es siempre una fracción del todo. No representa, entonces —añadía—, «más que el sentimiento de una parte de la Nación y no debe jamás identificarse con el Estado bajo pena de ser culpable de orgullo y de usurpación. Puede combatir los otros partidos; no puede ignorarlos ni esforzarse en abatirlos o hacerlos desaparecer. Un partido no puede subsistir solo; es la existencia de un partido opuesto lo que le da el ser y la vida».

He traído a colación esta cita porque observo con satisfacción que el artículo 22 en su primera parte, conceptúa como actos violatorios, entre otros, los siguientes: la concentración del poder político, social o económico, y en el inciso h) la implantación por medio de leyes o decretos de proscripciones o inhabilitaciones electorales de partidos determinados, como así mismo el desconocimiento de los derechos humanos.

Pero mientras un artículo del proyecto de ley a que me refiero se pronuncie contra la concentración del poder político, social o económico, otro, el que mencionaba al comienzo, o sea el artículo 3º, inciso b), consigna como condiciones sustanciales el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano, sin enunciar para nada la palabra federal.

Los hombres que hemos hecho una bandera del derecho que corresponde a las provincias en el desarrollo armónico de sus ingentes posibilidades, no comprendemos por qué se elude la palabra «federal», máxime cuando más adelante

se manifiesta categórica oposición a toda concentración del poder político, social y económico. Los partidos, cualesquiera sean sus postulaciones programáticas, o sus alcances electorales que desconozcan la esencia federalista y autonómica de nuestro régimen político, de hecho propician la monstruosa concentración del poder político, social y económico. No otra cosa representa la metrópoli y su gigantesco y casi único puerto. ¿No es ésta, señor presidente, una abierta violación que el artículo 3º, inciso b), inflige al artículo 22, parte 2º, inciso a) del mismo estatuto?

Yo me voy a pronunciar, en síntesis, por la aprobación en general del dictamen mayoritario, pero en la discusión en particular insistiré en los aspectos cuestionados.

No se trata de un simple prurito de político de tierra adentro. Hablo sin resentimientos ni ideas excluyentes. Pero si queremos realmente un régimen legal perfeccionado para la República, que asegure a todos sus hijos el derecho a la igualitaria participación en la cosa pública, debemos eliminar las posibles causas de fricción entre Buenos Aires y el interior del país.

Confío, entonces, que hemos de superar con buena voluntad las fases negativas que pudiera contener el dictamen que vamos a sancionar.

De tal modo, todos habremos contribuido a abrir los cauces por los cuales la República pueda hallar su meta definitiva. Es decir, una democracia de reales perfiles sociales que asegure la igualdad, la libertad y la justicia a todos los argentinos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — Señor presidente: evidentemente en esta hora de rumores, hora en la cual los diarios de la República están dedicados a expandir también las más extraordinarias noticias, y frente, también, a algunas afirmaciones de personas prominentes, entre otras, por ejemplo, mi distinguido y querido amigo el señor diputado Cornejo Linares, se hace necesario que para entrar en debate fije cuál es la posición política que ilumina mi espíritu.

Previamente quiero referirme a este aspecto porque en modo alguno quisiera que se interprete que este bloque justicialista está jugando a las escondidas. Por ello, en primer lugar, afirmo que soy católico y que soy peronista. Y cuando digo que soy peronista me veo también en la necesidad de aclarar para que no quede duda alguna, que soy peronista con Perón. Y cuando digo que soy peronista con Perón, estoy afirmando que aprendí perfectamente bien la lección; y la lección nos indica que el mismo Perón ha expresado que vamos a realizar la gran jornada de la institucionalización del movimiento.

De tal suerte que desde ese punto de vista estoy absolutamente en contra de toda digitación, como así mismo en contra de todo intento de organizar a nuestro movimiento de arriba para abajo; ello quiere decir que estamos en la

corriente que lucha por la institucionalización del movimiento, es decir, que bregamos y realizaremos nuestra propia organización desde abajo para arriba, lo que es tendencia republicana y democrática. Quiero decir, repito, que somos peronistas con Perón o, en otras palabras, que seguimos la corriente de Perón como bandera y con las banderas de Perón.

Dicho esto, señor presidente, tengo ya la tranquilidad espiritual suficiente como para entrar en materia, pero para esto se hace necesario determinar, en primer lugar, cuál es la posición de nuestro bloque frente a un estatuto de los partidos políticos. Interpretamos que un estatuto político debe contener el mínimo de disposiciones para garantizar un máximo de libertad a los partidos políticos.

En segundo lugar, afirmamos que, siguiendo ese concepto o premisa general, no hubiéramos apoyado un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que hubiera reproducido en términos generales el proyecto del Poder Ejecutivo, que adolecía, a nuestro entender, de graves defectos en cuanto permitía la continuidad de las proscripciones.

En tercer lugar, creemos que este Estatuto de los Partidos Políticos tiene la gran virtud de significar un verdadero paso hacia adelante con relación a todos los estatutos vigentes y proyectos que venían sosteniéndose desde el año 1955 en adelante.

Finalmente, debo decir que si hemos expresado desidencias parciales, ha sido con el ánimo de llegar precisamente a la estructuración de esa premisa general, o sea que aspiramos a un estatuto con un mínimo de disposiciones reglamentaristas y que garantice un máximo de libertad a los partidos políticos.

Establecidas, entonces, estas ideas generales, que obran a manera de introducción, debo referirme a un punto que yo intitularía: la necesidad argentina de la hora actual y nuestros ideales políticos frente a la democracia.

He de referirme, como lo anticipé en un primer momento, a la necesidad argentina en la hora actual. Yo diría, señor presidente, que todos los argentinos, el sabio o el hombre de la calle, el más inteligente o el más desprevenido, están en condiciones de determinar cuál es la necesidad argentina de la hora actual.

Podría sintetizar la idea general de mis compatriotas de toda la República, diciendo que la necesidad de la Argentina de la hora actual se debe contratar en el esfuerzo que realice el gobierno y el Parlamento para crear las condiciones posibles que nos permitan decir que ha llegado la hora en la cual todos los argentinos, defendiendo sus respectivas ideas políticas, se respeten y comprendan para la conquista de los grandes ideales de la patria.

Enunciado este concepto, surge en primer lugar la pregunta de por qué los argentinos no pueden encontrar hasta este momento el camino para ese respeto y esa comprensión. Creo

que una de las trabas fundamentales para llegar a ese objeto es la forma como se mira el pasado. Yo soy de los que creen que debemos mirar el pasado. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, para corregir nuestros propios defectos, e invitaríamos a que hagan lo mismo todas las demás corrientes políticas. También lo hacemos para inspirarnos en las grandes ideas de nuestra doctrina y aplicarlas victoriosamente en el porvenir.

Creo que el defecto de los argentinos que miran el pasado consiste en considerar que en él existen, única y exclusivamente, defectos en algunas corrientes políticas. Un conjunto más o menos importante de dirigentes, por ejemplo, interpreta que el peronismo ha tenido solamente defectos, sin entrar a considerar las grandes realizaciones peronistas, concretadas a través del ideal de la justicia social. Insisto en que, a nuestro entender, la premisa fundamental consiste en crear las condiciones para que los argentinos se respeten y comprendan, y de esa manera luchar juntos por los grandes ideales de la patria. De esa premisa general deduzco que quienes están en favor de la libertad política están también, indudablemente, en favor del respeto y de la comprensión de los argentinos. Y quienes están en contra de la libertad política, o sea en el mantenimiento de las proscripciones, están precisamente en contra de ese respeto y de esa comprensión de los argentinos. En otras palabras, yo diría que, incluso están en contra de la República misma, porque están pretendiendo nada menos que alterar la paz de la República.

Este es un problema que, como dije al comienzo, todos los argentinos tenemos la más absoluta certidumbre que es así. Nada más fácil para demostrar de una vez por todas que los argentinos tenemos la noción clara de este problema es que si estamos divididos en justicialistas y antijusticialistas no hay duda que para lograr la convivencia pacífica nosotros, los justicialistas, si bien debemos reconocer nuestros propios defectos para superarlos, debemos también tener el indiscutible derecho de luchar por los grandes ideales de nuestra doctrina, y los antijusticialistas deben comprender que no todo lo justicialista es malo y que en la década 1946-1955 hubo grandes realizaciones que significaron nada menos que dar un paso adelante en favor de muchas instituciones que hacen a la vida misma de la República.

Debo insistir en este tema porque si la población de la República se divide, por su credo político, en justicialistas y antijusticialistas, estimo que si estos últimos no logran comprender esa necesidad argentina de la hora actual que es el respeto y la comprensión, no van a poder nunca hacer la paz del país, a no ser que usen el único camino, o pretendan usarlo, de hacer la liquidación física de todos los justicialistas; semejante aberración, lógicamente, se opone al

modo de ser de la República misma, como a los grandes ideales, al par de los riesgos de la sangre y del odio por los siglos venideros de la patria.

En consecuencia, la premisa fundamental que creo haber demostrado exhaustivamente es que es necesario de una vez por todas que, comprendiendo sus propios errores, todas las fuerzas políticas de la República, aunque al mismo tiempo luchando por sus respectivos ideales, hagan posible que los argentinos se respeten y se comprendan para la conquista de los grandes ideales de la patria.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Casas. — Voy a referirme ahora a la segunda parte de este capítulo, o sea el relativo a nuestros ideales políticos y establecer la posición de esos ideales frente a la democracia.

Sr. Ghioldi. — ¿Por qué no «en» la democracia?

Sr. Solana. — El señor diputado es un nostálgico de la Junta Consultiva, donde no hacen falta votos.

Sr. Presidente (Del Pero). — Ruego a los señores diputados no interrumpir al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — La verdad es que no escuché la interrupción del señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Decía que en lugar de decir «frente», por qué no decir «en» la democracia.

Sr. Casas. — Es evidente que la capacidad dialéctica del señor diputado Ghioldi lo lleva a crear un verdadero sofisma. Pero trataré de satisfacer la inquietud del señor diputado.

Cuando yo me refiero a nuestros ideales políticos frente a la democracia no quiero decir que nuestros ideales estén enfrentados con la democracia, sino que frente a este problema de la democracia, repetido en diversos artículos del proyecto de estatuto que consideramos, es absolutamente imprescindible que fijemos el criterio de cómo el justicialismo está efectivamente dentro de la corriente democrática, porque el justicialismo es auténticamente republicano.

Con esta aclaración creo no solamente haber satisfecho la inquietud del señor diputado sino al mismo tiempo —permítame la expresión, querido amigo diputado Ghioldi— haber desbaratado el propósito sofístico que él ha tenido, pretendiendo hacer aparecer al justicialismo como enfrentado con la democracia, lo que en modo alguno ha sido el propósito de mis expresiones.

Sr. Ghioldi. — Creo que la aclaración ha sido útil y mi pregunta no tenía el propósito de enfrentarlo con la democracia.

Sr. Presidente (Del Pero). — ¿El señor diputado Casas ha concedido una interrupción?

Sr. Casas. — Si el señor diputado Ghioldi me la solicita, no tengo ningún inconveniente en aceptarla.

Sr. Ghioldi. — No tengo nada más que decir.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — Vamos a ver entonces, señor presidente, cómo el justicialismo es una corriente política de contenido absolutamente nacional y popular, eminentemente argentinista y profundamente republicano. Ya por definición, desde los albores mismos de este movimiento político, se dijo con toda claridad que es profundamente humanista y cristiano. Para demostrar este aserto bastaría, simplemente, con decir que hay dos finalidades fundamentales que persigue el justicialismo. ¿Cuáles son? En primer lugar, la felicidad del pueblo. Para llegar a ella, el justicialismo se ha trazado un camino. Y ¿cuál es ese camino? Sencillamente, la aplicación de una justicia social.

Cuando decimos esto, nos vemos obligados a determinar cuáles son las notas esenciales que tipifican o caracterizan a la justicia social. Esas notas esenciales son las siguientes: en primer lugar, la justicia social está decididamente en contra del régimen liberal económico social y, desde ese punto de vista, podríamos decir que el justicialismo no comparte las ideas de aquellos grandes economistas, por ejemplo, que luego de la época del mercantilismo en Inglaterra, cuando esta nación había adquirido un gran predominio económico, marítimo e industrial en el mundo a través de una etapa intervencionista, crearon la teoría del liberalismo económico, precisamente, porque ya Inglaterra había adquirido esa hegemonía mundial.

Con respecto a este punto y al hecho de que nosotros estamos en contra de ese liberalismo económico social, bastaría recordar simplemente las palabras del entonces presidente de los Estados Unidos, el general Grant, cuando luego de asistir a una reunión de ciudadanos norteamericanos que propiciaban el régimen económico liberal, les contestó: «Señores, durante siglos Inglaterra ha usado el proteccionismo, lo ha llevado a sus extremos y eso le ha dado resultados satisfactorios. No hay duda alguna, que a ese sistema debe Inglaterra su actual poderío. Después de esos dos siglos Inglaterra ha creído conveniente adoptar el librecomercio, por considerar que la protección no le puede ya dar más nada. Pues bien señores, mi conocimiento de mi patria me hace creer que dentro de doscientos años cuando Norteamérica haya obtenido del régimen protector todo cuanto éste pueda darle adoptará firmemente el librecomercio.»

Esta experiencia histórica, que la traigo nada menos que de un país que todos los señores diputados están contestes en afirmar que es esencialmente republicano y democrático, como los Estados Unidos, nos hace ver que cuando el jus-

ticialismo aplicó una doctrina en contra de la tendencia económica liberal, era nada menos que para proteger los intereses del pueblo y con esto, en modo alguno el justicialismo se ha proclamado intervencionista, por cuanto es necesario recordar que el justicialismo ha sostenido la tesis de que es realista. Esto se ha sintetizado expresando que hay soluciones concretas frente a problemas también concretos.

Para fijar mejor esta idea, voy a leer el siguiente concepto: «Nosotros no somos ni intervencionistas ni antintervencionistas. Somos realistas. El que se dice intervencionista no sabe lo que dice. Hay que ubicarse de acuerdo a lo que exigen las circunstancias. Las circunstancias imponen la solución. No hay sistemas, ni métodos ni reglas de economía en los tiempos actuales. Hay soluciones concretas frente a un problema también concreto. Resuelto ese problema, se va a presentar otro quizás diametralmente opuesto al anterior. A éste le daremos una solución contraria a la anterior, pero no por sistema, sino por inteligente apreciación y reflexión del caso concreto.»

Estas que acabo de leer son palabras del entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, pronunciadas el 23 de enero de 1953. Yo diría que coinciden plenamente con las del ex presidente de los Estados Unidos, general Grant, quien sostenía que era absolutamente necesaria una posición antiliberal en la economía, y agregaba, que posiblemente en el término de doscientos años, cuando ese país del Norte hubiera alcanzado un lugar de preeminencia en el concierto internacional, cambiaría de posición. Quiere decir que también el general Grant, para hechos concretos daba soluciones concretas.

¿Y qué decir, señor presidente, de la experiencia vivida en ese sentido por los Estados Unidos, que han pasado precisamente del más absoluto intervencionismo al más crudo liberalismo económico cuando se cumplieron las previsiones del entonces presidente Grant?

Dicho esto, falta agregar otra nota esencial que tipifica a la justicia social y ella es su decidida adhesión a los principios de la economía social cristiana. En ese sentido quiero recordar que en el día de ayer un orador, el señor diputado Musacchio, dijo con razón que en los tiempos actuales la misma Iglesia ha experimentado una gran evolución, de tal manera que si sustituyéramos conceptos contenidos en las encíclicas papales, muchos creerían que estamos en una posición comunista, si previamente no se hubieran advertido que eran conceptos de esas encíclicas.

Desde hace muchos años, en los albores mismos de su nacimiento, el justicialismo ha proclamado su adhesión a los principios de la economía social cristiana. Esos principios nos dan el concepto de que la economía debe estar subordinada a la política para el cumplimiento de los altos fines de la felicidad del pueblo; o, di-

cho en otros términos, que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro del orden económico y conforme a los principios de la justicia social. Es decir, la actividad humana en torno a la riqueza económica no ha de perseguir como finalidad última el lucro individual ni la potencia del Estado, sino la justicia social, virtud moral de eminente cuño cristiano.

Y bien; sustentada en términos generales la posición doctrinaria de nuestro movimiento, yo me pregunto ¿qué argumentación lógica existe para suponer que estas teorías, que esta vocación ideológica son antirrepublicanas? Todo lo contrario; considero que el justicialismo es una conquista de la república para la Argentina, porque significa nada menos que el propósito claro y decidido de lograr la felicidad del pueblo.

Señor presidente: otra finalidad esencial que persigue el justicialismo es la grandeza de la patria. Para lograr ese objetivo, el justicialismo también se ha trazado los caminos fundamentales para llegar a esa meta, cuales son, lograr la independencia económica y la soberanía política. No voy a abundar en detalles sobre estos temas porque, evidentemente, son harto conocidos. La independencia económica y la soberanía política son caminos indiscutibles y obligados para llegar a la grandeza de la Nación.

En consecuencia, señor presidente, creo que, brevemente, he realizado un análisis de la posición ideológica del justicialismo, para concluir que frente a estos problemas de la democracia y de la República concretados en el Estatuto de los Partidos Políticos, el justicialismo es una corriente nacional y popular de eminente, claro y terminante contenido republicano, lo que hace a la democracia y que está dentro de ella. Por lo tanto, valgan mis primeras palabras que pronuncié en oportunidad de referirme a la necesidad de la hora actual, para sostener, en definitiva, que si la necesidad de esta hora consiste en que todos los argentinos se respeten y se comprendan para la conquista de los grandes ideales de la patria, se hace absolutamente necesario, como camino indispensable y lógico para llegar a ese respeto y comprensión de los argentinos, la ausencia de toda proscripción. Con la ausencia de toda proscripción estamos proclamando el principio enunciado desde un comienzo de esta exposición, o sea, que un estatuto de los partidos políticos, debe asegurar a todos los partidos la más absoluta libertad.

En consecuencia, estamos convencidos, y por eso hemos firmado el despacho de la mayoría, de que el Estatuto de los Partidos Políticos, de acuerdo con este dictamen, propicia, proclama y asegura, en definitiva, la libertad política para todos los movimientos políticos de la Argentina.

Y esta libertad política así asegurada significa —como bien lo ha dicho el señor diputado

Serú García— que si alguna juez de la república, fundado en este Estatuto de los Partidos Políticos, pretendiera establecer proscripciones, realizaría una actividad que sería realmente, delictiva y, por otra parte, crearía las bases para que no se realicen los objetivos fundamentales de la hora actual en la República; o sea, que estaría decididamente en contra de aquel concepto modular y fundamental que expresé, de que ha llegado la hora en la cual los argentinos se respeten y se comprendan para la conquista de los grandes ideales de la patria.

Como ha vencido el término reglamentario, doy por terminada así mi exposición.

Sr. Presidente (Del Pero).— Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré.— Señor presidente: una prueba de que es necesario darle nueva vigencia, a los partidos políticos, la tenemos en lo que pasa en estos momentos en el país y lo que pasa en el recinto. El país está lleno de rumores; en la calle, la gente o corre en busca de noticias o pasa absolutamente indiferente y despreocupada de todo, pensando cada uno en sus propios problemas. En el recinto, vemos que hay pocos diputados; muchos de ellos estarán sin duda en las antecámaras de la Casa de Gobierno unos o en otra parte otros, según el sector a que pertenecen, pidiendo también noticias, pero la gran mayoría fuera del recinto, donde debieran estar legislando y trabajando por el bienestar de la Nación.

Es por eso, que como nadie se preocupara de sus propias obligaciones y todos viven pendientes de lo que pasa aquí o allí o de lo que va a pasar, que el país está sufriendo las consecuencias de esa indiferencia. También estamos sufriendo los legisladores las consecuencias porque, de rebote, no se sancionan las leyes o se sancionan mal y caemos en un gran desprestigio. Esa falta de cumplimiento de la obligación por parte de todos, tanto de los de fuera como de los de dentro de la Cámara, es la que hace que nuestro país esté en condiciones deplorables.

Es indudable que debemos reaccionar ante estos hechos y debemos procurar encontrar la forma de que cambie el panorama, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Es por eso que creo que este proyecto, que tiende a institucionalizar a los partidos políticos, tiene una importancia fundamental si se sanciona y si se cumple en forma efectiva, como deseamos todos, vamos a realizar una tarea verdaderamente útil para el país.

El proyecto que se está estudiando tiende a la organización definitiva de los partidos políticos y, por supuesto, a la organización institucional del país. Ha habido muchas leyes que han tratado de organizarlos, pero la verdad es que hasta este momento no están institucionalizados. Es necesaria una ley que les dé organi-

dad. Ella prestará un señalado servicio a la democracia.

Kelsen sostiene que los partidos políticos son un factor decisivo en la formación de la voluntad estatal y por cierto que partiendo de ese principio se hace precisa la organización legal de los mismos, cuidando especialmente que dentro de cada partido impere el principio del control democrático. La democracia, dice también este autor, requiere necesaria e inevitablemente un estatuto de los partidos políticos, ya que si no existieran partidos la democracia sería algo inorgánico, sería multitudinaria o se convertiría poco a poco en una autocracia. Multitudinaria, porque el elector no estaría orientado ni tendría posibilidades materiales de estar en contacto con quienes lo dirigen o tener una guía a los efectos de saber a quién debe elegir o cómo debe elegir. La democracia de Grecia ya no es aplicable en nuestros días y por eso se tiene que realizar a través de grandes núcleos humanos, de grandes multitudes que son las que concurren a la elección.

Es indispensable, entonces, que existan partidos políticos organizados; si lo están en debidas condiciones, podremos tener una democracia orgánica que realmente responda a los objetivos que tiene este concepto.

Los más eminentes constitucionalistas de nuestro país que han tratado esta materia, consideraron que es indispensable de organización efectiva de los partidos. Así, por ejemplo, Joaquín V. González, ha dicho: «Porque es de la esencia de nuestro régimen de gobierno que nada orgánico y progresivo se pueda obtener de este orden de cosas sin la acción coherente de los partidos, los cuales, agrupándose según afinidades permanentes o transitorias, o apelando separadamente al pueblo o a las masas ciudadanas darán lugar a la lucha y compensación de las aspiraciones colectivas, hasta dar el triunfo a alguno de ellos, el cual debe fundar el primer núcleo de la sucesión normal o constitucional que se alternará con el gobierno según las libres y naturales oscilaciones de la opinión que debe darle vida. Los sectores políticos son los encargados de encauzar los distintos sectores de opinión en una democracia. Alrededor de los mismos se agrupan los ciudadanos que coinciden en las soluciones, y a través de esos agrupamientos pueden, cuando asumen el gobierno, hacer efectivos los planes, los preceptos y los fines que han tenido.» Por eso, mientras no existan partidos debidamente organizados y no tengamos partidos fortalecidos en su vida interna por regímenes democráticos, no podremos salir de este cauce equivocado en que está nuestro país y no podremos tener una democracia verdadera.

No se puede confundir la institucionalización de los partidos políticos a través de una ley orgánica, con la creación de los partidos a través de una ley, porque es un principio fundamental que los partidos existen por derecho pro-

prio, no porque la ley los cree. Los partidos políticos existen antes que la ley; los partidos políticos nacen por un anhelo de los seres humanos, por un instinto natural de los mismos, de actuar en la vida de relación, en la vida de sociedad.

Los hombres se agrupan por una espontánea determinación de su espíritu, por una inclinación natural, y cuando lo hacen con propósitos políticos, con fines de organizarse para gobernar el Estado, se nuclean en partidos políticos. Es por eso que la ley que vamos a dictar no tiene que hacer otra cosa que encauzar ese sentimiento natural de los seres humanos, ese propósito natural de organizarse en partidos políticos y dar normas para que se organicen como corresponde y cumplan adecuadamente con el propósito y finalidad de bien público que debe inspirarlos.

Desde hace muchos años en varios países se ha tratado de institucionalizar a los partidos políticos; especialmente después de la guerra del 14 en muchos países se dictaron disposiciones constitucionales, estableciendo la obligatoriedad de los partidos políticos de estar organizados. Por ejemplo, la Constitución de Checoslovaquia, la de Cuba libre en 1940, las de México y el Brasil, entre otras, institucionalizaron a los partidos políticos y dictaron disposiciones tendientes a su organización.

En otros, si bien no dictaron disposiciones constitucionales, se sancionaron leyes como la que estamos tratando ahora. Creo que es indispensable sancionar una ley de este tipo. La que vamos a dictar tiene una gran importancia, como lo ha señalado muy bien el señor diputado Belgrano Rawson en ocasión de dar el informe de la comisión, cuando dijo que esta ley va a salir por el consenso de todos los sectores políticos de esta Cámara que son, en realidad, intérpretes de casi todas las corrientes de opinión que existen en el país. Todos estos sectores políticos han coincidido en la necesidad de que se dicte una ley de esta naturaleza. Las discrepancias que existen se refieren solamente a algunos pocos artículos y aun cuando algunas son fundamentales, no alcanzan a determinar de que no se coincida en la necesidad de dictar una ley como la que se discute.

Es necesario dictar esta ley, porque institucionalizando a los partidos políticos evitaremos que ellos se desorganicen y pierdan vigencia y que otros núcleos de opinión avancen en forma tal que acaben por desplazarlos.

¿Qué ocurre con los partidos políticos? Actualmente ninguno de ellos despierta el interés y la inquietud de la masa, de la gran cantidad de electores que permanece, como dije, totalmente indiferente ante los problemas nacionales. Y, ¿por qué ocurre este fenómeno? Por falta de contacto entre los partidos y la masa de opinión; porque no hay contacto entre los dirigentes políticos y los electores, y entonces otros sectores,

los grupos de presión, interpretan —desafortunadamente para el país y la democracia— el sentir de la masa. Me refiero a los grupos de presión que son los sindicatos, como lo ha puntualizado muy bien el señor diputado González Bergez, que están desplazando a los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque están organizados perfectamente en virtud de una ley.

Por otra parte, los sindicatos tienen recursos que obligatoriamente se descuentan de los sueldos y salarios de los obreros. El obrero está obligadamente constreñido a formar parte del sindicato, y además, hay una vinculación personal directa entre el sindicato y el dirigente sindical. Igualmente, hay que destacar que el sindicato se preocupa de los problemas inmediatos, materiales, de los individuos, lo que determina la relación directa entre el dirigente y el dirigido, entre sindicato y pueblo. Y entre los grupos hay también más cohesión. Y eso determina que poco a poco estos grupos de presión que actúan como tales, vayan desplazando a los partidos políticos. Nosotros estamos indiferentes ante ese problema, nos despreocupamos, pero, ¿qué va a ocurrir? Quel legará un momento en que esos grupos de poder sustituyan a los partidos políticos, y como ha pasado en muchos países se pretenda imponer un régimen distinto, un sistema distinto, como es el corporativo, que ha sido ensayado desafortunadamente en muchos países y que ha demostrado que es absolutamente inaceptable en un régimen democrático.

En Italia, cuando gobernaba Mussolini, se estableció un sistema corporativo y justamente el inspirador del partido a que pertenece el señor diputado Casas, copió la organización institucional de los sindicatos argentinos del régimen mussoliniano y quiso implantar también en nuestro país el sistema sindical, con una experiencia desgraciada, porque ha traído inconvenientes gravísimos y ha traído como consecuencia que se divida la familia argentina así como muchas otras dificultades.

Sr. Casas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Casas. — Señor presidente: evidentemente el señor diputado Jofré dijo algo que a nuestro entender es absolutamente erróneo.

Durante el gobierno del peronismo no se ha establecido un sistema corporativo, porque tuvieron plena vigencia las instituciones republicanas. Lo que únicamente se intentó —y se logró— fue para desmoronar o destruir el inmenso poder económico que agobiaba a la clase trabajadora, de que los trabajadores tuvieran una entidad para defender mejor sus intereses gremiales. Esta ha sido la realidad que hemos vivido, y tanto es así que hemos tenido un régimen con todas las notas características de la República.

Sr. Jofré. — Agradezco al señor diputado Casas la interrupción, porque me da la oportunidad de reformar el concepto que he expresado. El gobierno peronista quiso crear un régimen corporativo en el país...

Sr. Casas. — Querer no es hacer.

Sr. Jofré. — ... y el primer paso que dio fue crear estos sindicatos, y tanto quiso imponer el régimen corporativo, que los consideró una rama del grupo que lo apoyaba en el poder, porque por un lado estaba el partido peronista, por otro el partido peronista femenino y por otro el grupo sindical que era el que verdaderamente tenía el poder.

Afirmo de que Perón no pudo llegar al régimen corporativo porque el pueblo argentino, que es auténticamente democrático, se opuso y lo volteó, quizás si hubiera pasado un año más, nosotros hubiéramos tenido en nuestro país un régimen corporativo.

Un gobierno que fue capaz de reformar la Constitución Nacional, la histórica Constitución Nacional, que tanta sangre y lágrimas costó a los argentinos y que nos enorgullece y enorgullecerá durante muchos años, solamente para hacerse reelegir y para poner un montón de disparates, como aquel de que los ancianos tenían derecho a esperar —no sé si se refería a la muerte o a otra cosa por el estilo—, es indudable que era capaz, frente a la obsecuencia del Parlamento de aquel entonces, donde tenía una mayoría absoluta, en virtud de haber reformado la ley electoral, de llegar al régimen corporativo. Y le manifiesto al señor diputado Casas, por quien tengo un gran respeto, que ese régimen, en base al gobierno de los sindicatos, lo tiene su propio partido porque en este momento el sector político del partido peronista es el que tiene menos vigencia, porque la fuerza la poseen esos sindicatos obsecuentes que están al servicio de ese señor que quiere regresar al país y a quien el país le va a decir que no puede regresar porque queremos paz y tranquilidad.

Sr. Casas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Casas.

Sr. Casas. — Señor presidente: evidentemente el señor diputado Jofré insiste en sus errores.

La Constitución de 1949 se ha reformado, a nuestro entender, incluso con una consulta al pueblo. Muy distinta es precisamente la derogación de la Constitución de 1949, que se hizo por decreto, por un gobierno defacto que en modo alguno podía ser democrático. En este sentido también debemos tener en cuenta que el decreto que derogó la Constitución de 1949, y puso en vigencia la del año 1853, lo hacía en tanto y cuanto ésta no se opusiera a los fines

que el mismo gobierno quería establecer. Esto sí que es una dictadura que está en contra de todo sistema democrático.

Por otra parte, en la Constitución de 1949 no se volcaban una serie de disparates, sino que se concretaba sencillamente una doctrina social cristiana que tendía nada menos que a lograr la solidaridad social a través de la protección a los desamparados. También contenía ese texto legal disposiciones concretas relacionadas con la justicia social. No creo, por lo tanto, en modo alguno que sea una Constitución antidemocrática; todo lo contrario. Lo que pasa es que era antiliberal, porque estaba en contra de todos los privilegios que existían en ese momento y que la Constitución quería derrumbar para felicidad del pueblo.

Le agradezco al señor diputado Jofré la interrupción que me ha concedido.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — En primer lugar, señor presidente, aprecio que el señor diputado Casas se contradice porque hace un rato dijo que las medidas económicas que había tomado el presidente Perón no significaban abjurar del liberalismo, que eran medidas circunstanciales y que no era intervencionista. Ahora acaba de decir que la Constitución era antiliberal. Realmente no sabemos en qué momento tiene razón cuando realiza estas afirmaciones.

Por otra parte, la reforma de la Constitución hecha en 1949 fue derogada por el voto popular. El decreto del gobierno de la Revolución Libertadora no es el que abrogó la misma, porque, simplemente, consideraba —como muy bien lo dice en su texto—, que contenía defectos que la anulaban. La abrogación se produjo por la convención constituyente que se reunió en la provincia de Santa Fe en el año 1957. En dicha convención estaba representada la mayoría del pueblo argentino, y en ella se estableció claramente que había motivos para anular la reforma.

Esa reforma fue abrogada con toda justicia, porque el miembro informante de la convención reunida en el año 1949, el doctor Sampay, dijo que esa Constitución era para Perón y que no le interesaba lo que pasara después que éste se fuera del gobierno.

Sr. Casas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Casas. — En primer lugar, quiero destacar que nuestra posición es perfectamente clara. Dije que nuestro movimiento es realista, es decir, que en este momento, frente a los privilegios, conviene estar en contra del liberalismo económico, sin perjuicio de que, variando las condiciones actuales, el día de mañana seamos todo lo contrario. He citado para corroborar esta tesis las palabras del presidente Grant de los Estados Unidos, con cuyo ejemplo he realizado una comparación.

En segundo lugar, en lo que respecta a la opinión del señor diputado Jofré en el sentido de que la Constitución de 1957 ha significado una consulta popular, basta recordar que en esa elección estuvo ausente, prácticamente proscrito, el partido justicialista que representa, a nuestro entender, una inmensa y ponderable parte de la ciudadanía.

Vuelvo a agradecerle al señor diputado Jofré la interrupción que me ha concedido.

Sr. Presidente (Del Pero). — La Presidencia recuerda al señor diputado Jofré el término de una hora de que dispone para hacer su exposición. De manera que las interrupciones son computables en ese lapso.

Sr. Lejarraga. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Jofré, a los efectos de formular una aclaración ante los términos del señor diputado Casas?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Lejarraga. — Deseaba preguntarle al señor diputado Casas si cuando dice antiliberal no querrá decir, en realidad, para ser preciso anticapitalista, porque el liberalismo y el capitalismo son dos procesos que no pueden confundirse genéricamente. Usted habla contra los privilegios, y estos son los representados por el régimen capitalista de explotación del hombre por el hombre. El liberalismo es otro proceso. Hay por lo demás un liberalismo económico, y aparte de éste, uno político, otro moral y jurídico que han forjado elementos realmente perdurables que se han incorporado a las nuevas formas sociales.

Por lo tanto, ¿no será más justo decir, en lugar de régimen liberal, así en general, régimen capitalista de opresión económica y de injusticia social?

Sr. Presidente (Del Pero). — En esa forma, señores diputados, el debate se torna dialogado y, por lo tanto, es antirreglamentario.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Pido disculpas a los señores diputados porque el debate sobre la reforma constitucional de 1949 sería muy importante y muy interesante, pero desafortunadamente tengo que volver al tema porque de lo contrario se me va a agotar el término.

Sr. Casas. — ¿Me permite otra interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Después, señor diputado, podemos hacer otro recreo constitucional; por ahora, quiero referirme al tema que estaba tocando.

Considero que es indispensable la institucionalización de los partidos políticos para evitar que esos grupos de presión continúen teniendo vigencia en asuntos que no son específicamente los que le corresponden. Creo que los sindicatos tienen una importancia excepcional en el país, porque tienen una tarea enorme que cumplir para defender los intereses de los obreros que sindiquen. Pero esas asociaciones no pueden interferir en la vida política argentina ni actuar en política. La persona que quiera actuar en

política, que lo haga dentro de los organismos adecuados, que son los partidos políticos. Los que deseen actuar en la vida sindical, que lo hagan, y para eso tienen los sindicatos, pero debemos dividir los distintos campos de acción. Porque ¿qué ocurre en nuestro país?

De los once millones de votantes que están actualmente inscritos en el padrón, solamente el 8 por ciento está afiliado a los partidos políticos. ¿Y por qué ocurre eso, señor presidente? Porque los partidos políticos no están debidamente organizados y se hallan un poco alejados de la realidad económica, política y social de la República. Eso es indispensable.

Sr. Grau. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Grau. — Yo deseo preguntarle muy amablemente al señor diputado Jofré, si no cree que influyen en esa aparente indiferencia del ciudadano por los partidos políticos algunos supuestos como el que nosotros advertimos en el Estatuto de los Partidos Políticos, cuando a los ciudadanos no se les exige antigüedad en la afiliación para ser candidatos. Si los partidos políticos tuvieran que designar de sus propias filas los candidatos, no podrían apelar a los dirigentes gremiales —inquietud del señor diputado—; los que no están afiliados a ningún partido en general, y muchos ciudadanos que pretenden actuar en la vida política del país, se afiliarían y canalizarían su actividad a través de estas agrupaciones.

De todas maneras, con la tolerancia que existe a través de este estatuto evidentemente no existe ninguna ventaja para los que militan en los partidos políticos con respecto a los que son extraños a ellos.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Yo creo que es todo lo contrario. Es indispensable —y nosotros lo hemos sostenido como algo fundamental— que se permita a los partidos políticos que lleven candidatos extrapartidarios. ¿Por qué? Justamente porque los afiliados de los partidos políticos representan una ínfima minoría en el país, y porque no podemos exigirle a la mayoría, que representa el 92 por ciento del electorado que no está afiliado, que para elegir candidatos solamente se ajuste a aquellos que tienen una neta filiación política.

Yo creo que una forma de despertar el interés de los sectores no politizados, que son la mayoría, es abrir las puertas de los partidos políticos para que se puedan llevar hombres de éxito, de responsabilidad, aunque estén en distintos sectores, ya sea en el sector laboral o en el empresario, siempre que desistan de actuar como dirigentes de sus respectivos organismos. Especialmente los dirigentes sindicales. En esta forma ingresarán a los partidos hombres representativos de la universidad, de los sectores del

trabajo, de la empresa, del comercio o de cualquier otro sector, que puedan ser legisladores que actúen con eficiencia, gran conocimiento de los temas y gran responsabilidad.

Si abrimos las puertas de los partidos políticos y permitimos el ingreso de hombres que no sean los exclusivamente politizados, le vamos a hacer un verdadero servicio al país.

No sé si estaré equivocado, ya que, como bien dijo Pellegrini, tiene la verdad quien la tiene al día siguiente. No sé yo si mañana tendré la verdad pero lo que sí creo con toda buena fe es que es necesario valerse de este procedimiento.

Por supuesto que no creo que solamente en nuestro país se presente este fenómeno de la apatía por parte del electorado para inscribirse en los partidos políticos. En Francia, por ejemplo, también ha pasado lo mismo, tanto que Luis María Bello, en un artículo muy interesante, ha dicho que allí en los partidos políticos hay un millón de afiliados sobre un total de 27 millones de electores. También en Francia esa indiferencia trajo gravísimo: problemas, y ahora recién se está produciendo un despertar en la vida política francesa porque los partidos han comprendido la situación y han tomado otras actitudes, tendientes a estudiar los problemas con profundidad y a procurar soluciones positivas a los problemas que afectan al país.

También en Italia ha pasado lo mismo. Podría citar otros muchos ejemplos, pero en obsequio a la brevedad no he de extenderme más sobre este tema.

Es en primer lugar necesario que los partidos políticos, además de estar organizados, para poder ser atractivos a la opinión pública tengan programas auténticos y que no se disfrazen detrás de palabras. Uno de los grandes defectos que en nuestro país tienen los partidos políticos es que ocultan su pensamiento real detrás de verdaderas cortinas de humo. Por eso la ley tiene que ser muy objetiva a los efectos de evitar que detrás de las palabras haya programas que no son auténticos. Debemos evitar que se repita algo que ya hemos visto en el país —desgraciadamente la bancada que pertenece al partido a que me refiero no está presente en el recinto en este momento— que un partido se muestre ante la opinión pública con un programa y después, desde el gobierno, borre con el codo ese programa y realice algo total y absolutamente distinto.

Es indispensable que se actúe con autenticidad. Si los partidos lo hacen y se organizan como corresponde, entonces van a tener otra vez vigencia en la vida política argentina y con ello le haremos un gran servicio al país.

Como ha dicho el señor diputado Belgrano Rawson, nosotros hemos coincidido, en sus lineamientos generales, con el despacho firmado por todos los sectores. Pero hemos señalado algunas disidencias parciales que han sido puntualiza-

das en el despacho del señor diputado Belgrano Rawson. Nuestro bloque apoya la disidencia presentada por él y la hace suya. El señor diputado González Bergez también ha presentado por su parte un despacho en disidencia con alguna cantidad de modificaciones, más que todo de tipo formal. También en sustancia —como ha quedado bien establecido en la fundada exposición que hizo ayer el diputado González Bergez— ese despacho coincide en sus lineamientos generales con el firmado por el señor diputado Belgrano Rawson.

Hay algunas disposiciones que nosotros auspiciamos que se modifiquen porque tienden a defender a la democracia. Es indudable que es esencial defenderla; es indiscutible que en un país democrático como el nuestro tienen que existir algunos medios para que ella esté protegida. Uno de los medios de protección es precisamente el Estatuto de los Partidos Políticos y la ley electoral.

Creemos ante todo que es indispensable aprobar la modificación que propone el señor diputado Belgrano Rawson al artículo 39, que leeré para que quede debidamente puntualizada. Dice: «Agregar como inciso d) el siguiente: d) La no subordinación, con respecto a entidades o partidos internacionales o a Estados, partidos o personas extranjeras o domiciliadas en el extranjero.» Además propone agregar un inciso nuevo al artículo 22, el inciso l), que dice: «No cumplen con las condiciones exigidas en el artículo anterior los partidos que, en su doctrina política o por la vía de sus organismos o autoridades estatutarias y candidatos, auspicien o realicen de modo directo actos violatorios de los principios democráticos, o propicien la implantación, en forma directa o indirecta, de regímenes autocráticos o totalitarios.»

Nosotros creemos que es condición esencial para cualquier partido que quiera actuar en la vida argentina, que sostenga principios democráticos. No puede aceptarse que en la vida política actúe un partido que no sea auténticamente democrático. No se puede otorgar libertad para que se atente contra la libertad. No se puede dar el libre juego a los partidos que, directa o indirectamente, cuando llegan al gobierno, tiendan a suprimir la libertad. Por eso nosotros somos más categóricos que el despacho de la mayoría y creemos que en el estatuto se debe decir que los partidos no deben auspiciar regímenes autocráticos o totalitarios, como expresaba el proyecto originario del Poder Ejecutivo. Es indispensable que se defina muy bien esta situación a los efectos de que no quede la menor duda.

Con respecto a los regímenes autocráticos o totalitarios, hay algunos núcleos que tienen esas características. Ese es el caso del comunismo, que es un partido que obedece a directivas extranacionales. La Tercera Internacional, reunida

en Moscú en 1928, estableció cuáles eran los objetivos del Partido Comunista: apoderarse de los gobiernos en todos los países, pues formaban parte de una misma cosa y eran partidos extranacionales. Por otra parte, esos partidos tienden a suprimir la democracia, aun cuando ellos también dicen ser democráticos. En este sentido, debemos ponernos de acuerdo sobre el auténtico sentido de la palabra democracia. Ellos hablan de democracias populares, de partido único, y periódicamente hacen elecciones que son una farsa. Nosotros creemos que debe haber pluralidad de partidos, publicidad de los actos de gobierno, un estilo de vida donde existan la igualdad y las posibilidades de igualdad para todos los que actúan en la vida pública, para que tengamos un verdadero régimen democrático.

Por otra parte, hay opiniones fundadísimas que definen este concepto, como la de Kelsen, que voy a pedir que se transcriba para no cansar a los señores diputados con su lectura. Nosotros debemos ser precisos y establecer que los partidos que tienen corrientes autocráticas y desean entregar el gobierno a un hombre, un grupo o un partido, como ocurre en los países comunistas, no pueden actuar libremente en la vida política argentina. No creo que se deba perseguir a nadie por tener tales o cuales ideas, o que se lo aprese por ello. Pero sí creo que no pueden actuar como partidos políticos los que propician este tipo de ideas.

Con respecto al peronismo, creo que no puede ser proscripto, siempre que el peronismo, como se ha señalado en alguna oportunidad, se reintegre a la democracia y establezca el libre juego de la misma. ¿Qué ocurrió cuando el peronismo estuvo en el gobierno? No permitió la vigencia real de la democracia y ejerció una coacción brutal contra todos los habitantes del país, controlando los medios de difusión, los diarios, las radios, etcétera y coartando todos los derechos. Ello evidencia que no había una auténtica democracia. Si el peronismo decide, a través del sector político en que está el señor diputado Casas, actuar con la limpieza con que deben hacerlo todos los partidos políticos, se organiza, se comporta democráticamente y deja de recibir órdenes y de estar esperando la llegada que —como dije— no va a ocurrir porque el país no lo quiere, y dejan de estar sujetos a los dictados de una sola persona, querrá decir que el peronismo se ha reintegrado a la democracia argentina. Bienvenido que se haya reintegrado así, auténticamente, a la vida democrática argentina, y que no pretenda reincidir en los sistemas anteriores que hemos combatido y del que seguiremos siendo sus adversarios.

Por otra parte, si quiere volver solamente para aherrar a los jueces, como ocurrió cuando se exigió que los mismos prestaran juramento de fidelidad al presidente de la República, en su persona o a su esposa —como sucedió en Córdoba con el señor Pérez—; si se pretende

volver al régimen en que para ser juez se exigía que firmaran una nota expresando su solidaridad con la doctrina peronista; si se quiere volver a dictar una ley del Congreso estableciendo que la doctrina peronista, que es doctrina de un partido, se convierta en doctrina nacional obligatoria para todos; si se aspira a que exista el partido único, y sólo a los afiliados de ese partido se los admita para el acceso a la administración pública, es indudable que no se puede aceptar que ese partido sea sinceramente democrático, y por cierto que no estará dentro de las condiciones en que la ley admita su vigencia.

Pero no quiero hacer el proceso del Partido Peronista, porque no es la oportunidad. Entendemos que si quiere volver en esa forma, no sería un partido democrático. En cambio, sí pueden actuar en la vida política argentina sin restricción alguna, partidos como éste al que pertenece el señor diputado, siempre que se comprometan a ser leales, sinceros y a decir absolutamente la verdad.

Sr. Casas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Casas. — Es evidente que las palabras del señor diputado Jofré revelan que, en cierto modo, padece el defecto que he señalado en mi exposición, o sea que echa una mirada al pasado única y exclusivamente para encontrar defectos.

Yo digo, señor presidente, que esa posición sería igual a esta otra: proscribir definitivamente al Partido Conservador o a los partidos de centro porque cuando fueron gobiernos realizaron fraude electoral.

Sostuve que la única forma de encarrilar este país es mirar y crear para lo futuro. Y la única manera de crear para lo futuro es, como lo expresé, reconociendo nuestros propios errores y corrigiéndolos hacia lo futuro.

Por otra parte, y haciéndome eco de las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado, diré que nosotros no vamos a renunciar nunca jamás a los grandes ideales del peronismo. Somos absolutamente solidarios con los grandes principios de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Insisto una vez más: estamos en una auténtica línea republicana y democrática. Por eso dije que somos peronistas con Perón y hemos tomado la lección de Perón, que quiere la institucionalización del movimiento. Por eso también estamos absolutamente identificados contra toda digitación y a favor de una organización desde abajo hacia arriba. La posición democrática y republicana del peronismo, entonces, es clara y terminante.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — La referencia que hace el señor diputado a mi partido, a quien se le ha imputado en algunas de las provincias —porque no

en todas— que haya hecho en alguna oportunidad fraude, es indudable que tendría valor si nuestro partido fuera el único que lo ha hecho. Desgraciadamente, la historia política argentina está llena de estos episodios. Solamente me referiré a ellos para condenarlos, inclusive en el caso de mi partido, que cometió ese error en alguna oportunidad y en alguna parte. Pero como lo ha señalado muy bien el señor diputado González Bergez, nosotros hemos tenido la humildad de reconocer los errores de nuestro partido, no cometidos por nosotros que somos la nueva generación y que no hemos tenido una participación directa —digamos así— en tales hechos. Pero tenemos la valentía y la hombría de bien, si estamos en un partido, de cargar con sus errores y también con lo bueno que haya hecho. Mi partido ha contribuido a la grandeza del país.

Y si nos referimos al fraude, también tendríamos que castigar a todos los partidos políticos, incluso a los dos radicalismos, que lo han cometido. También han hecho fraude —y disculpenme los señores diputados si tengo que hacer un poco de historia retrospectiva— en varias oportunidades, todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno en el país.

Sr. Grau. — Nos referimos al fraude como sistema.

Sr. Jofré. — No quiero hacer la historia del fraude en el país, porque empieza en el año 1916, cuando el presidente Yrigoyen empezó a gobernar y se produjo el de la urna de Andalgalá, y también en Santa Fe, en Córdoba, donde se secuestraron fiscales, y en Mendoza. Pero esa historia es vieja y referirnos a ella es mirar demasiado al pasado. Yo quiero simplemente referirme al otro partido, que también ha hecho mucho fraude: el del presidente Frondizi, que realizó incluso fraude en las luchas internas de su propio partido.

Pero en especial, me quiero referir al gobierno del general retornista, ese gobierno, que es el que hizo más fraude en el país, porque cometió los hechos más escandalosos y brutales, desde que no dejaba ni siquiera la libertad de opinar. Muchas veces hemos ido a las radios a pedir que se nos permitiera pronunciar un discurso y no se nos permitía.

Sr. Oreja. — Como ahora.

Sr. Solari (E. A.) — Usted sabe que no es cierto.

Sr. Jofré. — Ahora sí se puede, porque uno va y paga el espacio. En esa época ni siquiera pagando le permitían hacerlo.

Y sobre todo es fraude hacer pactos secretos entre dos grupos políticos antagónicos que se habían combatido hasta ayer; luego publicarlos y, mientras un sector los exhibe en la Cámara, el otro los niega. Este es un fraude a la opinión pública que hacen los dos sectores.

De todas maneras, creo que esta confesión de errores que tenemos que hacer todos debe ser la gran lección —y en esto estoy de acuerdo con el señor diputado Casas— que tenemos que darle al país.

Ningún partido político debe hacer la política del cangrejo y mirar permanentemente hacia atrás. Solamente debemos mirar hacia atrás para decir: eso no vuelve más; los errores que se han cometido no vuelven más. Y aquí le pido al señor diputado Casas que reflexione y que diga a su jefe: eso no debe volver más.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Jofré. — Debemos mirar hacia el futuro. Que vengan nuevas generaciones; nuevos hombres con nuevas ideas para construir definitivamente el país, que es lo que está esperando la opinión pública. ¿Por qué no hay sectores de la opinión pública que vengan a escuchar lo que aquí se dice? Porque están desilusionados. Los hombres políticos estamos viviendo de ilusiones y no interpretando el sentir nacional; pero es bueno que, comenzando a construir el futuro y no pensando en el pasado, empecemos a interpretar el sentimiento popular. Aprendamos la lección y no volvamos sobre estos hechos.

Por otra parte es indispensable —y voy a simplificar un poco mi exposición, para abreviarla— que los partidos políticos se organicen democráticamente en su vida interna. Es muy conveniente el sistema que se establece de que los afiliados participen en forma directa en la vida de los partidos políticos, pero no comparto la opinión expresada ayer por el señor diputado García, en el sentido de que debe ser obligatoria la elección directa de candidatos.

Creo que debe haber auténtica participación de los afiliados en la vida de los partidos políticos a través de la elección directa de sus autoridades, de sus dirigentes. Nuestro partido tiene en Mendoza ese tipo de elección no sólo de sus autoridades, sino también, desde hace diez o quince años, de sus candidatos. Pero hay algunos partidos políticos que practican otro sistema, que es el de la elección directa de sus autoridades y la elección indirecta de sus candidatos. Yo creo que este estatuto no debe alterar el sistema tradicional de los distintos partidos, y que debe dejarles libertad. Lo que sí debe hacer es dar a los afiliados la oportunidad, anual o bianual, de que se expidan, a través de la elección de autoridades, acerca de la orientación que debe tener el partido y de los hombres que deben dirigirlo. En ese sentido acompañamos al despacho de la mayoría.

Otra cosa que consideramos indispensable, y que ya anticipé al contestar una interrupción del señor diputado Grau, es que se permita a los partidos políticos llevar candidatos extrapartidarios, porque en esa forma se incorpora-

rá a la vida política a mucha gente que está desinteresada del problema político. Quizá llevándolos de candidatos a cargos de distinta naturaleza, se pueda lograr que se incorporen a la vida activa.

En realidad, estoy señalando una discrepancia con la tesis que anteriormente tenía mi partido que, en Mendoza, en muchas oportunidades ha sostenido lo contrario: que deben llevarse solamente candidatos partidarios. Creo, y lo digo con toda lealtad, que esa tesis es equivocada; considero que hay que abrir los partidos. Actualmente mi partido se ha convencido de que aquella tesis era errónea y sostiene también la admisión de candidatos extrapartidarios.

Sr. Casas. — Lo felicito, porque coincidimos en ese punto, señor diputado.

Sr. Jofré. — Espero que también coincidamos democráticamente en otras cosas, señor diputado.

Hay otra situación que consideramos muy importante, en la que también creemos que se debe dejar libertad: los acuerdos de partidos. Debe haber alianzas permanentes, cohesiones de partidos que puedan constituir confederaciones, y tiene que aceptarse también para que exista una verdadera democracia las alianzas transitorias, porque justamente institucionalizándolas, vamos a evitar esos pactos secretos que se hacen a espaldas de la opinión pública, como ocurrió en nuestro país. Si no se admiten las alianzas, vienen los acuerdos fraudulentos y secretos que son componendas de toma y daca a espaldas de la voluntad popular. Pero si establecemos en este estatuto que las alianzas tienen que hacerse públicamente, con la debida anticipación, sobre la base de una coincidencia de programas y de principios. Así se adecuará la vida política argentina y se evitarán muchas dificultades como las que se han presentado hasta ahora.

Sr. Casas. — También coincidimos en esto con el señor diputado.

Sr. Jofré. — Coincidimos en muchas cosas, pero en lo único en que no coincidimos es en Perón.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Sr. Jofré. — Tendría que formular otra serie de observaciones, pero las reservaré para la discusión en particular.

Para concluir reiteraré lo que dije al principio: que este paso que damos al sancionar el estatuto de los partidos es fundamental para la vida política argentina. Institucionalizamos una entidad que preexiste a este estatuto; le damos vigencia a los partidos políticos que han nacido por espontánea determinación de los hombres y de los electores.

Nosotros, simplemente, tratamos de encauzar a los partidos políticos y al institucionalizarlos hacemos una gran contribución para la pacificación del país, la auténtica pacificación demo-

crática argentina a la que deben aspirar todos los ciudadanos de bien. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — Señor presidente: yo he querido participar de este debate porque el Estatuto de los Partidos Políticos fue una de mis primeras preocupaciones de legislador, convencido de la necesidad de reglar el funcionamiento de las agrupaciones cívicas en el escenario de la vida argentina, desde su aparición hasta su caducidad o extinción, y persuadido, también, de que la norma jurídica vigente no ha servido ni sirve a los intereses fundamentales de nuestra democracia.

Por eso, señor presidente, presenté la iniciativa de restablecer la vigencia del decreto ley 19.044/56, porque confrontando todos los textos conocidos hasta ahora, era uno de los más completos, para lograr, sin mayor reglamentarismo, la armonía que es indispensable entre la intervención mínima del Estado y la libertad de los partidos políticos para organizar su propia vida interior.

Por supuesto, señor presidente, que en esta iniciativa había excluido deliberadamente de su texto toda norma discriminatoria relativa a las proscripciones, cumpliendo no sólo con un imperativo de mi conciencia, sino con un postulado de nuestra agrupación política, que se había comprometido, desde el llano, si llegaba al poder, a integrar el cuerpo electoral de la Nación. A pesar de ello, no insistiré en mi iniciativa, no obstante su bondad intrínseca, porque no estoy acostumbrado a enamorarme de mi propia obra, y la política, a pesar de su dureza, me ha enseñado que así como nos gusta cultivar las flores de nuestro propio jardín, ello no impide admirar las flores del jardín ajeno.

El proyecto del Poder Ejecutivo es más completo, señor presidente, porque interpreta y satisface mejor las necesidades de la hora presente y, aunque es más extenso, se mueve dentro de las grandes líneas del decreto 19.044. Esto se puede afirmar, también, respecto del dictamen expedido, casi por unanimidad por la Comisión de Asuntos Constitucionales. El solo hecho de haber logrado dicha comisión la adhesión de casi todos los representantes de los más diversos matices de la opinión argentina representada en esta Cámara, es una prueba cabal y terminante de la obra positiva realizada por dicha comisión. Yo fui miembro de ella, y me consta personalmente.

Estoy seguro, señor presidente, que mi proyecto no hubiera tenido la virtud, como el que estamos tratando, de aunar todas las opiniones. Por ello, mi apoyo al despacho de esa comisión. Es un dictamen casi por unanimidad —repito— y esto significa, en esta instancia argentina, de recuperación de las instituciones libres, un paso trascendente. Ahora sólo resta tener fe. Tenga-

mos fe, por encima de todos los obstáculos, de todas las vicisitudes, de todos los inconvenientes y de todas las adversidades que hay en el camino, porque la experiencia demuestra que, a la postre, todo lo que es fruto del sacrificio, del esfuerzo, de las lágrimas y del sudor, termina por dar su última palabra.

Sé bien, señor presidente, que el problema social y económico argentino es de una complejidad impresionante y que va a costar mucho esfuerzo y tiempo para encontrar soluciones perdurables. Pero se equivoca en este país quien subestime el factor político, que en un orden de prelación jerárquica constituye, sin lugar a dudas, la primera prioridad nacional.

Yo no estoy convencido —y ésta no es una opinión definitiva— sobre las bondades del régimen de la proporcionalidad en la composición de esta Honorable Cámara, pero confieso que la representación de casi todos los matices de la vida política argentina podrá haber traído algún inconveniente, dada la cantidad de sectores aquí representados, pero lo cierto —y esto hay que reconocerlo— es que ha traído paz a la República y contribuido poderosamente a la concordia nacional. Y ello, a pesar de cierta campaña insidiosa y maliciosa, interesada en el desprestigio permanente del Parlamento argentino, que da más importancia a lo anecdótico que a lo sustancial, a lo efímero más que a lo trascendente. Pese a todo ello, lo constante, lo permanente, que se da en esta Cámara ha sido y es la consideración mutua y el respeto recíproco entre todos sus miembros.

Acalladas las discrepancias inevitables de la política, podríamos afirmar con lealtad que la calma y la serenidad han vuelto siempre al recinto y creado el clima necesario para elaborar en definitiva la norma jurídica necesaria en procura del bienestar y la felicidad del pueblo entero de la República.

Yo podría incursionar, continuando esta exposición, con el análisis de los artículos que contiene el Estatuto de los Partidos Políticos a través del dictamen de la comisión, en lo que se refiere a los principios generales, al funcionamiento de los partidos políticos, a sus cartas orgánicas, a su plataforma, a los propósitos de su inspiración, a los principios de su aparición y a las causas de su extinción, al régimen electoral, a la justicia electoral, etcétera. Pero no haré dicho análisis, que solamente lograría fatigar a la Honorable Cámara. Por lo demás, sobre estos aspectos han hablado, y lo hicieron muy bien, los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, el señor miembro informante de la comisión, doctor Belgrano Rawson, y los señores Mario Grau y Horacio García, como también los señores Muniagurria y Jofré, dicho sea esto sin mengua de la jerarquía de otras exposiciones que aquí se han escuchado.

Yo sólo quiero destacar la importancia que significa este paso fundamental que vamos a

dar en el proceso de conciliación nacional y de pacificación de todos los espíritus. Yo diría, en la defensa misma de la democracia, que es el sistema menos imperfecto conocido para gobernar a los pueblos; que permite el milagro de conciliar el principio de autoridad, que es muy importante, porque hace al orden y al respeto a la libertad de cada uno, y que es también trascendente porque hace a la dignidad de la criatura humana.

Y agregaría más: que permite adecuar la norma jurídica a la evolución de los tiempos nuevos, asimilando las más audaces expresiones del pensamiento, sin derramar una sola gota de sangre, y colocando todas las maravillas que entraña el progreso de la ciencia y de la técnica al servicio del hombre, que en la filosofía política de la democracia es un fin en sí mismo; que el sufragio es el arma pacífica de las más grandes revoluciones. Francisco Correa dijo una vez: «votos, sí; armas, no». Y el tiempo ha dado razón a su afirmación. Pero el sufragio debe ser, además, el instrumento para la liberación del hombre y no para lograr su propia destrucción.

Que la representación de los ideales de la comunidad es mucho más importante que la de los intereses materiales o de los grupos de presión.

Que la virtud pública está en la esencia de las instituciones libres, y que la cantidad no es más importante que la calidad.

Que hay derechos naturales, como bien dijo el señor diputado Jofré, anteriores y superiores a la ley escrita, y que ninguna mayoría, por grande que sea, sin renegar de la democracia, puede desconocer que gobierno y partidos deben realizar una intensa labor educativa —yo diría docente— capaz de suscitar en el ciudadano sentimientos solidarios. Para ello, el gobernante debe ser austero, y el dirigente, responsable; y los partidos políticos, vehículos de cultura y de elevación moral.

Que la indiferencia cívica es una peligrosa enfermedad para la democracia.

Que la política es una militancia en el plano de los ideales y para ello es necesario la vocación. Como decía Ingenieros, dirigiéndose a la juventud en su hermoso libro *Las fuerzas morales*, «cuando pones la proa visionaria hacia una estrella, sientes el influjo misterioso de un ideal».

Que los partidos políticos deben ser órganos permanentes de la opinión pública. Que su ausencia, como bien lo dijo el maestro Estrada, es el cretinismo de los pueblos.

Que la oposición también es parte del gobierno, y su colaboración es patriotismo y no complicidad. Que los enemigos de los partidos políticos son los eternos enemigos de la democracia.

Que la unanimidad impuesta desde arriba es mucho más peligrosa que la discrepancia y el disenso que viene desde abajo. Que el partido único responde a la concepción del Estado autoritario y despótico. Que la masifica-

ción, como expresó el señor diputado Grau, del ciudadano, es tan peligrosa como el personalismo enfermizo de los hombres sin ideales.

Manuel V. Besasso, a quien recuerdo con honda emoción porque tuve la honra de conocerlo, hablando un día del personalismo, dijo: «El mentecato mira con recelo la superioridad de las inteligencias superiores. El que anda buscando pienso en la política como si fuera un pesebre, enloda desaprensivamente las reputaciones más nobles y las virtudes más acrisoladas, al mismo tiempo que algunos párvulos gateando por el suelo ilusorios prestigios personales se empeñan en aparecer como discutiendo, polemizando con figuras consagradas por la admiración y el respeto público, para de ese modo, dejando caer su defecación de pajarracos sobre alguna eminencia, adquirir popularidad fácil y barata.» «Con todo —sigue diciendo Besasso—, hay que curarse y salir de ese mal ya endémico de la política argentina. La receta es la que dio Sarmiento: «educar al soberano».

Voy a terminar estas palabras, señor presidente, leyendo una página que confieso siempre gravitó hondamente en mi conciencia, en mi espíritu y en mi propia militancia política. Algo mencionó ya el señor diputado Jofré; por eso me vino al recuerdo esa página que yo traía en la documentación indispensable para la elaboración de mi pensamiento. Ningún político que desee ser político de ideales podrá apartarse nunca de esta hermosa lección de experiencia, dicha por un eminente argentino que honró a la República. Me refiero a Carlos Pellegrini.

Dice Pellegrini, al entregar los diplomas de abogados de una promoción cerca de fines de siglo pasado, lo siguiente: «He visto hombres y partidos luchar con apasionamiento, agotar las violencias del lenguaje, apelar a todos los medios para alcanzar el triunfo y, por último, chocarse en lucha armada; y creí que estos hechos labrarían entre hermanos hondos abismos. Pero un día próximo vi a los adversarios unidos en acción común; los que antes se habían combatido se apoyaban, y el elogio reemplazaba al vituperio. Y este espectáculo, que he visto repetirse, me enseñó que si bien en las luchas políticas debemos llevar todo el entusiasmo, toda la energía y todo el poder de acción de que seamos capaces, no debemos jamás salvar las vallas del respeto recíproco, de lanzar palabras irreparables, ni suscitar odios insensatos. El respeto al adversario y a su intención lo exige el respeto propio, pues nadie posee el secreto exclusivo de la verdad y del patriotismo, y hasta el error mismo, cuando es sincero, debe ser respetado por los hombres, porque es humano.

»He visto muchos éxitos rápidos defraudar las esperanzas que hicieron renacer, y he visto llegar con paso seguro a los que trabajaron con constancia y sin impaciencia. Esto prueba que

no hay obra útil ni grande, si no la fecundan el trabajo y el tiempo.

»He visto disiparse muchos entusiasmos, revocarse muchos juicios, y he asistido a la apoteosis de los que fueron vencidos: lo que demostró que no es el juicio más exacto el juicio del momento, y que tiene razón el que la tiene al día siguiente. La popularidad en las masas tiene halagos de sirena, pero atrae a escollos donde he visto naufragar más de un mérito verdadero. Nuestra propia historia nos dice que para nuestros más grandes hombres de nuestra patria, la justicia fue póstuma, y las generaciones que no los vieron, tuvieron que reparar amargas injusticias contemporáneas. Es que la multitud obra sólo por pasión, aplaude lo que la halaga y ataca lo que la contraria o no comprende, y se deja fácilmente engañar. Hay en el fondo de sus agitaciones un instinto justo, pero fácilmente se extravía y se excede casi siempre.»

Yo, señor presidente, siguiendo el curso de este pensamiento rector, podría decir, y esto a título personal, que también he sentido el ruido transitorio de efímeras victorias, y he oído el aplauso fanático y cerrado celebrando triunfos sin alegrías, y he visto también caer muchas lágrimas y muchas flores en la tumba de los vencidos, que a la postre, vencidos ayer, son hoy los triunfadores. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — No encontrándose en el recinto el señor diputado Luco, tiene la palabra el señor diputado Pedrini, que estaba anotado con anterioridad.

Sr. Pedrini. — Señor presidente: como todo hombre público que actúa en política, entro a este debate con una legítima pasión puesta al servicio del perfeccionamiento de las instituciones políticas de nuestro país.

Soy un hombre apasionado en la defensa de la causa en la cual estoy enrolado, pero también soy respetuoso de las opiniones ajenas, aun cuando estoy dispuesto a defender las mías con idéntica altura a la del ataque, con igual vibración polémica al entrar en la discusión de los altos intereses de la patria.

Sereno, con la decisión de contribuir a la rápida sanción del estatuto de los partidos políticos, lo hago con el anhelo de colaborar en su perfeccionamiento, y me siento intérprete de los hombres y mujeres del pueblo de mi provincia y de todo el país. Hombres laboriosos y altivos que esperan la sanción de esta ley para asegurar así, a la Nación una política de paz y de todo el país. Hombres laboriosos y altivos.

Cuando en el año 1912 el Congreso de la Nación sancionó el proyecto enviado por ese insigne argentino que nos honra y que también honra a los pueblos de América —me refiero a Roque Sáenz Peña— se cerró una etapa en la deficiente organización política de la República. Entonces comenzamos a andar por el camino de una democracia que quería ser orgánica, que

deseaba perfeccionarse con la presencia del pueblo interviniendo en los destinos del país. Así comenzó una nueva jornada jalonada por nombres que el pueblo hizo suyos, porque esos nombres, que indudablemente han marcado etapas en la lenta y espinosa tarea de conducir los destinos de la República fueron la bandera del pueblo interviniendo activamente en la cosa pública.

En el año 1916 Hipólito Yrigoyen llega al poder en brazos del pueblo que utilizó así la ley Sáenz Peña.

Treinta años después, luego de una dura prueba como es la del año 1930, también el pueblo lleva en sus manos otra bandera y otro nombre, y afirma en los comicios del 24 de febrero de 1946 su vocación de servir a las instituciones y a la República utilizando la ley del voto secreto, universal y obligatorio.

Ahora, señor presidente, los legisladores que integramos esta Honorable Cámara debemos sancionar un estatuto de los partidos políticos, para que en forma leal y honorable tenga todo el pueblo oportunidad de intervenir, sin exclusiones, sin encerronas ni brete alguno, en las próximas contiendas electorales.

El proyecto que enviara el Poder Ejecutivo a primera vista adolecía de serias deficiencias. Su lenguaje poco claro y en algunos pasajes hasta mal traducido de su original, como bien dijera el señor diputado Muñiz, nos resultaba duro e incomprensible en algunos de sus giros.

La oscuridad de sus formulaciones y las flagrantes contradicciones de muchos de sus enunciados, unido a la peligrosidad de determinadas cláusulas cuyo ostensible designio era dejar el camino libre al falseamiento de la voluntad popular, permitía plantear serias objeciones.

Sin embargo, inmediatamente luego de su conocimiento, la iniciativa original recibió el beneplácito de conocidos sectores reaccionarios. Pero ha llegado la hora de comprender que los eufemismos y las segundas intenciones no disminuirán el hecho sustancial y positivo de que sin la libre expresión de la voluntad popular no habrá de alcanzarse jamás la conciliación nacional.

Sin embargo, debo reconocer con toda altura, con la misma pasión que pongo en la discusión de algunas de sus cláusulas que estimo nocivas, el estudio y perfeccionamiento de la iniciativa que ha hecho la Comisión de Asuntos Constitucionales, y muy especialmente la tarea encomiable de los señores diputados Belgrano Rawson, Grau y Serú García al auspiciar el anteproyecto de dictamen y que ha servido de base al despacho de la mayoría que en este momento consideramos.

El juicio concreto sobre el despacho puede traducirse en breves conceptos. Considero que se mantiene aún, en cierta medida, un criterio discriminatorio y proscriptivo; numerosas trabas a la constitución de los partidos políticos, so-

metiéndolos al contralor del gobierno por intermedio de una magistratura especial de forzoso carácter político y en la cual, muy lamentablemente, debo decir que no tengo confianza. Además, el tutelaje del gobierno sobre los partidos demuestra menosprecio del principio de la soberanía popular y este proyecto, pese a su perfeccionamiento y a la evidente tarea de los señores legisladores de la comisión que lo estudió, recoge integralmente la herencia del año y medio del gobierno defacto del doctor Guido y de los estatutos o, mejor dicho, de las disposiciones proscriptivas, antidemocráticas y de espaldas al país, que fueron los estatutos Adrogué, Martínez y Osiris Villegas, y todos los decretos y decretos leyes de persecución ideológica que esta Cámara acaba de dejar sin efecto en su sanción del 30 de octubre último.

La magistratura electoral que este despacho admite es la recibida del gobierno de Guido, ya que todos o casi todos sus integrantes fueron designados en esa oportunidad.

Sr. García. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Pedrini. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — La última manifestación del señor diputado no es exacta. En esta emergencia, la Cámara Nacional Electoral —si a ella se refiere el señor diputado— que es el organismo que en última instancia ha de resolver sobre la aplicación de este estatuto que se proyecta, está en la actualidad integrada por una mayoría de jueces designados con acuerdo del Senado hace breves días por este gobierno de la constitucionalidad, y no, desde luego, por el gobierno defacto al que el señor diputado alude. Por ello digo que la apreciación del señor diputado no se ajusta objetivamente a la realidad.

Sr. Pedrini. — Esperamos que así sea.

La magistratura electoral que este despacho admite es la recibida del gobierno de Guido, vuelvo a repetir, ya que todos o casi todos sus integrantes fueron designados en esa oportunidad. La mayoría de ellos tiene una posición tomada y es conocida públicamente, en materia política e ideológica. Pocas ilusiones nos podemos hacer los hombres que militamos en ciertos partidos de auténtica extracción popular sobre la ecuanimidad de sus resoluciones.

Este estatuto instituye una tutela y una policía sobre todos los partidos políticos. Dependerá, por tanto, del gobierno decidir cuáles de ellos serán los alcanzados en un momento determinado por las restricciones o impedimentos para su marcha. Por tanto, el artículo 6º del dictamen en consideración entraña un grave riesgo. Los miembros del tribunal electoral, por más que se llamen jueces, no son los jueces de la Constitución, y su prescindencia política la tengo muy en duda. A esos jueces,

el estatuto les confiere amplísimas atribuciones para examinar el contenido de los programas de cada partido, su plataforma electoral, la realización de su propaganda proselitista y ello con atribuciones demasiado amplias, que esta Honorable Cámara, en razón de la voluntad popular que representa, debe cercenar.

El contralor estatal, en principio, puede no ser discutido, pero sí el objeto, los alcances y la extensión de este contralor que contiene el despacho que consideramos. El contralor que atañe a las actividades externas no admite discusión en ningún sistema político, puesto que se refiere a la prohibición y el uso de la fuerza, de la propaganda subversiva, de la acción revolucionaria, etcétera.

El Estado tiene el monopolio de la fuerza armada para mantener el orden e imponer el cumplimiento de la ley. Prohibido el uso de la violencia o de actos de fuerza para conquistar el poder, el camino del comicio es el único medio legal que el partido tiene para dar cumplimiento a uno de sus fines esenciales. Por tanto, la concurrencia al acto electoral es para todo partido una necesidad de supervivencia, puesto que se trata de un órgano de la opinión pública y ésta se expresa, preferentemente, en los actos eleccionarios.

De ahí, señor presidente, que la obligación de presentarse a elecciones está dentro de los requisitos que la ley debe imponer a los partidos, porque su observancia hace a los cumplimientos de sus fines.

Discrepo, en cambio, con la severidad y rigidez de la prescripción contenida en el artículo 62, inciso b), en cuanto fulmina con la caducidad y extinción del partido por la no presentación en distrito alguno en tres elecciones consecutivas.

Se plantea aquí el problema que se ha repetido muchas veces en el país, a lo largo de su historia política y, en forma muy especial, en los años que van del presente siglo. Me refiero al problema de la abstención de un partido a los comicios y sus consecuencias desde el punto de vista legal.

Para los hombres de la Unión Cívica Radical, con o sin aditamentos, es conocida su posición de lucha cuando no querían confirmar con su presencia elecciones fraudulentas con padrones viciados o gobiernos ajenos al sentir popular.

Nosotros los justicialistas no podemos olvidar que en 1957, perseguidos y encarcelados, borrados del mapa político del país, en esas elecciones de julio de 1957 cerca de tres millones de votos en blanco demostraron que por esa vía de la abstención y del voto en blanco se hacía sentir un caudal popular al cual no se lo podía dejar de tener en cuenta. Tampoco podemos olvidar algunas de las interpretaciones sobre esa montaña de votos en blanco y la risible explicación del general Aramburu cuando dijo

que ese porcentaje de votos en blanco era normal en cualquier elección nacional. Se vio entonces que ese recuento globular, esa elección piloto, como se dio en llamarla, demostró, muy a pesar de quienes la convocaron, que el peronismo estaba presente y que entonces como hoy y sin su presencia en las urnas no hay ni habrá paz ni reencuentro de los argentinos.

Puede haber circunstancias, señor presidente, que obliguen a un partido a decretar la abstención. La más común, la verdadera casi siempre en nuestra historia política, ha sido la falta de garantía en el proceso o en el acto electoral.

Cuando un partido se ve obligado a desear su máxima aspiración política que es la de conquistar el poder por los medios legales y se inclina a sostener en reemplazo un criterio tan riguroso como el del proyecto, éste debe modificarse por un sistema que establezca la graduación de las sanciones hasta llegar a la más grave, es decir, la extinción de la personería.

No quiero abundar en más detalles con respecto a la interpretación de los distintos artículos de este proyecto de estatuto de los partidos políticos, porque en particular hemos de hacer las observaciones que consideramos convenientes, ya que tenemos la sana y justa aspiración de que este estatuto sea lo más claro, limpio y puro posible.

En honor a la verdad, tengo mis serios temores con respecto a la sanción de este estatuto. Me pregunto si el Estatuto de los Partidos Políticos estará en condiciones de regir la vida de los partidos para las elecciones del 14 de marzo próximo. Me pregunto si una vez sancionado en esta Cámara de Diputados y vaya en revisión al Senado, si éste modificara algunas de sus cláusulas, tendremos oportunidad de darle sanción definitiva, si tendremos plazo para hacerlo, porque tengo mis serios temores de que venza el período extraordinario de sesiones y nuevamente la República tenga que concurrir a elecciones en marzo con el desgraciado y nefasto estatuto Adrogue. Es imprescindible que el 14 de marzo la República dé el alto ejemplo de civismo y democracia en el país.

Considero que puede ser el primer intento serio y auténtico de pacificación nacional. De no ser así, horas amargas pueden envolvernos a todos los argentinos. Por eso considero de fundamental e imprescindible importancia que en las elecciones de marzo demos el primer paso en serio, con un estatuto que dé amplia garantía a todos los argentinos por igual y que no nos cobije a todos otra ley que la Constitución de la República.

Me permito exhortar a aquellos que viven amasando odios y resentimientos, en particular a aquellos pequeños grupos que no son ni representan nada en la vida de la República y que viven especulando con la oligarquía y el goliato del país, para conseguir algunos votos, que

son pocos. Y los exhorto diciéndoles que se ubiquen en la realidad nacional. La República quiere vivir en paz y en democracia, pero una democracia efectiva y no manejada caprichosamente por sectores del privilegio, en contra y en desmedro de la mayoría auténtica y legítima de la República.

La Argentina no podrá salir del estancamiento en que se encuentra ni proyectarse como nación grande y soberana sin el esfuerzo de todos sus hijos, sin distinción de ninguna naturaleza. Y sus hijos quieren esto: paz, libertad y trabajo. Y no habrá paz, ni libertad, ni trabajo si este estatuto no puede brindarnos la oportunidad de dar comienzo a la tarea seria del esfuerzo común, que tenga como norma y como guía la felicidad del pueblo y la grandeza de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — No encontrándose en el recinto el señor diputado Gutiérrez, que es el que seguía en el orden de lista, tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Señor presidente; señores diputados...

Sr. Solari (E. A.). — Son pocos.

Sr. Pizarro. — Son pocos; podría nombrarlos, pero el reglamento no lo permite y debo dirigirme en consecuencia a la Presidencia para decirle que mi participación en este importante debate no significará sumar nuevos antecedentes históricos ni repetir los conceptos tan brillantemente expuestos por el presidente de nuestro bloque demócrata cristiano, sino que obedece al deseo muy sincero de destacar una de las muchas normas saludables que, en nuestro concepto, contiene el estatuto y a la que asigno particular importancia. Me refiero a la que limita la prohibición de afiliarse a los partidos políticos al personal de las fuerzas armadas y de seguridad y a los magistrados judiciales, como puede leerse en el artículo proyectado en el despacho que estamos considerando.

Al mismo tiempo, la democracia cristiana cree que es necesario agregar una norma, que puntualizaremos en el debate en particular, para asegurar a los demás agentes de la administración, a todos sin excepción, y también a los de la actividad privada, el ejercicio de sus derechos ciudadanos, en plenitud absoluta.

A mí me alegra, señor presidente, la prohibición que señalo, prohibición mínima pero no suficiente, porque con ella no reaccionamos en forma saludable contra la tendencia de los que no están convencidos de que la participación en política del ciudadano es un derecho y un deber al mismo tiempo. Y por eso es que nosotros vamos a insistir en la inclusión de una norma que ampare ese derecho, que está consagrado en la Constitución Nacional y que figura también en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que aprobó la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, así como para probar que

ese mínimo de restricciones a la afiliación a los partidos políticos es una reacción saludable que yo aplaudo.

Ahora sí, voy a hacer un poco de historia, pero no la historia de los partidos políticos, sino la de una tendencia que yo llamaría reaccionaria porque no encuentro otro calificativo más gráfico, y que en distintas épocas de nuestra historia ha pretendido hacer de los agentes del Estado una especie de subciudadanos sin derecho a participar en la vida de las agrupaciones políticas, permitiéndoles como generosidad el derecho a sufragar en las elecciones, sean nacionales, provinciales o municipales.

Para ello tengo que recordar que en Córdoba se dictó el decreto 2.524/56, serie A, que vulneraba el derecho de miles de agentes del Estado al impedirles participar en la vida de los partidos políticos, pues según el inspirador de ese decreto, la acción en los partidos políticos y la posibilidad de llegar a ocupar cargos electivos debía quedar reservada a los que fueran económicamente independientes, o sea aquéllos que no se encontraban en relación de dependencia con el Estado, que —¡oh, paradoja!— les negaba aquel derecho a quienes se encontraban en relación de dependencia con respecto a él. Esa disposición —repito— es violatoria de los más elementales principios en que nosotros sustentamos la democracia representativa que preconiza nuestra Constitución.

Yo comprendo, señor presidente, que a los agentes del Estado se les tiene que prohibir hacer política en las horas de trabajo, en función del cargo que desempeñan, y con los elementos de trabajo que el pueblo pone en sus manos. Pero no puede existir una prohibición más allá de los horarios de trabajo, prolongando indebidamente una relación de dependencia que no es justa ni tolerable.

Contra ese decreto del año 1956 yo arremetí en 1958 en la Legislatura de Córdoba, tratando que se redujera la prohibición a ésta que contiene el estatuto, a los agentes de policía y a los magistrados del Poder Judicial. Lo contrario —repito— sería impedir que lleguen a la función pública hombres de extracción de distintos sectores y quehaceres de la vida argentina, que estarían en consecuencia imposibilitados de aportar su experiencia y su opinión, que es necesario confrontarlas permanentemente en el armónico debate de una democracia representativa, como se exige a cada rato.

Está bien que se prohíba la actividad política de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y de la justicia. Ello es lógico, ya que sus propias tareas les imponen la necesidad de ser absolutamente independientes de cualquier política o postura partidista.

En tren de hacer historia, recuerdo otra norma contra la que también arremetí en la Legislatura de Córdoba; era la contenida en el

inciso i) del artículo 49 del decreto ley 1.910, serie E, del año 1957, que nosotros conocimos con el nombre de Estatuto del Docente.

Por esa norma se llegaba a la aberración de prohibir a los maestros participar en la vida política de la provincia. Era una prohibición a quienes por su preparación, por su cultura y por sus inquietudes intelectuales estaban en las mejores condiciones para aportar sus opiniones al estudio y a la solución de los graves problemas argentinos, y que hacía contraste con la libertad —bien merecida, claro está— que tenían los docentes secundarios y universitarios para participar en plenitud en la vida de los partidos. Esas prohibiciones violan los principios de la Constitución y por eso no será suficiente que el estatuto se limite a prohibir a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad y de la justicia esa actividad.

Es necesario que el estatuto, refirmando los principios de la Constitución, asegure a todos los habitantes del país, ya sean agentes del Estado, o de sus reparticiones descentralizadas o empleados en la actividad privada, el derecho a participar en la vida de los partidos, el derecho a participar en la vida pública argentina con plenitud, como decía al comienzo. Pero yo entiendo que una norma como esa que vamos a proponer en el tratamiento en particular no se podrá decir que está demás, porque aquellas prohibiciones son de una época superada. He recordado dos antecedentes de la época del gobierno defacto, de 1956 y 1957, en Córdoba; pero allí no todos han reaccionado contra esa política restrictiva tendiente a impedir que los empleados del Estado puedan participar en la vida política de la comunidad. Así, el señor gobernador de Córdoba, al que la provincia conoce por la tarea que está cumpliendo —más de tres mil agentes cesantes sin causas en la administración— agrega ahora a su historia un decreto, el número 2.578, serie A, originado en el Ministerio de Gobierno y publicado en el diario «Los Principios», de fecha 14 de noviembre, por el que se prohíbe terminantemente a los empleados públicos actuar en política.

Sr. Rodríguez. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Pizarro. — Con mucho gusto.

Sr. Rodríguez. — Creo que ha incurrido en un error el señor diputado. Es verdad que han habido cesantías en la administración pública de la provincia de Córdoba, pero la mayor parte de ellas han sido con sumario.

Sr. Pizarro. — Ese problema lo dejaremos para discutirlo en otra oportunidad, porque el tiempo de que dispongo no me permite darme el lujo de entrar en el tema. Confieso que el señor diputado me ha decepcionado con la interrupción, porque creí que se iba a referir a ese decreto que prohibió la actividad de los empleados

de la administración en la vida política de los partidos y que la democracia cristiana de Córdoba impugnó fundada en principios constitucionales. Para no demorarme en mi exposición en este punto, voy a pedir que a esta altura se inserte el texto íntegro de ese decreto, su parte de fundamentos y su parte resolutive, y también la impugnación que la democracia cristiana hizo en Córdoba pidiendo la derogación de ese decreto restrictivo que va a ser violatorio del estatuto.

Sr. Rodríguez. — ¿Me permite otra interrupción, señor diputado?

Sr. Pizarro. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Rodríguez. — Quiero recordarle al señor diputado que nuestra carta orgánica establece que el empleado público no debe intervenir en política, y no puede ocupar cargos partidarios, todo esto con algunas excepciones, pero muy pocas, entre ellas, la de los docentes, en general. De manera que no puede extrañarle al señor diputado este decreto, que es una refirmación de nuestra posición doctrinaria en esta materia.

Sr. Pizarro. — Entiendo que la plataforma de los partidos políticos, con la que puedo discrepar, son cosas respetables, y que respeto, pero lo que no me parece tan lógica es la posición del señor gobernador de Córdoba si leemos los considerandos del decreto que yo me he tomado el trabajo de leer y que no quería leer —por eso he pedido la inserción—. Pero para demostrar la equivocación del señor diputado me limitaré a leer unos pocos renglones: «El actual gobierno como expresión de un claro pensamiento democrático ha sostenido hasta ahora la conveniencia de dejar en libertad de acción a los funcionarios y empleados de la administración para que intervengan en la acción política interna de sus partidos.»

No sé cuando ha modificado su plataforma el partido gobernante en Córdoba; pienso que la ha modificado después de este decreto, porque el señor gobernador de inilicancia activa en la vida del partido en Córdoba y gracias a la cual ha llegado a la primera magistratura, dice que se ve obligado a cambiar un criterio que había tenido hasta entonces, de no limitar la actividad de los ciudadanos en la vida interna de los partidos. Es claro que por esta vía o por la de las cesantías o por aquellos discursos denunciando supuestos complotes ha logrado ser noticia el gobernador de Córdoba y ahora es noticia fresca y de actualidad porque estamos redactando un estatuto de los partidos políticos que va a ser ley de la Nación, que reafirmará el derecho constitucional, que figura también en la declaración de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, de agruparse en partidos políticos y participar en el gobierno de la cosa pública.

Las razones para agregar el artículo nuevo que proyectamos en el sentido de dar mayor garantía a la actividad de esos ciudadanos las he

de dar en su oportunidad, aunque creo que es suficiente la redacción del punto séptimo de nuestras discrepancias con el despacho que se considera.

Nosotros vamos a votar el estatuto porque es necesaria una ley en esta materia; porque la democracia cristiana sostiene el gobierno de la ley en oposición al mando arbitrario de los hombres. Por eso buscamos que el estatuto de los partidos políticos permita a todos participar en la vida cívica mediante la actividad primaria en esos partidos políticos, donde se van descubriendo los valores, donde los hombres van demostrando sus inquietudes y preocupaciones, donde en una selección de valores van promoviéndose para las altas magistraturas aquellos que mayores inquietudes, mayor empeño y que mayor dedicación han puesto en el estudio de los graves problemas argentinos.

Pero no son suficientes buenos partidos políticos y organizados, pues no debemos olvidar nunca que para que la vida democrática sea auténtica es necesario tener, además, un pueblo organizado. Es por eso que el señor diputado Vedia ayer ponía el acento en el problema de esas sociedades intermedias que son nuestra preocupación y nuestra vocación, para desarrollarlas y perfeccionarlas y hacer de la nuestra una verdadera democracia.

A través de las instituciones políticas, a través de esas sociedades intermedias, con una actividad plena y libre el hombre alcanzará su propia vocación, y en esas actividades, entre las muchas que contamos, señalo la política, que tiene importancia para el tema que nos ocupa, que es la que forma la conciencia cívica de los ciudadanos y por medio de la cual el pueblo ha de llegar a participar de la vida de los partidos y de la vida del gobierno, eligiendo sus autoridades en aquéllos y también en éstos.

Por eso la democracia cristiana quiere una comunidad organizada, sin exclusiones que nos lleve a una verdadera democracia; y cuando la comunidad argentina esté organizada plenamente y todos tengan la debida participación en lo político, en lo social y en lo económico, creo que podremos decir que estaremos llegando al umbral de esta democracia integral y orgánica que los partidos democráticos de verdad, sueñan y anhelan para la República.

Queremos que la democracia no sea sólo un régimen político aceptable. Para nosotros el concepto de democracia debe ir más allá de su acepción originaria y clásica, por encima de las deformaciones contemporáneas que la han desprestigiado hasta en su nombre; y muchas veces en su nombre se han cometido los fraudes y las violaciones a que se hacía referencia hace un rato en este debate, y a las que no me voy a referir, porque voy con ventaja, y no quiero aprovecharme de ninguna ventaja, sobre los partidos políticos que han sido gobierno en este país, y que reconozco que, junto con sus errores,

han tenido muchos aciertos que han permitido que la Argentina sea hoy uno de los países más adelantados, más cultos y más civilizados de nuestra América.

Pero nosotros creemos que debemos perfeccionar la vida en la democracia, y para ello es necesario asegurar la vida de los partidos políticos. Nosotros creemos que esa democracia sigue correspondiendo a una noble aspiración de la vida humana, y por eso queremos orientarla hacia una vida de orden en la libertad, de justicia por el derecho y de unión en la tolerancia.

La esencia de la democracia está constituida por un régimen de convivencia y no sólo por un aparato jurídico, ni por el sufragio universal, ni por cualquier otra manifestación de la voluntad popular; sostener lo contrario equivaldría a confundir el todo con la parte, el fin con el medio.

Sin embargo, estos instrumentos como el sufragio universal, es claro que son consustanciales e indispensables para la realización de la democracia política. De aquí que sea imprescindible para su existencia y vigor el asegurar a su vez la realidad y pureza del sistema representativo, mediante mecanismos de elección y de consultas variables, según las épocas y las circunstancias, teniendo en cuenta la realidad política de una sociedad en época determinada o, como se ha dado en decir, la coyuntura histórica de un país.

Los partidos políticos ejercen derechos cívicos primordiales, ordenan las diferentes tendencias de la opinión, prueban las vocaciones y aptitudes de los ciudadanos y organizan la cooperación popular en la función del gobierno. Por eso nadie puede estar excluido ni por razones políticas, ni por razones circunstanciales de dependencia.

Los partidos políticos deben ser respetados en sus derechos, sin otra condición que la leal observancia de la Constitución Nacional, debiendo cuidarse especialmente de eliminar toda confusión posible entre partido y gobierno, porque eso desvirtúa la pureza del sistema representativo y democrático.

La democracia cristiana se opone no sólo al concepto de partido como instrumento de despotismo en la incongruencia del partido único, sino también al bipartidismo, porque por esa vía, a un paso del partido único, se puede también caer en las exclusiones de que hemos visto fueron víctimas muchas fuerzas políticas representativas que hoy sientan sus hombres en estos escaños de la Cámara de Diputados de la Nación.

Por eso no nos gusta ni el partido único, ni el bipartidismo impuesto por la ley, sino la recepción de todas las posturas políticas en esta Cámara de la proporcionalidad que tanta satisfacción ha dado y ha de seguir dando a la democracia argentina.

Estas son las razones —y no voy a agregar otras, para no excederme en el término que me ha podido corresponder— que he dado en respuesta del Estatuto de los Partidos Políticos, y hemos de volver en su oportunidad para poner el acento en nuestra discrepancia y tratar de lograr de la Honorable Cámara sean acogidas en la medida de lo posible. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Juan Antonio Solari.

Sr. Solari (J. A.). — Señor presidente: en esta ya extensa y un tanto desvaída discusión de los dictámenes sobre Estatuto de los Partidos Políticos, el grupo parlamentario del socialismo democrático ha expresado su opinión de apoyo al despacho de la mayoría, a través de la palabra certera y ajustada del señor diputado Rozas. Por mi parte, me propongo formular algunas consideraciones o reflexiones en torno al despacho que vamos a votar afirmativamente y refirmar el criterio expuesto por mi estimado colega de representación.

Hemos sido siempre partidarios de normas claras, concretas y precisas en esta materia, no de leyes extensas. Nos ha interesado, ante todo, subrayar y salvaguardar los objetivos democráticos de los partidos con organización, programas y fines conocidos, conforme a la Constitución y a las leyes del país, autenticidad democrática en la vida interna de las agrupaciones y en la elección de sus representantes, garantías para los afiliados y el limpio e insospechado origen de los recursos. Ya en 1922 y en 1926 el entonces diputado nacional doctor Nicolás Repetto, mi querido compañero y maestro, proyectó algunas sanciones contra los delitos electorales. Sobre el mismo tema y la represión de fraudes comiciales existen iniciativas socialistas en los anales de este Congreso, en el Senado de 1936, 1940 y de 1942, así como un proyecto sobre partidos políticos, del año 1938.

Se tuvo en cuenta entonces —y esto nos preocupa ahora, esencialmente— la moralización y el adecentamiento del civismo y la política argentinos, y jerarquizar, sobre todo, las agrupaciones políticas.

He escuchado en el curso de este debate expresiones relacionadas con el escepticismo popular sobre la vida política de los partidos, incluso sobre la labor del Parlamento. Este es un fenómeno no exclusivo de nuestro país; es un hecho que, acaso, podamos ver reflejado en otras naciones políticamente más evolucionadas que la nuestra. Pero insisto en algo que también se ha dicho en este recinto: que en la medida en que los partidos políticos eleven su condición de escuelas de la ciudadanía, la democracia no sólo se hará efectiva sino que suscitará en el espíritu público la atención y la simpatía indispensables para que deje de ser lo que en gran parte es entre nosotros, una

preocupación, si no subalterna, pasajera y muy circunstancial.

Es claro que cuando nosotros hablamos de moral tenemos principalmente en cuenta un concepto de ese gran pensador laico argentino que fue Agustín Alvarez. La moral no es —decía— un rosario de reglas secas, sino carne y nervio, y cuando hablamos de moral política no nos limitamos a aceptar como tal la simple enunciación de buenas intenciones, sino la realización, abonada por la conducta, de una línea definida e inequívoca en la orientación y los propósitos que pueden y deben guiar a las agrupaciones y a los hombres políticos.

Esa es, en síntesis, la misma preocupación que nos domina hoy, sin prevenciones ni cálculos. Es una preocupación por la verdad de nuestra vida política que reposa, en primer término, en los partidos movidos por el interés social de la colectividad.

Esta no es una novedad. Yo no he necesitado ir a revisar las páginas de los voluminosos tratados que se escriben en los últimos tiempos a propósito de los partidos políticos y de la política en sí. He encontrado una definición a mi juicio elocuente y clara en las páginas del *Dogma socialista* de Esteban Echeverría, quien dice: «Políticamente hablando un partido es el que representa alguna idea o interés social; una facción, personas, nada más.»

Cuando nosotros hablamos de partido, de agrupaciones políticas, estamos hablando de un conjunto de hombres que intencional, reflexiva y conscientemente se han puesto, a la luz de sus ideas, de sus impulsos y de sus sentimientos, a trabajar por propósitos de bien social, más allá del interés limitado y menguado de personalismos, de grupos o camarillas. Siempre hemos establecido una diferencia sustancial entre lo que es la industrialización del electoralismo y la actividad política democrática y social.

Recuerdo que allá por 1930 fui elector de gobernador y vice. Este episodio ocurrió en la provincia de Buenos Aires siendo yo joven, y si mi memoria no refleja mal los hechos, me parece que tenía también entonces el placer de contar como colega al actual diputado Rozas. Probablemente inquieto por aparecer en el Diario de Sesiones, con lo cual me hacía la ilusión de immortalizarme por anticipado, pronuncié un discurso que después se difundió en un folleto con el título *Política socialista y electoralismo criollo*.

Ya entonces establecía esa diferencia, ese distingo, que a mi juicio es sustancial y es básico. Esa política tal como la concebimos y la entendemos, tiende —ojalá este estatuto sirva para ello— a formar ciudadanos conscientes y responsables y no clientelas comiciales. Por ello siempre nos hemos opuesto a la demagogia, a las promesas falsas y mentidas, es decir, a todo ese tipo inferior de caudillismo. Nos hemos preocupado, y queremos también que los otros par-

tidos se preocupen, por educar y orientar a la ciudadanía para que ésta se coloque a la altura de sus deberes y alcance cada compatriota dignidad y responsabilidad de elector.

Esto ya nos viene como ejemplo o como indicación docente, rectora, desde la época de Sáenz Peña. Sáenz Peña nos dio la ley que todos reverenciamos, aunque no siempre todos la hayamos cumplido con lealtad y probidad, indicándonos que él nos ofrecía un instrumento que abría la posibilidad de que el elector ejerciera sus derechos de tal, pero que al tiempo de asegurar la libertad del sufragio competía a los partidos formar al sufragante. Formarlo no mediante promesas engañosas, mediante mistificaciones, sino educándolo para la nueva democracia, para el nuevo tipo de vida político, social, económico y cultural que la ley Sáenz Peña abría como una amplia perspectiva al destino argentino.

Ese era el deber y la misión que históricamente señalaba Sáenz Peña a las agrupaciones. No hacerlo, no entender esto como el deber irrenunciable y elemental que tiene que corresponder a cada partido político, es declamar la democracia, es colocarse un poco en el mismo espíritu que tuvo en una época el pueblo ruso del tiempo de Pestel, cuando victoriaba la Constitución creyendo que se trataba de la mujer de Constantino.

Hay que vivir y practicar la democracia y darse a la labor de enaltecerla ética y políticamente, perfeccionándola de continuo con sentido y finalidad humana y social de profunda transformación.

Si los partidos políticos se entregan en su vida interna a servir un propósito de interés público confesado, y al mismo tiempo saben adaptar su programa, sus ideas, a las exigencias cambiantes del mundo en que vivimos, mundo de profundos cambios —yo diría de transformación revolucionaria y democrática— entonces la política seguirá interesando, o interesará cada vez más a vastos sectores de la población. De lo contrario, corremos el riesgo de languidecer, de vegetar, de convertirnos en pequeños cenáculos, y de seguir ofreciendo el espectáculo que despierta una indiferencia que realmente no es edificante y que sólo se matiza ante la perspectiva de la trayectoria nada triunfal ni honrosa de un Eneas criollo que va y viene sin destino conocido.

Hay una opinión de Kennedy que me parece útil para nosotros. Cito al ex presidente de los Estados Unidos con total convicción porque aprecio en su obra y su figura la expresión de una personalidad nueva en la política no sólo de su país sino del continente. Veo en él a un hombre que, no obstante su origen, supo interpretar necesidades y aspiraciones en el mundo nuevo en elaboración y en forjación.

Kennedy recomendaba lo siguiente: una convalecencia política es inoperante a menos que

sea revigorizada por una terapéutica económica. Y Juan B. Justo, el fundador de nuestro partido, hace años en esta Cámara, al penetrar en la realidad de su tiempo, decía con esa agudeza, con esa profundidad de pensamiento y claridad de estilo que lo singularizaba, refiriéndose a la manera de ser y de hacer de nuestra política: «Preguntemos a nuestros hombres más importantes de la llamada política cuáles son sus ideas. Todos nos dirán lo mismo: el bien de la patria, el engrandecimiento nacional, la honradez administrativa y la moral política. Se ha llegado a proclamar entre nosotros que no hay lugar a cuestiones económicas que dividan la opinión. Todo se reducirá a saber quién es el hombre capaz de hacer la felicidad del país. Con semejantes ideas —agregaba Justo— nada tiene de extraño que las facciones argentinas se valgan de todos los medios para llegar o triunfar, pues bien patriótico son el fraude y la revuelta si han de dar al país tanta cosa y tan buena.»

El mismo Justo, años antes, al escribir las páginas densas y magistrales de *Teoría y práctica de la historia*, había trazado un cuadro, desde luego con rasgos agudos y muy acentuados, de la política tal como él la había observado y en qué medida entendía que se podía trabajar para mejorarla. Es un pensamiento que hemos repetido muchas veces y que quiero incorporar a las páginas del Diario de Sesiones, para que quede, para que lo lea la gente joven. «En política —afirmaba Justo en *Teoría y práctica de la historia*— se miente; en política se mistifica, se oculta la verdad, y aun se simula el error cuando se tienen privilegios que defender o apetitos que pueden satisfacerse merced a la ignorancia y al engaño de los otros. Al politicastro cuya meta es el gobierno de un pueblo que desprecia, bástale tal vez conocer los vicios que ha de alimentar, los prejuicios que ha de adular, los fraudes y violencias que ha de cometer. Esta es la ciencia histórica necesaria para sus fines mezquinos y efímeros. Para llegar a la verdad histórica preciso es querer descubrirla en toda su desnudez, militar del lado donde no hay privilegios que disimular ni defender. Nadie como el pueblo trabajador necesita conocer la verdad en materia social; nadie como él puede proclamarla sin ambages; nadie como él sufre de sus propios errores, por lo mismo que son sinceros.»

El empeño histórico y fecundo de Justo, reconocido por las conciencias más alertas y menos perjudicadas, consistió en dar método y doctrina a la política argentina sobre la base de ideas, principios y la defensa de intereses sociales legítimos y en función, sobre todo, de las necesidades y exigencias del pueblo laborioso y consumidor. Este esfuerzo, que se tradujo en la organización del Partido Socialista —cuyo elogio no voy a hacer— iniciado a través de la prensa en 1894 y que culmina con su constitu-

ción en 1896, mereció el reconocimiento de hombres como Joaquín V. González, que lo presentó como el único partido de principios. También recogió el aplauso de un publicista de tanta nota y prestigio como Adolfo Posadas.

No subestimaré —porque tengo alguna experiencia y en cierta medida conozco la vida política del país— ni llego a menospreciar a los viejos partidos políticos argentinos que han venido actuando desde las horas iniciales de nuestro surgimiento como pueblo libre. Aquí cada representante de partido hizo su examen de conciencia, reconoció sus defectos y sus errores. Creo que si todos, generalizando ese examen de conciencia, llegáramos a ser sinceros con nosotros mismos, tendríamos que establecer en qué medida hemos acertado y hasta dónde nos hemos equivocado algunas veces. Esos viejos partidos de la política argentina giraban por lo general en torno de fuertes y vigorosas personalidades, muchas de ellas incorporadas legítimamente a la historia.

Desde la Revolución de Mayo se divide la opinión —digamos política— del movimiento revolucionario, a través de Moreno y de Saavedra. Sigue la evolución, siempre azarosa de nuestra vida política, y aparecen federales y unitarios; más adelante, los chupandinos y los pandilleros, después los crudos y los cocidos; los porteños y los provincianos, los hombres de Paraná o los hombres de Buenos Aires. Son grupos de hombres, no exactamente partidos políticos en el sentido con que nosotros los concebimos, que en una época dada de nuestra marcha política interpretaron sectores de opinión, más impulsados por sentimientos y anhelos, cuando no por luchas internas de predominio, que por ideas y por conceptos doctrinarios que los caracterizaran. De todas maneras, fueron instrumentos indispensables de una sociedad, de su tiempo, de su época, de su medio. Y los partidos evolucionados, adaptados a las nuevas circunstancias históricas, económicas y sociales, deben seguir siendo instrumentos también necesarios e indispensables de nuestra labor política, si no se quiere caer en el absolutismo o en el unicato basado en la violencia, la corrupción o el sistemático desprecio de derechos y libertades esenciales.

Es claro que no había que llegar al extremo de aquel gobernador de Salta, el señor José María Todd, que por decreto del 9 de diciembre de 1861 prohibió la existencia de partidos políticos en su provincia, reputando sedicioso al que en adelante se declarara de algún bando, debiendo todos los ciudadanos ser constitucionales, sumisos a la Constitución. Extremaba la medida.

Otra forma de impedir la acción política garantizada a los partidos y que hemos conocido es imponer, como bajo el totalitarismo, sea de

izquierda o de derecha, el partido único, con prensa única, radiodifusión exclusiva, sindicalismo monopolizado, ficción parlamentaria y judicial y con todos los recursos del Estado al servicio del régimen o sistema imperante. Esta situación es por desgracia conocida y sufrida por no pocos países del viejo continente y aun de nuestro hemisferio.

También es frecuente —y estas son reflexiones que me sugiere la realidad que hemos vivido, de la que por desgracia no estamos todavía muy distantes— trabar la tarea de los partidos mediante la interferencia arbitraria e impúdica del poder para hacer prácticamente imposible la libre actuación de los adversarios, no ya en el lejano interior, sino en el orden nacional, para no hablar de los fraudes, de las formas caprichosas dadas a los distritos electorales, del peso de las medidas gubernativas en favor de la fracción dominante, duena de todos los resortes administrativos y legales. Esto no puede considerarse democracia ni coadyuva a la formación de una esclarecida conciencia ciudadana. Es el sometimiento por la fuerza, la negación de toda posibilidad de actuación franca y fecunda de las diversas corrientes de opinión que hacen a la existencia misma de una democracia de verdad.

En estas ya largas tres décadas hemos acumulado una experiencia suficiente para no dejarnos confundir ni desorientar. A la venalidad, el fraude y el discrecionalismo de gobiernos electores y de partidos sumisos, hemos agregado los golpes militares, la consolidación de regímenes absolutistas, la presión de fuerzas e intereses de todo orden, fenómeno que no nos es peculiar, hasta llegar a la situación actual, con una legalidad institucional penosamente lograda y que a todos ha de interesarnos contribuir a afianzar y resguardar.

Comprendo, señor presidente, que el panorama político social de la Argentina no es ya el mismo de épocas que el país no puede olvidar, o por lo menos no debería ser el mismo panorama. Hay una influencia de nuevas corrientes y la presencia de crecientes necesidades del Estado moderno y del gobierno de cada país, que obligan a abandonar la mera declaración o la enunciación de buenos deseos para estudiar y resolver los problemas que hacen a la comunidad toda, más allá de limitaciones y especulaciones menguadas. Yo creo —lo digo sinceramente— que la gravitación de la democracia socialista y de las fuerzas del trabajo autónomas y libres —no apéndices del gobierno ni sucursales de determinado partido político— en sus luchas contra el privilegio, la ignorancia, la miseria, la enfermedad y el despotismo han constituido jornadas realmente importantes en la evolución progresiva de los países más evolucionados del mundo. Y pienso que ese tipo de democracia así sentido y así realizado nos está indicando el camino a seguir. Tengo presente el

ejemplo de algunos países, como Inglaterra, Austria, Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda, Dinamarca e Israel; este último, pequeño gran país que ofrece a la consideración de los estudiosos y de los sociólogos el ejemplo de una gran experiencia social y humana, acaso la más importante que se ha realizado en este siglo.

Esos países exhiben la posibilidad de una colaboración pública, confesada y honorable para hacer converger los distintos intereses y las distintas fuerzas sociales y políticas en un sentido constructivo y reformador. Esta colaboración de partidos de distinta extracción ideológica, como el caso de socialistas y católicos, está permitiendo la subsistencia de un gobierno democrático en Italia, y es tradicional en naciones como Austria y Bélgica.

Es claro que yo estoy hablando de eventualidades de la vida política, y esto tal vez sea motivo de una intervención en particular. Me estoy refiriendo a entendimientos, a fusiones, a coaliciones o a alianzas públicas sobre la base de programas conocidos —con ánimo de acatarlos— y no a tratos pampas o de trastiendas comiciales a espaldas de la opinión pública, decididos muchas veces sin consultar a los partidos respectivos y anunciados en forma sorpresiva en audiciones radiales, y que luego dan origen a una querrela de comadres que disputan o la paternidad de esos arreglos o de esos contubernios electorales —en el peor sentido de la palabra— o la existencia de esos pactos.

Este es el estado de espíritu con que sigo este debate y con que votaré el despacho de la mayoría, que es susceptible, desde luego —como ha dicho el señor diputado Rozas— de ser perfeccionado. Insisto en que si no mejoramos los partidos políticos —más aún, si no nos mejoramos nosotros mismos como dirigentes— de muy poco nos servirá el estatuto.

En los últimos veinte años se han dictado numerosos decretos y algunas leyes sobre esta materia. Decretos y leyes que muchas veces han atendido principalmente a preocupaciones y conveniencias del gobierno de turno a fin de asegurarse la sucesión o de evitar ser desalojado, mediante un juego de ajedrez ingenioso, tal vez, pero avieso o jesuítico. Todas esas no han sido sino combinaciones circunstanciales y salidas transitorias. He leído —y todos los señores diputados lo han hecho— los artículos de los decretos y de las leyes referidos a este tema, pero, ¿qué cumplimiento han tenido en la práctica?

En primer lugar, se han podido hacer pactos del tipo que he señalado. Se ha estado atento a instrucciones y a órdenes extrañas, al margen de los propios partidarios. Se han invertido sumas multimillonarias, cuya extracción exacta nunca se ha podido establecer y cuya inversión tampoco ha sido investigada, para una propaganda de tipo personalista, mítica y embrutecedora de los ciudadanos.

Por eso insisto en que, aun votado este estatuto, que va a contar con nuestra aprobación, no debemos pensar que todo va a depender de lo que aquí votamos. Lo fundamental radicará siempre en el grado de responsabilidad y de conciencia y en la vocación educadora y militante de cada uno de los partidos y de sus dirigentes y afiliados.

Yo pienso, por ejemplo, que ha sido más importante la aplicación de la representación proporcional para intentar el establecimiento de la legalidad democrática, tan precaria como se quiera, que hemos alcanzado, que los centenares de artículos, proyectados en los decretos y las leyes. Esta representación proporcional que, desde luego, a medida que se aplique irá también proporcionando la posibilidad de un reajuste de las fuerzas políticas para evitar la atomización, el rebrote incontenible de grupos y subgrupos, con todos sus defectos y sus deficiencias, es un ensayo, un hecho de importancia trascendental que tiene que contribuir cada vez más a vigorizar nuestra democracia y que nos ha permitido —con los límites de todo cuerpo colegiado— establecer una convivencia efectiva, seria y provechosa, con hombres provenientes de todos los horizontes de la política argentina, porque esto obliga a una colaboración para fines concretos, por lo mismo que debe ir cerrando el paso a la divagación y al charlatanismo. Aquí hay que estudiar problemas y votar leyes y para eso es necesario ponerse de acuerdo con hombres que están en el polo opuesto y cada uno tiene que acceder a las exigencias del juego político, juego respetable y respetado cuando se hace a la luz pública y responde a cosas también decentes y honorables.

Sobre los estatutos que se han proyectado, los partidos han expresado su opinión en todos los casos y sugerido modificaciones. Yo no voy a hablar sobre las críticas y modificaciones formuladas por el Partido Socialista Democrático porque me parece que es historia juzgada. Confío en que éste puede ser un paso firme hacia adelante. Se trata, en suma, de poner en manos de los partidos un instrumento para la acción que a cada uno de ellos le compete como organización y expresión de la democracia. Todo depende, reitero, de lo que sepan y quieran hacer para cumplir esta tarea los partidos y sus militantes.

He escuchado eruditas exposiciones para explicar qué debe entenderse por democracia y cómo deben defenderse las libertades que la resguardan y perfilan. No he querido, aunque todos tenemos a nuestro alcance una bibliografía bastante abundante, buscar a los autores de moda, autorizados o no, pero recuerdo que en el congreso socialista de la Internacional, realizado el 3 de julio de 1951 en Frankfurt, en la parte que se refiere, en el primer capítulo de ese programa, a democracia política, ofrece una definición de lo que nosotros, socialistas demo-

cráticos, entendemos como democracia y en qué sentido debe hablarse de democracia. Tomen nota los señores diputados de la importancia de este documento y advierto que no estoy haciendo propaganda política partidaria, sino estableciendo un hecho que tiene valor sociológico e histórico.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia advierte al señor diputado que ha vencido el plazo de que disponía para hacer uso de la palabra y le recuerda lo oportunamente decidido por la Honorable Cámara en el sentido de no prorrogar los términos. Por lo tanto, le ruega que complete su exposición en algunos minutos más.

Sr. Solari (J. A.). — Voy a terminar, abreviando lo que quería decir.

La Internacional Socialista se reunió después de la dramática, cruenta y dolorosa experiencia de dos guerras mundiales, luego de haber conocido el fracaso de los ensayos y experiencias de la República de Weimar, y de Austria y Checoslovaquia con impulso socialista y democrático, de la aberración del fascismo y del nazismo y, desde luego, de la tremenda guerra civil de España.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Guillermo A. Belgrano Rawson.

Sr. Solari (J. A.). — Había allí un caudal de hechos que la Internacional Socialista tenía que aprovechar y aprovechó. Entonces, en la primera parte del programa, que ha sido completado el año pasado en otra reunión de la Internacional, pero que subsiste en esto que es lo orgánico, que es lo orientador, se lee lo siguiente: «1) Los socialistas luchan por construir una sociedad nueva en la libertad y por medios democráticos; 2) sin libertad no hay socialismo. El socialismo no puede realizarse sino en la democracia; la democracia no puede expandirse, sino en el socialismo; 3) la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ella debe salvaguardar: a) el derecho individual a una vida privada protegida contra la intervención arbitraria del Estado; b) las libertades políticas, tales como la libertad de pensamiento, de creencia, de expresión y de asociación y de reunión, y el derecho de huelga; c) la representación por medio del sufragio universal, libre, igual y secreto; d) el gobierno por la mayoría y el respeto de los derechos de la minoría; e) la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin consideración de nacimiento, de sexo, de creencia, de lengua o de raza; f) la autonomía cultural para los grupos étnicos que poseen una lengua propia; g) la independencia ante el tribunal competente debe ser garantizado a todo acusado, el cual no puede ser juz-

gado más que en virtud de una ley; 4) los socialistas han luchado siempre en favor del respeto a los Derechos del Hombre. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe ser puesta en práctica en todos los países. 5) La democracia implica el derecho a la existencia de diversos partidos y el derecho a la oposición. La democracia tiene, no obstante, el derecho y el deber de protegerse contra quienes abusan de las posibilidades que ella ofrece con la finalidad de destruirla. La defensa de la democracia política es de interés vital para los trabajadores. Su salvaguardia condiciona la realización de la democracia económica y social. 6) Una política que se inspira en la salvaguardia de los intereses capitalistas no puede desarrollar ni unificar las fuerzas populares necesarias a la defensa de la democracia contra los ataques totalitarios. La democracia no puede ser defendida más que con la ayuda activa de los trabajadores cuya suerte está ligada al mantenimiento de aquélla.»

Aquí se tiene una definición concreta y expresiva de lo que debe entenderse por democracia. Me parece que las dudas a este respecto en cuanto toca a la expresión de «partido democrático» que aparecen indebidamente en cuanto al dictamen de la comisión, deben ser desechadas. Respecto a la necesidad de que las democracias se defiendan de sus enemigos casi siempre encubiertos y solapados, sean de los totalitarismos de izquierda o derecha, nazi, fascista o comunista, ese derecho es indiscutible e inalienable. La democracia no tiene por qué caer en el suicidio, sin perseguir a nadie ni prohibir que cada uno ejerza con amplitud el derecho de opinión. Pero tiene que ser sobre la base y en función de las disposiciones constitucionales y legales que permiten la intervención y la actuación de los distintos grupos en defensa de sus opiniones e intereses.

Sobre este aspecto me parece muy interesante lo que establece el artículo 15 de la Constitución reformada en el año 1949 bajo el gobierno justicialista. Tengo aquí un carnet de afiliado que contiene «Deberes del peronista», «Pensamientos de Eva Perón», «Pensamiento del general Perón» y «Constitución justicialista». Después hay algunas marchas que no sé si seguirán cambiando de hoy en adelante o habrá que cambiar el tono o la letra. El artículo 15 de esa reforma de la Constitución, dice: «El Estado no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido únicamente a las prescripciones de la ley. El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorias al sistema democrático en que

ésta se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes del Estado.

»Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean las del Estado, así como el uso público de uniformes, símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fines prohíba esta Constitución o las leyes de la Nación.»

Desde luego, suscribiría totalmente esta disposición, si no reflexionara sobre la realidad vivida bajo el imperio, siquiera sea fugaz, de esta Constitución, porque hay que tener en cuenta la enorme distancia que medió entre la letra escrita y su aplicación.

Señor presidente: entiendo que ha llegado el momento de que abandonemos las mentiras convencionales que autorizan las peores desviaciones políticas y morales. Hay que enfrentar resueltamente la tarea de asegurar el imperio de la libertad democrática, con verdad y amplitud, afianzándolo en hechos y no en simples palabras.

Este es el deber inexcusable de los partidos, órganos de la opinión pública. Toda política mezquina de comité, como toda actividad fundada en la facción o el servilismo, pondrá en peligro la suerte de esas instituciones. Tenemos ya larga y, con frecuencia, cruenta experiencia. Si realmente no queremos volver a un pasado reprochable, no lo actualicemos con nuestra conducta — menos aún intentemos aprovecharlo para turbios designios de predominio banderizo y granjerías electorales.

Si nos decidimos a trabajar con lealtad y sin ligaduras que paralicen el generoso impulso democrático que debe guiar a los hombres políticos representados en esta Cámara y a sus partidos, quizá podamos mirar con cierta fundada confianza el porvenir inmediato. Si no, nuevos y graves peligros, no sólo políticos sino sociales, pueden detener quién sabe por cuanto tiempo la marcha evolutiva y ascendente que todos sin duda queremos para la República.

Todos los ciudadanos de buena intención y probada adhesión a los principios democráticos pueden y deben enrolarse en esta acción perentoria. Si yo pudiera sintetizar, sobre todo después de algunos hechos que hemos vivido en estas últimas horas, cuál es la exigencia perentoria, no solamente de los partidos democráticos, sino del propio partido Peronista o Justicialista, lo haría en estos términos: nuestra preocupación, nuestro deber, nuestra misión tiene que ser canalizar el peronismo hacia la democracia y no la democracia hacia el peronismo o el justicialismo. Si todos entendemos eso y procedemos con claridad, con franqueza y nos ponemos verdaderamente a trabajar en ese sentido, estoy seguro de que vamos a contar con la colaboración de muchos de los hombres que ostentan

esa posición política y que la defienden con todo derecho en esta Cámara.

Tengo siempre presente —para no extremar vetos y repulsas y para no cerrarme la posibilidad de enmiendas y rectificaciones honorables— un caso que me parece ilustrativo. Alguna vez, estudiando con veleidad de historiador cierta etapa del pasado argentino, tropecé con una documentación que había pertenecido al constituyente Juan Francisco Seguí, sobre el que escribí algunas páginas. Entre esa documentación figuraba una carta de un hombre que había tenido una actuación muy destacada, pues había sido prácticamente uno de los voceros e intérpretes de Rosas en la legislatura de Buenos Aires. Me refiero al doctor Baldomero García.

Producido Caseros, envió a Urquiza, de quien había sido condiscípulo en la Escuela de San Carlos, una carta que constituía un mea culpa, de la que voy a leer algunas líneas, en la que explica el porqué de su actitud en la época en que actuaba en la legislatura, bajo el rosismo: «Rosas —dice— exigía de un orador que él reputaba diestro, un fuerte discurso, así como exigía de un diestro asesino una fuerte puñalada. Es la verdad y tengo necesidad de decirla ahora que nadie me infiere coacción. Aun así no estaba seguro.» Luego expresa: «Como político he sido lo que todos, desdorado súbdito de la más sangrienta tiranía; si he quedado desde un punto de vista ridículo, como lo dice hoy un periódico, todos hemos quedado así. Mi forzada parte en la política de Rosas consiste casi toda en mis discursos en la sala; quisiera que me fuese posible olvidarlos a todos, menos aquellos en que he defendido y demostrado los derechos de mi patria en las cuestiones con los extranjeros. Pero aun en estos mismos tenía, como los demás oradores, que humillar profundamente la cabeza cada vez que nombraba al general Rosas e incensarlo con repetición fastidiosa para mí y para todos, pero vitalmente requerida por él.»

Urquiza, que era un político avisado y sagaz, que conocía el temperamento de Baldomero García, a quien sabía no complicado en los hechos delictuosos y criminales de la tiranía de Rosas, aprovechó la colaboración de este hombre y lo nombró miembro de la Corte en 1854. Luego fue miembro del Senado, en el 55, en Paraná.

De manera que hay antecedentes y hechos que permiten establecer la posibilidad, como he dicho, de enmiendas y rectificaciones honorables y que nos obliga a no extremar vetos o repulsas por anticipado. Yo no estoy en ese estado de ánimo y no lo he estado nunca. La política es, desde luego, convivencia, es la posibilidad de trabajar en común, con propósitos y fines confesados; y todos aquellos de buena voluntad, de sincera conducta, incluso los que hayan podido cometer graves errores en el pasado, pero dis-

puestos a enmendarlos, deben ser aceptados para esta tarea que nos compete a todos.

Quiero traer otra cita. Es una cita histórica. En 1837 se realizó en Buenos Aires un banquete para celebrar el aniversario de la Independencia de Tucumán. En esa oportunidad se exhibió, por última vez, según Juan María Gutiérrez, a hurtadillas, la bandera nacional, que sólo flameó en Buenos Aires después de Caseros.

Echeverría, a quien he citado al comienzo de mi exposición, hizo un brindis en el que expresó estas palabras: «Quisimos ser independientes para poder ser libres. ¿Y lo somos, después de tantos sacrificios? No. El gran pensamiento de las revoluciones y el único que las sanciona y legitima, es la regeneración política y social; sin él sería la mayor calamidad. Tenemos independencia, base de nuestra completa regeneración, pero nos falta lo mejor, la techumbre, el abrigo de los derechos, el complemento del edificio político: la libertad, porque nuestra regeneración apenas si ha principiado.»

En 1846 el mismo Echeverría escribe desde Montevideo, donde estaba exiliado, a sus amigos de Chile: «No necesitamos ni queremos una restauración; pedimos una regeneración.» Por ello y para ello hemos venido trabajando y vamos a seguir luchando nosotros, según lo entendemos, y todos los que quieran aportar su esfuerzo para que así sea, haciendo honor a la Argentina, con la que yo me identifico, la Argentina de Mayo, de Julio y de Caseros.

La República surge de esa tradición histórica, liberal, humanista y justiciera, para ser la Argentina que redime con Moreno, liberta con San Martín, estudia con la gran generación del 37, gobierna con Rivadavia, piensa con Alberdi, organiza con Urquiza y Mitre, civiliza con Sarmiento, vota con Sáenz Peña, y con Yrigoyen, Justo y de la Torre, brega desde hace décadas por la verdad histórica y la justicia social. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Tiene la palabra el señor diputado Oreja.

Sr. Oreja. — Señor presidente: el actual quebranto de nuestra democracia política radica, a nuestro juicio, en el fenómeno que denominamos la crisis de la representatividad.

Esta expresión de desajuste entre los partidos formales y las corrientes auténticas de la nacionalidad, ha creado en el país la imagen de la crisis política. En última instancia, debemos convenir que esta crisis no deriva del episodio de una reglamentación, sino de una situación de fondo que opera en el subsuelo económico y social.

Expresada esta premisa inicial, debo declarar que habiendo tomado en consideración en primer término el mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo sobre ley orgánica de los partidos políticos, y posteriormente los despachos producidos, vamos a formular algunas conclusiones

básicas, sin que ello implique desconocer, desde luego, que algunas referencias al texto original de la iniciativa del Poder Ejecutivo, han sido modificadas y, a nuestro juicio mejoradas, por el despacho de la mayoría, advirtiendo además, aunque sea redundante, que nuestro sector político ha formulado su propio despacho, al que se refirió en la sesión de ayer el señor diputado Gómez Machado. Y paso a enunciar las conclusiones elementales.

Primera. — La representatividad de un partido no está determinada exclusivamente por su caudal electoral, sino también por la medida en que sea expresión de sectores importantes de la vida nacional, sean éstos políticos, sociales, militares, culturales, económicos, técnicos o religiosos.

Segunda. — Las fuerzas no políticas, que no se sienten representadas por los partidos, no pueden quedar marginadas en el moderno proceso de decisión nacional, y no puede el Estado ni la ley, por consiguiente, vedar su participación en listas de candidatos a aquellos ciudadanos que no se avengan a la formalidad de firmar una ficha de afiliación.

Tercera. — Para alcanzar gradualmente la suma de representatividad cuantitativa y cualitativa, los partidos no deben ser sometidos a disposiciones legales rígidas ni complejas. Estas deben limitarse a la marcación de normas generales que estimulen la consolidación de agrupaciones orgánicas, que expresen la realidad nacional sin deformaciones ni limitaciones convencionales.

Cuarta. — La obligatoriedad de la afiliación para ser candidato constituye un resabio de la vieja mentalidad electoralista y, además, implica una aberración constitucional y política. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, según el artículo 16 de la Constitución Nacional. Luego, todos los electores son elegibles. El derecho a formar partidos políticos (asociarse con fines útiles, según el artículo 14 de la Constitución Nacional), y a afiliarse a los mismos por parte de los ciudadanos, no puede entenderse como una obligación.

Quinta. — El sostenimiento de que el método democrático para la nominación de autoridades y candidatos partidarios es exclusivamente la elección partidaria interna, significa también una aberración y un aferramiento a esquemas superados de comicialismo obsesivo. Debe dejarse a los propios partidos que determinen las formas más idóneas y prácticas de nominar a sus autoridades y candidatos, sin excluir la elección interna, pero sin imponerla.

En las últimas elecciones nacionales —las del 7 de julio de 1963—, según informaciones, el registro de electores incluía a 11.353.890 ciudadanos, legalmente aptos para votar. No sé en este momento cuál será el aumento operado en el número de electores.

Sr. Villanueva. — Es de aproximadamente 600.000.

Sr. Oreja. — Estimo —estaba bien orientado— que para 1965 el registro de electores alcanzará a los 12 millones.

En el proceso actual de reorganización de los partidos políticos —no sé si los datos sobre afiliación en este momento reflejarán una realidad exacta, pero creo no arriesgar una opinión absurda— el conjunto de ciudadanos afiliados en todos los partidos políticos del país no habrá de exceder, seguramente, la cifra de dos millones, calculada con holgura, cifra ésta que representaría menos del 20 por ciento del total de electores hábiles. Pero, posteriormente a esta reflexión, debo señalar que según la Cámara Nacional Electoral, en su fallo denegatorio de la personería política requerida por el MIR, el 92 por ciento de los votantes que concurre a los comicios no tiene afiliación a ningún partido.

Este dato y la fuente que lo autoriza, vigorizan más la opinión que he sostenido sobre la inconveniencia de sancionar la obligatoriedad de la afiliación para figurar en las listas de candidatos.

En cuanto a la crisis de autenticidad de los partidos, a la cual me he de referir más adelante, apelo a la tesis de la Cámara Nacional Electoral, cuando afirma que el Estado debe asegurar a ese 92 por ciento que no sea víctima de maniobras engañosas o de falsas apariencias provocadas por los nombres de los partidos.

Ya veremos que ese fraude ideológico se perpetra impunemente en la actualidad, siendo este objetivo querido o no, porque los rótulos convencionales de la mayoría de las agrupaciones políticas, mantenidos como una herencia dialéctica sin fundamento en el presente, ni en el país que vivimos, no expresan la verdad doctrinaria ni programática de esas agrupaciones.

De manera que si se hubiera impuesto el criterio del Poder Ejecutivo sobre la obligatoriedad de la afiliación para ser candidato a cargos electivos, el 92 por ciento de los ciudadanos aptos para elegir se verían privados del derecho de ser elegidos.

Sostenemos también que nuestros partidos políticos, organizados en una necesaria tendencia de modernidad, deben tener una real filiación en nuestro proceso histórico.

Los actuales rótulos partidarios, en su mayoría, han sufrido transformaciones y deformaciones que en su formalidad no expresan el contenido doctrinario ni programático de las respectivas agrupaciones.

Las tradicionales denominaciones de izquierda, centro y derecha, son también hallazgos dialécticos que han sufrido la acción transformadora del tiempo y no expresan en este momento la vigencia de las grandes ideas mencionadas.

El peronismo fue combatido en sus orígenes como un movimiento de derecha. Su líder fue acusado de nazi, de militarista y de imperialista. Finalmente, y esto todos lo recordamos,

se lo calificó como revolucionario, izquierdista, sindicalista y anticlerical.

Yrigoyen en su tiempo fue combatido como germanófilo, como reaccionario y retardatario; pero desde otros sectores se lo atacó como obrerista, maximalista y demagogo. En los últimos tiempos de su segundo gobierno se alzaron voces en el país que lo acusaron de fascista.

Frondizi ha sido simultáneamente acusado de promilitarista, de clerical, de reaccionario y liberal. Mientras tanto, otros sectores de la opinión nacional le adjudicaban designios de propegonista de marxista y estatista deshumanizado.

Los partidos que actualmente constituyen la denominada Federación de Centro, después del derrocamiento de Yrigoyen, constituyeron una agrupación que se llamó Confederación de Derechas.

La infinita gama de la izquierda, salvo muy raras excepciones, no ha acertado a expresar ideas nacionales. Suelen ser sus grandes lemas referidos alternativamente a Cuba, a China o a Vietnam.

La democracia cristiana, que surgió como partido formal después de la caída de Perón, apareció en sus comienzos como una agrupación de filiación confesional...

Sr. Pizarro. — Eso es inexacto, señor diputado.

Sr. Oreja. — ... y como una moderada expresión de centrismo. Sin embargo, señor diputado Pizarro, su conducción la ha situado en este momento en las posiciones más polémicas de la izquierda.

Sr. Pizarro. — Pero nunca confesional, señor diputado.

Sr. Oreja. — Perfecto, señor diputado.

En cuanto a las fracciones del socialismo es evidente que también se contraponen, y algunas aparecen hoy alejadas de sus orígenes, convertidas en grupos académicos intelectualizados más que en fuerza revolucionaria del proletariado.

El viejo radicalismo también ha sufrido las naturales conmociones y transformaciones determinadas por el proceso. Las grandes banderas de la protesta armada, de la abstención, del sufragio libre y del cumplimiento de la Constitución han sido superadas por otras de contenido social, económico y cultural que, a nuestro juicio, hacen a las apremiantes exigencias del desarrollo, de la pacificación y de la integración nacionales.

Esta confusión y superposición de calificaciones, de encasillamientos y objetivaciones ideológicas, indican claramente que a la crisis de la representatividad se suma la crisis de la autenticidad. Entonces, la reorganización de los partidos no debe ser una instancia para confeccionar nuevas fichas, nuevos registros y nuevos padrones, sino que debe constituir la gran oportunidad histórica para una puesta al día acorde con la realidad nacional.

Hace unos instantes, haciendo referencia a la infinita gama de la izquierda, manifesté que, salvo pocas excepciones, no había logrado expresar ideales nacionales actualizados. En este aspecto, debo destacar, sin embargo, una excepción.

El Partido Socialista de la Izquierda Nacional, en su presentación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara y requerida su opinión sobre el proyecto de Estatuto de los Partidos Políticos, sostuvo lo siguiente: «El problema del estatuto se liga indisolublemente al de la ley electoral. El reemplazo de la ley Sáenz Peña por la llamada representación proporcional constituye una maniobra para falsificar la voluntad política del pueblo argentino. La proporcionalidad propicia la distribución de las corrientes fundamentales y el entrelazamiento de intereses espurios en los cuerpos colegiados. Contando las clases dominantes con sus formidables aparatos de centralización y poder, influyentes sobremanera en la mentalidad e intereses de gran parte de los "políticos profesionales", la dispersión electoral no las afecta en su íntima unidad de acción; antes bien las beneficia al gravitar sobre la gran corriente popular y alentar provocaciones y cismas dentro de ellas. Renunciamos, pues, a lo que constituiría nuestra conveniencia electoral inmediata, para afirmar que es imperioso volver al sistema de la ley Sáenz Peña, como avance relativo, pero no desdeñable, respecto de la actual situación.»

Esta opinión de una agrupación minoritaria de izquierda constituye una expresión que debe analizarse con seriedad.

Está bien marcado en el proyecto que consideramos el propósito de eliminar en los partidos el surgimiento o afirmación del personalismo.

Desde el punto de vista teórico y formal, la intención es correcta, pero no creo que se acomode con las esencias profundas y perdurables de nuestra modalidad nacional.

El personalismo ha tenido su grandeza y su decadencia. Estoy por afirmar que tiene ahora su resurgimiento. El error consiste en concebirlo inseparablemente unido al despotismo, al paternalismo y la dictadura.

En sus formas nacionales, el personalismo expresó los procesos de su época, y reemplazó siempre a la crisis de las formas liberales, al fracaso de las formalidades políticas.

Para combatir al personalismo, en el seno del radicalismo surgió el antipersonalismo. Y el antipersonalismo radical terminó identificándose con las corrientes liberales y conservadoras que son la negación histórica de lo radical.

Los pueblos, y sobre todo los pueblos de origen latino, suelen buscar en la personalización política la expresión de su fervor nacional y de su autenticidad democrática.

Si el régimen de la pluralidad dirigente, de la colegiación y de la proporcionalidad se esteriliza en la disputa de posiciones y de preciosismos doctrinarios, el pueblo impondrá la vigencia del personalismo como una necesidad histórica. Así ocurrió en Francia en 1958, y la fuerte personalidad del general de Gaulle ha impuesto un método personal innegable. Agrego que los líderes nacionales, sean o no de nuestro agrado —eso es materia aparte— gobiernan en viejas y en nuevas naciones con distintos signos ideológicos y políticos, traídos unos por revoluciones triunfantes y otros por coyunturas electorales. Y es evidente que Nasser en la República Árabe Unida, Ben Bella en Argelia, de Gaulle en Francia, Stroessner en Paraguay, Adenauer, en su momento, en Alemania, son ejemplos típicos de la imposición de formas personales. No pretendamos nosotros frenar con disposiciones legales el surgimiento de un fenómeno cuyo origen sólo puede explicarse en nuestro empecinamiento en sostener formas institucionales inadecuadas para hacer frente a las exigencias de la hora y del proceso. Los partidos inauténticos no sirven a la causa de la pacificación nacional. En la actual coyuntura y en la proyección venidera y previsible, los partidos deben ser órganos al servicio de la pacificación nacional, reclamo básico de la hora presente.

Es alarmante comprobar que en el término de un siglo los grandes movimientos nacionales cayeron del poder y no fueron reemplazados por quienes los derrocaron en nombre de históricas reparaciones, sino por terceras fuerzas, de signo liberal, que impusieron la ley del odio, de la revancha y de la persecución.

Urquiza y Lonardi, que al frente de fuerzas militares derrocaron a Rosas y a Perón, llegaron desde el interior a la ciudad de Buenos Aires y proclamaron la divisa «Ni vencedores ni vencidos». Urquiza la proclamó en el Pantanoso y Lonardi en Córdoba.

Ambos fueron a su vez derrocados y expulsados del poder y de la ciudad de Buenos Aires. Llegó a afirmarse por quienes de inmediato los sucedieron que ellos a su vez pretendían restablecer formar tiránicas.

En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la sesión del 19 de julio de 1857, el diputado Agrelo expresó lo siguiente: «Nos engañamos porque no fue Buenos Aires quien triunfó entonces, fue Urquiza, que quiso sustituir su persona a la Rosas, conservando las antiguas prácticas, los mismos hombres, iguales medios e idénticas doctrinas para dominar a la reina del Plata... Tal vez creía la mayoría de los ciudadanos que el país necesitaba del olvido completo de las faltas cometidas por los hombres de Rosas; pensaron sin duda que el perdón de los vencedores obligaría la gratitud de los vencidos.»

Un siglo después, el general Lonardi era derrocado el 13 de noviembre de 1955. En la noche del 3 de diciembre de ese año, cuando ya el general Lonardi se encontraba fuera del país, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República distribuyó un extenso comunicado sobre el «proceso postrevolucionario» en el cual se afirma que aquél «trataba de lograr lo que no pudo realizarse ni bajo el régimen de Hitler ni la dictadura de Mussolini».

La divisa «Ni vencedores ni vencidos» derrotó a quienes generosamente la sostuvieron. Lonardi volvió al país poco tiempo después, gravemente enfermo, y murió en la amargura de las negaciones oficiales. Urquiza fue asesinado. Pido a los señores diputados que lean las actas de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires del mes de julio de 1857 y advertirán cómo los dictados del odio partidista sancionan leyes aberrantes dirigidas a sustituir el fallo de la historia.

Es por ello que la exigencia fundamental y vital de esta hora no se refiere a los detalles de organización interna de los partidos ni a los eufemismos legales con que se aspira a aprisionarlos, sino al gran anhelo nacional de que sean estimulados para expresar con autenticidad al país y para trabajar al servicio de su pacificación. Sostenemos que la mayoría, libremente expresada, es fuente de soberanía política y, como tal, debe respetarse.

Dije al principio que la representatividad de los partidos no está determinada exclusivamente por su caudal electoral, sino también por la medida en que expresan a los sectores importantes de la vida nacional, en sus más variados aspectos.

Para referirme ahora a la representatividad cuantitativa de los partidos que ejercen los poderes nacionales como consecuencia del proceso electoral del 7 de julio de 1963, que concluyó marginando a considerables sectores populares, tomaré los resultados de las elecciones últimas, adjudicando los porcentajes de votos obtenidos, conforme a los informes suministrados por el Ministerio del Interior. Demostraré cómo en este aspecto la representatividad de los actuales poderes es altamente discutible, al punto que hay senadores nacionales que representan el cinco por ciento de los votos válidos de su distrito, y gobernadores de provincia que reunieron apenas el diez por ciento de esos votos, mientras en sus respectivos distritos el porcentaje de votos en blanco alcanza al 25 por ciento. Solicito que a esta altura de mi exposición se inserten en el Diario de Sesiones los cuadros estadísticos que tengo sobre mi banca, en los que constan los resultados de las elecciones del 7 de julio de 1963, en relación con los partidos que obtuvieron en los colegios electorales y Legislaturas posteriormente constituidas los cargos de gobernadores y senadores nacionales.

Sabido es que para las elecciones del 7 de julio de 1963 fueron adoptados sistemas reñidos con la tradición electoral del país, culminando con el veto de determinados partidos y la adopción de medidas violatorias de las Constituciones provinciales, como en el caso del distrito que represento, Río Negro, al que se le impuso la elección indirecta del gobernador, cuando su Constitución prescribe la elección directa del mandatario.

Esta experiencia poco feliz, sobre la que no extendemos el análisis en homenaje a la responsabilidad que a todos nos incumbe en alguna medida respecto de las circunstancias que las antecedieron, debe servirnos sin embargo para la reflexión en la presente instancia legislativa, a fin de no reincidir en la sanción de medidas que conspiran visiblemente contra el definitivo encauzamiento de nuestra auténtica vida democrática.

Ya hemos examinado la incidencia cuantitativa de los partidos políticos en los actuales poderes nacionales. Es sabido que el partido que ejerce el gobierno de la Nación recibió en los comicios del pasado 7 de julio de 1963 un caudal de sufragios que apenas supera el 20 por ciento del electorado.

En lo que respecta a la representatividad cualitativa de los partidos, es decir, su autenticidad como expresión de los importantes sectores que impulsan la vida nacional, el análisis ofrece muy serias conclusiones.

No es por cierto que falten partidos; por el contrario, han proliferado a partir de la caída del peronismo y particularmente desde que en 1957 se impuso el sistema de la representación proporcional para las elecciones de constituyentes. Si agregamos que las agrupaciones tradicionales han sufrido a su vez múltiples divisiones, tenemos como conclusión que la cantidad de partidos es tan excesiva como discutible resulta su representatividad, en muchos casos, respecto de las genuinas expresiones de la vida nacional.

¿Cuántos partidos políticos reconocidos existían al 7 de julio de 1963? La información oficial suministrada por la Cámara Nacional Electoral es a este respecto sumamente elocuente, y solicito también que en esta parte de mi exposición se inserte el respectivo cuadro estadístico que registra la presencia de los partidos inscritos en el orden nacional y en cada uno de los distritos.

Hay necesidad apremiante de fortalecer a los partidos, promover la formación de agrupaciones sólidas, representativas, que canalicen las grandes corrientes de opinión y sean intérpretes reales de los sectores vitales de la actividad nacional en su conjunto.

Las tendencias modernas en el orden de planificación económica y social exigen la presencia de los sectores representativos en el gobierno.

Esta aspiración es común a casi todas las corrientes políticas representadas en esta Cámara, tal como se registra por las iniciativas tendientes a promover la planificación de los grandes objetivos nacionales y a la creación del Consejo Económico y Social, con adecuada representación de las actividades económicas, sociales, obreras, profesionales, educativas y culturales del país. Este reconocimiento de la necesidad impostergable de incorporar a los sectores no políticos al mecanismo del gobierno, para afrontar con ellos las grandes responsabilidades, de la transformación que no puede demorarse, implica también un cambio sustancial en la actitud de la vieja corriente liberal que anima todavía a la mayoría de nuestras agrupaciones electorales.

El imperativo del desarrollo nacional, que, juntamente con el de la justicia social y el de la pacificación, signa a la presente generación argentina, exige la adecuación de los partidos a esos grandes reclamos, para que no subsistan como meras asociaciones electorales de muy precaria representatividad.

A este respecto considero que una contribución eminente al análisis jurídico-político de este tema acuciante de nuestra realidad nacional lo constituye la medulosa conferencia que, sobre «Formas institucionales para el desarrollo», ofreciera hace pocos meses el doctor Julio Oyhanarte en un curso dictado en el Centro de Estudios Nacionales.

No somos sostenedores del clasismo en la vida política nacional, porque hemos advertido que las viejas premisas dialécticas en este sentido han ido perdiendo vigencia, mientras surgían vigorosas expresiones en el esfuerzo de construir una nación moderna y fuerte.

Las agrupaciones tradicionales han cumplido su cometido histórico. El peronismo, haciendo abstracción de los aspectos polémicos de sus formas políticas, ha constituido un fenómeno político-social de profunda influencia en la transformación de la República. Bastaría citar que durante su vigencia en el poder, los grandes sectores proletarios tuvieron incorporación efectiva en la vida cívica nacional; las mujeres, que constituyen la mitad del electorado, y los nueve antiguos territorios nacionales fueron sumados, también, en un proceso irreversible, a la dinámica de nuestra democracia.

Insistimos en que la instancia presente debe utilizarse para que los partidos políticos se pongan al día con la realidad nacional, en el mundo de la descolonización y de la revolución tecnológica, convencidos de que la democracia política formal y la legalidad entendida como fin y no como medio no solucionan ninguno de los tremendos problemas que nos afligen.

Señor presidente: el mandatario que de acuerdo con los actuales dispositivos electorales resulta legalmente consagrado recibe las insignias formales del poder.

Pero la dura experiencia de los años recientes demuestra que el poder real continúa residiendo en otras áreas de la vida nacional. Dentro de ellas funciona el mundo de los factores de poder, extraños a nuestro mecanismo institucional, pero vigentes en la realidad de los hechos.

¿Vamos a seguir marginando esta experiencia, cuyo severo análisis exhibe la dramática coyuntura de nuestra endeble estructura democrática? ¿O vamos a acometer con coraje la tarea de actualizarnos para salvar la vigencia cierta del régimen republicano representativo de gobierno? ¿Vamos a seguir apelando a las proscripciones más o menos declaradas de determinados sectores políticos, o vamos a legislar para la libertad y para la promoción de las auténticas mayorías?

Estos interrogantes plantean el problema de fondo. Los factores de poder existen, son reales. También existen y son reales las fuerzas que, disimulando su responsabilidad a través de motivaciones aparentemente políticas, perseveran en su histórica oposición al desarrollo integral del país, a la definitiva derrota de la mentalidad agroimportadora, a la integración del movimiento nacional que tome el poder para la realización de los fines últimos del pueblo en su marcha emancipadora.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — La Presidencia señala al señor diputado que ha vencido el término de que disponía para su exposición y lo invita a cerrar su discurso.

Sr. Oreja. — Termino en seguida, señor presidente.

Nuestra posición está dirigida a alertar a la opinión sobre las graves acechanzas del proceso. Los partidos políticos pueden y deben cumplir su misión trascendente, a condición de que se integren como fuerzas dotadas de auténtica representatividad, derivada tanto del apoyo mayoritario del electorado como de la interpretación de los factores no políticos que inciden cada vez más en el panorama nacional.

Reconocer esta realidad no constituye, por cierto, una sospecha sobre la idoneidad del sistema democrático como mecanismo para la formación del gobierno, sino el afán de que adoptemos a tiempo las medidas que lo fortifiquen y lo autentiquen.

Refiriéndose a la incorporación del pueblo real a las decisiones políticas con el advenimiento de Hipólito Yrigoyen al poder, el doctor Matías Sánchez Sorondo formalizó este concepto: «En 1916 todo cambió. Por primera vez la aritmética electoral, maniobrada por un nuevo sentido colectivo, se impuso, secamente, sobre los valores consagrados por un largo examen de capacidad ante la opinión. El imperio de la mitad más uno, decisivo como la espada de Breno, gravitó en la balanza de nuestros destinos. Extrajo de la oscuridad o del misterio en que vivían a los nuevos rectores de la Nación.»

Esta frase expresa con desnuda severidad la filosofía reaccionaria de los que no confían en que sea el pueblo el titular de la soberanía política. Y para defender precisamente la vigencia de esa titularidad, es imprescindible reforzarla con la representatividad de los grandes sectores nacionales, pues de otra manera el simple factor de la aritmética electoral, deteriorado, por otra parte, como consecuencia del fenómeno proscripivo, no podrá sostener con eficacia la presión de los acontecimientos.

Hay que promover la incorporación visible de los factores de poder, reconociendo su vigencia y admitiendo que las fuerzas que los instrumentan deben ser analizadas en su composición incorporándolas al seno de nuestra democracia funcional, ya que el marginarlas no resuelve ningún problema y en cambio debilita las estructuras ya muy endeble de nuestro régimen.

Desde que el voto popular rige en nuestras prácticas cívicas, los tres presidentes electos por las más grandes mayorías, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi, resultaron depuestos por movimientos militares. Esta comprobación histórica podría llevar a la conclusión de que la soberanía popular como fuente del poder en nuestro país no ofrece garantías de estabilidad.

Las características de los movimientos que depusieron a estos presidentes y las circunstancias particulares de cada caso, difieren entre sí, como que entre 1930 y 1962 transcurre más del tiempo de una generación. Pero son idénticas las fuerzas que operan en el trasfondo del proceso, e idénticos los designios que se pretenden imponer en el reemplazo del poder, sobre todo en cuanto se refiere a la orientación económico-social.

Estas reflexiones, que hacen a la representatividad político-electoral de los ciudadanos exaltados al poder, son pertinentes así mismo para considerar el otro aspecto crítico al que nos hemos referido anteriormente, es decir, la presencia y operabilidad de los factores de poder que, no sintiéndose representados en las agrupaciones políticas, reclaman por otras vías, a veces insurreccionales, su parte de responsabilidad y participación en el gobierno.

Hace un momento me refería a las características de los movimientos que depusieron a los presidentes constitucionales elegidos por las más grandes mayorías, y a la coincidencia de las fuerzas que operan en el trasfondo del proceso común.

Vamos a señalar algunos episodios que revelan ciertas afinidades históricas.

En el acto de juramento del gobierno provisional resultante del movimiento militar de 1930, el 8 de septiembre de ese año, el ministro del Interior, doctor Matías F. Sánchez Sorondo, expresa lo siguiente: «El 6 de setiembre de 1930 marca en la historia argentina una de las grandes fechas nacionales, junto con el 25 de mayo

y el 3 de febrero. Son las revoluciones libertadoras. Y ésta es la única que ha triunfado después de la organización nacional, a diferencia de los otros pronunciamientos, porque destituida de carácter político o partidario sólo contiene la exigencia impostergable de salvar a las instituciones.»

Se trata, evidentemente, del preanuncio de la futura línea Mayo-Caseros, que definirá a la Revolución Libertadora de 1955, después de los sucesos del 13 de noviembre que alejan del poder al general Lonardi.

No es ésta, sin embargo, la única referencia que, en la distancia de los años transcurridos, exhibe la constante reveladora del proceso nacional.

Si examinamos el texto de la acordada de la Corte Suprema de Justicia del 10 de septiembre de 1930, por la que se acordó reconocimiento al gobierno defacto del general Uriburu, advertimos, en el párrafo tercero del punto segundo, la afirmación de que la Corte reconoce validez a los actos de los funcionarios de hecho, «cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razón de policía y de necesidad...»

La doctrina del «estado de necesidad» reaparece, como todos saben, en la justificación de graves medidas adoptadas por el gobierno defacto surgido el 29 de marzo de 1962, que llegan hasta la disolución del Congreso y la anulación total de las elecciones del 18 de ese mes y de ese año.

Es evidente que la historia no es una sucesión caprichosa de anécdotas. La continuidad y relación de los hechos que la determinan surgen del análisis detenido de los mismos.

En 1931, cuando se trata de imponer una fórmula presidencial que asegure la continuidad septembrina, las fuerzas conservadoras y radicales antipersonalistas coinciden en la candidatura presidencial del general Justo, pero difieren en cuanto al segundo término. Finalmente son proclamados dos candidatos distintos a la vicepresidencia: José Nicolás Matienzo por el antipersonalismo y Julio A. Roca por los demócratas nacionales. Los comentaristas de la época dirían, risueñamente, que el general Justo ha cometido «bigamia política».

Esta suerte de «bigamia política» se reproduce en la campaña de 1963 cuando el general Aramburu integra su fórmula con dos candidatos a vicepresidente, uno de extracción radical y otro demócrata progresista.

Nuestras desventuras cívicas se suceden a través de episodios desparejos, pero con una invisible línea conductora, que otorga coherencia a las etapas y los personajes.

En esta hora crítica para la defensa y sostenimiento de las estructuras políticas que caracterizan al Estado argentino, recuerdo la afirmación de Kelsen, en el sentido de que «la teoría de la representación es una ficción política que tiene

por objeto conservar la apariencia de la soberanía popular».

Hay quienes afirman que el democratismo se basa en un absurdo filosófico: el de que la mayoría siempre tiene razón.

Nosotros contestamos, sin ingresar al ámbito del derecho, que tenemos que dar la batalla por la subsistencia de la democracia sin artificios legales ni reglamentarios, porque en la medida que «convirtamos a los partidos políticos en órganos: regimentados y calificados que se alejen de la expresión auténtica de las mayorías, habremos creado un mecanismo endeble y transitorio que nos derrotará a todos en definitiva. «Los derechos individuales y los que tienen como sujetos titulares a las personas colectivas son la esencia misma de la democracia, así como la libertad que condiciona su ejercicio», sostiene Germán José Bidart Campos, en su importante ensayo «El mito del pueblo como sujeto de gobierno, de soberanía y de representación». Y agrega: «Cualquier forma de gobierno, aun sin técnicas electorales y sin partidos políticos, puede realizar la democracia. Que para garantía deba funcionar el mecanismo comicial o la organización de asociaciones políticas a la manera contemporánea, es otra cosa. Pero faltando, no quedaría esencialmente afectada la democracia, mientras la libertad y el derecho tuvieran efectiva vigencia».

La democracia, señor presidente, puede existir en Estados con formas de gobierno monárquica, como Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Holanda, etcétera; presidencial, como los Estados Unidos; colegiada, como Uruguay; parlamentaria, como Italia. Se refiere al ejercicio del poder estatal y no al origen de los funcionarios que lo desempeñan ni a la periodicidad de su ejercicio. Podríamos agregar, si no nos asaltara el escrúpulo de promover una polémica ajena a la naturaleza de la materia en debate, que en última instancia la democracia existe también en otros Estados de concepción ideológica antagónica a la nuestra, en la medida que sus gobiernos realizan objetivos nacionales, cuentan con una base de asentimiento popular y trabajan para la paz, el orden, el progreso y la convivencia.

En una reciente conferencia sobre el tema «República y democracia» dictada en la Cámara Argentina de Comercio («La Prensa», 28 de noviembre de 1964), el profesor Rafael Bielsa expresó algunas opiniones que considero oportuno glosar, advirtiendo que la intención de las mismas difiere sustancialmente de nuestro planteamiento, pero confiesa, en última instancia, una realidad que sus discípulos no siempre aceptan.

Dijo Bielsa que «hace más de veinte años que la Nación se debate en crisis de diversas clases: políticas, económicas y financieras. A partir de 1943, tres gobiernos defacto, envilecimiento progresivo de la moneda, mal vivir con la Constitución, inflaciones monetarias y legislativa. En

ese lapso se dieron decenas de leyes de emergencia sobre locación, problemas del trabajo, agremiación profesional y finalmente sobre representación proporcional, en pugna con la Constitución.

Después de señalar las diferencias sustanciales que a su juicio existen entre los conceptos de «república» y «democracia», añadió que «para ser un buen político no es necesario estar afiliado a un partido, puesto que quien estudia problemas sociales, económicos, jurídicos y se ocupa de ellos en la prensa, en el libro o en la conferencia pública es un verdadero político».

El profesor Bielsa califica un tanto peyorativamente a los que llegan a la función pública «por el favor popular», y expresa que «los votantes dan el cargo pero no pueden dar la idoneidad».

En esta expresión se advierte el trasfondo reaccionario de esta apreciación que podría reputarse objetivamente como correcta.

Finalmente, el profesor Bielsa señaló en su conferencia que «la educación republicana es la mayor garantía del buen éxito de una democracia; no sólo de la democracia del gobernado sino también de la del gobernante, es decir, aclaró, la que viene sustituyendo a la anterior, haciendo mayor el número de los que gobiernan directa o indirectamente, sin excluir las fuerzas de presión».

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — La Presidencia ruega al señor diputado que concluya su exposición, porque ya ha vencido el término de que disponía.

Sr. Oreja. — En vista de la tiranía del tiempo, voy a omitir una serie de consideraciones que tenía previstas, relacionadas con el fenómeno denominado apoliticismo y con la defensa de la democracia; pero deseo concluir con la referencia a un hecho significativo.

Hace muy pocos días, exactamente el 23 de noviembre, el diario «La Prensa» publicó un editorial importante que tituló «Asaltos a la historia y burlas al poder», en el que se refiere a una serie de hechos producidos en los museos y en lugares de significativa recordación nacional, por grupos de jóvenes de una filiación ideológica determinada, que reputa atentatorios a la historia y burlas al poder, y finaliza diciendo: «No sería inverosímil que cualquier día de éstos algunos grupos de «adolescentes», amigos de los museos históricos, tomaran posesión del de la Casa Rosada y, animados por la impunidad de rigor, se decidieran a subir de los sótanos al primer piso e instalarse en los más cómodos sillones.»

Yo acoto a esta referencia del diario «La Prensa», cuya preocupación comparto, que en el país se han producido hechos más graves que el de que esos grupos de adolescentes amenazan con llegar a los sótanos de la Casa Rosada: ha habido adultos que han llegado no a

los sótanos, sino al primer piso, se han instalado en el sillón constitucional, han desalojado al presidente elegido por la mayoría del pueblo y se han quedado. Lamentablemente, no recuerdo que una tan alta tribuna de expresión periodística se haya referido, con la condenación correspondiente, a esos hechos de tanta importancia y gravedad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. — Estamos presenciando un debate constructivo en su contenido sustancial y de alto nivel en el estilo. Se ha estudiado al partido político desde diversos ángulos y ese estudio realizado es ya suficiente. Se lo ha contemplado como manifestación del derecho natural del hombre de asociarse con fines útiles, que para el derecho es lícito. Se ha expuesto cómo actúa el partido político en el derecho público y como persona jurídica del derecho privado, adquiriendo derechos y contrayendo obligaciones. Se lo ha estudiado como auxiliar del gobierno en las democracias representativas. Se ha hablado de sus elementos constitutivos y de sus fines. Se recordó la historia del partido político en la República; del personalismo en los partidos políticos en su origen y en su trayectoria; se enunciaron las alianzas políticas previas a las elecciones en la República. Se los ha mostrado llevando dos pesadas cargas: el personalismo y las alianzas preelectorales. Se ha invocado a los partidos políticos que han nacido en la República con principios definidos y han seguido en su trayectoria inspirados en ellos. Se ha pretendido calificar etapas de la historia argentina con relación a la actuación de esos partidos políticos. Se ha pretendido explicar que tal etapa fue democrática, y tal otra, totalitaria. Se ha pretendido defender la posición de que tal etapa no fue totalitaria, sino democrática. Pero yo me pregunto con respecto a este último punto: ¿para qué volver sobre lo mismo?

Estamos realizando un estatuto que mira al futuro, estamos consignando en la ley los principios a que deben ajustarse los partidos políticos; sin proscripciones, se dijo, para ningún partido, pero sí exigiendo que estas asociaciones sean lícitas en la República.

Se ha hablado de los grupos de presión, de los factores de poder, de los grupos de tensión y de los grupos económicos, sin desarrollarse en esta Cámara la teoría que los explique, porque, reconozco, no era necesario dedicar ese estudio. Pero conviene recordar el principio de que el grupo de presión, de tensión o económico para actuar como tal necesita hacerlo con el propósito de obtener ventajas que sólo a ese grupo beneficien. Porque hay otros grupos que actúan por presencia ante el gobierno pretendiendo que éste cumpla con los fines totales del Estado.

Todo esto se ha dicho, y es suficiente. ¿Para qué volver a estos temas? Ha llegado la hora de la síntesis y del resumen.

El estatuto de los partidos políticos tiene varias características. Pretende vigorizar y crear partidos de ideas inspiradoras de una conducta determinada en la vida de la República; pretende que estas agrupaciones se basen en la ética; quiere que jueguen como instrumentos de la democracia, y se refiere a la materia electoral, sobre la que actúa la jurisdicción electoral.

He dicho que pretende la creación y vigorización de los partidos de ideas, como inspiradoras de conducta política. Idea y acción.

Hemos leído en los diarios de los últimos días una información fragmentada sobre una conferencia pronunciada por el profesor Rafael Bielsa, citado recientemente en este recinto, que tuvo lugar en el Instituto Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales. La publicación de la conferencia, repito, no es total; y no creo que se haya circunscrito el profesor Bielsa a decir nada más que esto: «Quien estudia problemas sociales, económicos, educativos, jurídicos, y se ocupa de su divulgación mediante la prensa, el libro, la conferencia, etcétera, es un verdadero y positivo político. Es el político útil» y sigue diciendo la información periodística: «De ahí que no debe considerarse como político a cualquier sujeto que se ha pasado la mitad de su vida en un comité, haciendo tiempo para ascender a determinada posición pública, electiva o burocrática.»

No creo que el profesor Bielsa haya querido hacer la división de la actuación política militante con la de aquellos que también actúan en la cátedra de la universidad o fuera de ella considerándolas incompatibles. Creo que las dos actividades se complementan, y estimo que eso es lo que habrá querido decir el profesor Bielsa, porque recuerda al ilustre ciudadano Nicolás Repetto, «quien después —dice— de un largo y ejemplar magisterio político, sigue tratando problemas de política».

Las dos actividades se complementan, señor presidente: la cátedra, dentro o fuera de la universidad, con la política militante, cuando el político como catedrático enseña a la juventud las angustias de su pueblo y le insta a que, en el futuro de su actuación, resuelva los problemas del Estado en base a la solidaridad humana; y el catedrático como político lleva todo su bagaje intelectual y la experiencia de su estudio a esa reunión de personas para canalizarla sobre principios seguros, a fin de llegar a la meta de la felicidad deseada.

En cada una de esas actuaciones o en ambas conjuntamente se realiza función política. Basta con mirar estas bancas del Parlamento para encontrar a catedráticos-políticos militantes que son ejemplos de la civilidad argentina. Recordaré a dos hombres del pasado: José Manuel Estrada, que inicia su vida política en la Unión

Cívica, fue profesor de derecho constitucional, y en su obra escrita desarrolló la teoría de la democracia científica; y a Joaquín V. González, que al decir del profesor español de derecho político, doctor Posadas —en una conferencia magistral que pronunciara refiriéndose a él—, lo veía actuar en la cátedra, en la función pública, en el gobierno, en los ministerios, en las Cámaras legislativas, como así mismo en el comité, cerca de la gente que sufre, que está pidiendo que el político, en la función pública, le resuelva sus graves y angustiosos problemas.

Sr. Muñiz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Rouzaut. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Me alegran mucho los conceptos que acaba de verter el señor diputado, los que traducen, evidentemente, su disconformidad con las ideas y las palabras expresadas por el doctor Bielsa en la conferencia a que se ha referido.

Los grandes ejemplos que el país recuerda, los que valen para la República, son los que acaba de señalar el señor diputado, esto es, los del catedrático, los del profesor de derecho constitucional, de derecho político o de otra asignatura, que han actuado o que actúan confundidos con el pueblo y los hombres de los partidos escuchando los reclamos del hombre argentino, sintiendo sus angustias y sus dolores. Pero no es esa, desgraciadamente, la posición en que se encuentran los profesores que viven la vida en palacios de cristal, ajenos a los clamores del pueblo.

He pedido la interrupción para expresar mi complacencia con las palabras del señor diputado, con quien coincidí en el desagrado por la mala conferencia pronunciada por el profesor Bielsa.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. — He querido expresar mi opinión sobre el catedrático-político; pero no puedo afirmar que el profesor Bielsa haya hecho la separación aludida. Repito, he querido señalar mi opinión. Afirmando que tal vez el profesor Bielsa ha dicho otra cosa, que podría aparecer si la publicación se hubiera hecho *in extenso*.

Bases éticas en los partidos políticos, señor presidente, he dicho, que es la segunda característica que imprime este estatuto a los partidos políticos.

Se exige la conducta moral de los afiliados entre sí; moral en la conducta de los afiliados con sus autoridades, moral en la conducta de los afiliados y de las autoridades con el pueblo; antes de las elecciones y después de las elecciones. El partido político se exhibe en el estatuto como escuela de civismo.

Estas dos características convergen en un fin, que es consagrar en el estatuto las garantías del afiliado. Por ello hemos formulado una disidencia oponiéndonos a las alianzas circunstanciales, en la forma establecida en el artículo 14. A través de las disposiciones de los diversos incisos del artículo 14 vemos la posibilidad de alianzas accidentales persiguiendo fines exclusivamente electorales. Estas alianzas accidentales —que no son fusiones permanentes de partidos— estarían en cierto modo contrariando la primera característica, que es la de perseguir la formación y vigorización de los partidos de ideas que inspiren determinada conducta partidaria.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, para hacer referencia a este tema de las alianzas?

Sr. Rouzaut. — Sí, señor diputado.

Sr. Serú García. — He pedido la interrupción para señalar que, a mi juicio, cuando la comisión incluyó en el despacho la posibilidad de las alianzas lo hizo con un criterio formado acerca de la conveniencia de que corrientes políticas afines puedan coincidir frente a una convocatoria electoral. Pero las finalidades últimas no son, desde luego, meramente electorales como equivocadamente ha señalado el señor diputado, puesto que al reglamentar la posibilidad de constitución de alianzas en el dictamen de la comisión se establece la necesidad de que presenten un programa o plataforma acordado por la autoridad partidaria correspondiente.

Además, no creo desde ningún punto de vista que al establecerse la posibilidad de constitución de alianzas se esté infringiendo el principio que campea a través de todo el despacho y que está destinado a posibilitar la formación de grandes corrientes de opinión. Por el contrario, creo que la formación de esas corrientes de opinión se facilitará con la realización de alianzas que siempre serán un primer paso que luego podría afirmarse a través de la constitución de federaciones y confederaciones y, finalmente, de fusiones en partidos nacionales. Es decir, que la alianza vendría a ser un primer peldaño en el camino que podrían recorrer las corrientes de opinión para llegar a constituir esos vigorosos partidos políticos a que todos aspiramos.

Sr. Rouzaut. — Nuestra disidencia con respecto al proyecto es precisamente porque los incisos que se refieren a los requisitos de las alianzas accidentales permitirían aquellas a que hizo referencia el señor diputado Solari, y que son perniciosas para la vida cívica de la República.

Segundo Linares Quintana, en su obra *Los partidos políticos, instrumento de gobierno*, en la página 190 nos dice que, «compréndese fácilmente la necesidad de que un partido político nazca a la vida pública con una declaración de propósitos y un programa de acción, condición ineludible para que no quede mera facción que surge con menguada finalidad electoralista».

«Las agrupaciones cívicas han de orientarse hacia el triunfo en los comicios, pero no como fin, sino simplemente como un medio para que sea posible el cumplimiento leal e integral de las aspiraciones que guiaron su creación.»

Cita luego Linares Quintana el magnífico editorial del diario «La Nación», del 10 de enero de 1877, que manifestaba que «Los partidos de principios siguen grandes rumbos, tienen un objetivo fijo, persiguen un ideal, hay en su horizonte una estrella que no se apaga jamás; marchan por la línea recta luchando, si es necesario, y en este camino triunfan o caen, fieles a su bandera y a su credo. Los partidos que no marchan por estas vías no son partidos, son sociedades anónimas que buscan un dividendo, traficantes políticos que se contentan con la mayor y menor postura, sombras de hombres que pueden figurar en una linterna mágica, pero no en el grande escenario donde se deciden los destinos de los pueblos, el porvenir de los principios y la ascensión de las ideas hacia la región de la luz.»

Rivarola, en su *Diccionario manual de instrucción cívica y práctica constitucional argentina*, en las páginas 449 y 450, referidas a los partidos políticos, dice que «cuando se habla de programa de partidos se debe atender ante todo a que respondan a una realidad espiritual. Damos este nombre a las ideas o a las pasiones, a las simpatías y antipatías, al bien que en anhela para el propio país y al peligro del cual se quiere salvarlo, al interés privado y a la concepción más definitiva o vaga del interés general. Los hombres se unen por comunidad de pensamiento o de sentimiento, de intereses económicos o de creencias morales.»

Y Linares Quintana, en la página 222, al referirse a las fusiones, acuerdos o uniones accidentales o permanentes entre partidos de distritos, dice que «son admitidas por el estatuto —que él comenta, que es el del año 1946— pero a condición de que sean aprobadas por el voto directo de los afiliados, por simple mayoría (artículo 74). Explicase que un acto de tanta importancia para un partido político, que puede tener como consecuencia hasta la desaparición del mismo, no debe llevarse a cabo sin el consentimiento de la mayoría de los afiliados. Además, y como lo expresa la nota a este artículo, razones de orden ético obligan a no autorizar esas «combinaciones» o «acomodamientos» que conspiran contra la sanidad política, en las cuales está ausente, olvidada o desconocida, la masa partidaria».

Y es así que en el proyecto de 1944, en el artículo 74, se dice que «las fusiones, acuerdos o uniones accidentales o permanentes entre partidos de distrito, deberán ser aprobados por el voto directo de los afiliados, por simple mayoría». Y en el artículo 125 se determina que «las fusiones, acuerdos o uniones de federaciones de

partidos de distrito, accidentales o permanentes, deberán ser aprobados por los dos tercios de votos de los órganos deliberativos de los respectivos partidos de distrito ratificadas por el voto directo de sus afiliados por simple mayoría».

Y en el proyecto sancionado por el Senado en el año 1946, con respecto a estos puntos también se expresa, que «las fusiones, acuerdos o uniones accidentales o permanentes entre partidos de distrito, deberán ser aprobados por el voto directo de los afiliados, por simple mayoría». Y cuando se refiere a la fusión de las federaciones, también expresa, que «las fusiones, acuerdos o uniones de federaciones de partidos de distrito, accidentales o permanentes, deberán ser aprobados por los dos tercios de votos de los órganos deliberativos de los respectivos partidos del distrito, ratificados por el voto directo de los afiliados por simple mayoría».

Con esto he querido significar que los elementos o requisitos que exige el artículo 14 pueden provocar la formación de alianzas accidentales no basadas en principios ni en programas. Solamente se requiere la presentación de una plataforma electoral para la elección, en donde se determine la manera de ordenarse los candidatos en las listas. Veo en esta redacción del artículo 14 solamente un fin materialista de obtener éxito en las elecciones, y ello va en contra de todo el articulado del Estatuto de los Partidos Políticos que estamos comentando.

Sr. Muñoz. — ¿Me permite una aclaración el señor diputado?

Sr. Rouzaut. — Sí, señor diputado.

Sr. Muñoz. — Como mi firma figura al pie del despacho de la mayoría, y el artículo 14 a que se refiere el señor diputado Rouzaut integra ese despacho, siento la necesidad de expresar que en la Comisión de Asuntos Constitucionales anticipé —no sé si el señor diputado lo recuerda— lo que me proponía manifestar cuando se tratara en particular el artículo 14, pero que lo hago ahora porque el señor diputado Rouzaut ha tocado el tema. Estoy en favor de las alianzas para los fines que el señor diputado señala, vale decir, nunca para una aventura y menos para un negocio político. Si acepto las alianzas para altas finalidades políticas que en un momento determinado pueden aconsejarlas, lo es cumpliendo con las prescripciones que, en el caso de la carta orgánica del Partido Socialista Argentino, son las que acaba de señalar el señor diputado: congreso extraordinario, dos tercios de votos de quienes integran la asamblea, etcétera.

Vale decir, que estamos en contra del acuerdo o del acuerdismo que se hace entre las cortinas de palacio, pero en favor de las alianzas que traducen realmente, en voluntad computada por métodos democráticos, el deseo casi unánime o mayoritario del pueblo partidario.

Mi aclaración obedece al propósito de reiterar que vamos a votar en favor de las alianzas, pero

con el sentido y el alcance que acabo de señalar. Me agradaría que la comisión encontrase una fórmula de redacción del texto legal que realmente asegure de una manera incuestionable, que en oportunidad de cada alianza se tendrá en cuenta, fundamentalmente, la opinión de los afiliados de cada uno de los partidos que la integrarán.

Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Señor diputado Rouzaut: la Presidencia le advierte que le resta ya poco tiempo para concluir su exposición y que, oportunamente, la Cámara decidió que a las 17 de hoy, se votase en general el despacho, restando aún cuatro oradores anotados.

Sr. Rouzaut. — La tercera característica que el estatuto imprime a los partidos políticos es que ellos se han de organizar, para servir como instrumento de la democracia, entendida como sistema de vida de nuestro pueblo. Con esto no se hace otra cosa que colocar a los partidos políticos de acuerdo con el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, único artículo que se incorporó a nuestra Carta Fundamental por aclamación a propuesta del convencional Huergo, para que no quedara duda de que en la República Argentina no podía discutirse ni en convenciones ni en congresos, que la vida de este pueblo debía ser siempre democrática. Así lo entendió la Convención de 1853 que, como digo, incorporó el artículo 29 a la Constitución Nacional por aclamación y sin discutirlo.

En su obra *Derecho penal argentino* —página 80—, Sebastián Soler estudia este delito, que yo llamaría «delito constitucional», porque está previsto en nuestra Carta Magna, castigando a todos aquellos que otorguen facultades, las formulen, consientan o las autoricen con su firma, que presupongan la sumisión del hombre en su vida, en su honor o en su patrimonio, a la voluntad de un gobierno o de persona alguna, aplicándoles la pena de los infames traidores a la patria. Dice Sebastián Soler en esa obra que el artículo 29 de nuestra Constitución es más amplio en su contenido que el Código Penal, ya que no sólo cometen el delito los legisladores del Congreso y de las Legislaturas provinciales, como lo contempla el artículo 227 del Código Penal, sino también todos los que otorguen, formulen, consientan o firmen actos de esa naturaleza.

Por eso todos los partidos que nacen a la vida pública sin ajustarse a los principios de la democracia —principios que ya no pueden discutirse, porque los acepta firmemente la ciencia política—, son asociaciones ilícitas que están condenadas por el artículo 29 de nuestra Constitución y que deben ser condenadas desde su tentativa de constitución —y en eso estamos todos de acuerdo—, porque constituirían la formación de asociaciones ilícitas que estarían

tentando la comisión de un delito previsto en la propia Constitución de la República.

El Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Litoral, en su sesión del 1º de septiembre de 1959, refiriéndose a estos problemas, dijo: «Cuando el artículo 29 de la Constitución declara de nulidad insanable, los actos por los que la vida, el honor y las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna y sujeta a los que las formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria, es la misma Constitución que obliga a la autoridad a negarse a realizar acción alguna que facilite directa o indirectamente la comisión de los hechos que atenten contra la democracia. Aun cuando el legislador admita a partidos antidemocráticos a participar en luchas comiciales, violando la Constitución en su artículo 14, que sólo reconoce el derecho de asociarse con fines útiles —y por lo tanto no delictuosos—, la junta electoral que con su inscripción hace posible esa actuación del partido político, no está obligada a facilitar el perfeccionamiento de un delito. Es la Constitución Nacional la que obliga a cualquier autoridad argentina a abstenerse de realizar los referidos actos.» Y eso juega en nuestro país y en todos los países que actúan democráticamente. Las mayorías y las minorías juegan ambas en función de gobierno; ellas actúan en colaboración jurídico-política para realizar función de gobierno en el cumplimiento de los fines del Estado.

En su obra *La democracia y el sistema de los partidos políticos en los Estados Unidos*, dicen Ranney y Kendall «...que en una verdadera democracia debe haber ciertas cosas que el gobierno no puede hacer nunca, aunque todo el pueblo así lo desee. El problema no reside en si deben gobernar las mayorías o las minorías; en una democracia real, tanto la mayoría como la minoría deberán estar subordinadas y controladas por una tercera fuerza: la ley, que en Estados Unidos podemos considerar como equivalente a la Constitución» (página 47).

Es por eso que creo que en este Parlamento no habrá sector alguno que esté en contra de aquellos principios del Estatuto de los Partidos Políticos que tiendan a evitar que en nuestro país existan partidos totalitarios, o que actúe solamente un partido. Todos los sectores estarán en contra de esos partidos porque tengo la seguridad de que todos pretenden vivir en democracia.

Maurice Duverger en *Instituciones políticas y derecho constitucional*, refiriéndose al partido totalitario expresa cuáles son sus características: la acción del partido totalitario desnaturalizará el programa del partido; porque así se presentan, con programas de estructura democrática, pero deformados en la acción. El jefe se convierte en absoluto y providencial,

y por lo tanto su meta es llegar a ser el conductor; la propaganda se hace mística; se destruye el diálogo para conquistar el poder; se exige obediencia en lo interno y se persigue en lo externo; se destruye la opinión pública; no se quiere que haya sujetos activos en la formación de la opinión pública; la opinión pública solamente la pretende hacer el conductor. Ahí está la diferencia con la democracia: todos deben ser sujetos activos de la opinión pública. Los dictadores, en cambio, convierten a los sujetos activos en pasivos y destruyen todos los elementos que dan publicidad a la opinión pública real. Así se destruyen los partidos políticos, el Parlamento, que se somete, y la prensa libre. Se realiza fraude preelectoral, porque se pretende hacer aparecer la opinión pública como real, pero en verdad lo existente es una opinión pública aparente.

El dictador usa del prebiscito y aparece de tanto en tanto reunido con el pueblo; pero controla y provoca la reunión, pretendiendo demostrar identidad entre el conductor y el pueblo conducido. Así se llega a lo que dice Domenech en su obra *La propaganda política* —página 46—, recordando cómo por medio de estos partidos totalitarios se convierten los hombres en autómatas; los hay que se rebelan espiritualmente, porque no quieren verse sometidos, pero la propaganda ahoga la capacidad de comprensión y viven fascinados.

Otra de las características que el Estatuto de los Partidos Políticos nos presenta, es que ha incorporado otras normas a la materia electoral, sometida a la jurisdicción electoral. Si yo tuviera que definir qué se entiende por materia electoral, diría que es el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos de los habitantes en la designación de sus representantes, la constitución y funcionamiento de los partidos políticos, para que éstos sean escuela de civismo, exponentes de la opinión pública e instrumentos de gobierno en la democracia.

La materia jurídica electoral da fundamento a la jurisdicción electoral. La materia electoral es este conjunto de normas que estamos tratando consignadas en el Estatuto de los Partidos Políticos, y la jurisdicción electoral es el órgano que ha de resolver esa materia. Bueno es recordarlo, que jurisdicción electoral no es la misma cosa que jurisdicción federal a que se refieren los artículos 67, inciso 17, 100 y 101 de la Constitución Nacional. En el campo constitucional debemos hacer esta distinción entre lo que es el caso federal y la materia electoral. Por eso nosotros nos vamos a oponer al cambio de nombre que un sector político pretende introducir a un artículo de este estatuto, auspicando llamarla «justicia federal» y no «justicia nacional electoral» como lo proponemos.

El «caso» a que se refiere nuestra Constitución en los artículos 100 y 101 está analizado por Montes de Oca en el tomo II, página 402, de su obra: «Es una contienda de derecho entre

partes; es un pleito, un litigio tramitado de acuerdo con las formalidades judiciales que las leyes establezcan.»

Story, en sus *Comentarios* —número 897—, dice: «Se puede preguntar lo que debe entenderse por caso, en el sentido de la disposición que nos ocupa; es claro que el Poder Judicial puede ejercer su jurisdicción siempre que la cuestión tenga un carácter litigioso que pueda ser resuelto en los tribunales. Cuando la cuestión ha tomado ese carácter se convierte en una causa y entonces solamente es que el Poder Judicial está llamado a pronunciarse. Una causa, pues, en el sentido constitucional existe cuando una contestación, nacida bajo el imperio de la Constitución, de las leyes o de los tratados de los Estados Unidos, es sometida a los tribunales federales por la parte lesionada, que reclama sus derechos en la forma prescrita por la ley. En otros términos, un caso es un proceso iniciado conforme a los procedimientos ordinarios judiciales. En el caso «*Malter of Pacific R. Commorion*», dijo la Corte de Estados Unidos: «El término implica la existencia de partes contrarias presentes o posibles cuyas contiendas están sometidas al tribunal para su resolución.» Esta es la tesis que ha sostenido nuestra Corte Suprema Nacional en el tomo 115, página 163; tomo 95, página 250; tomo 148, página 323; tomo 145, página 242.

Cuando el artículo 29 de la ley 27 se ha referido al caso federal, ha dicho que nunca la justicia federal procede de oficio, y sólo ejerce su jurisdicción en los casos contenciosos en que se requiere la instancia de parte.

Caso, causa y litigio es la misma cosa para la Constitución. Jofré lo reafirma en su *Manual de procedimientos*, en el tomo III, página 302. Pero una cosa es la «causa» federal de los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional y otra la materia electoral, en la que no es indispensable que exista el caso, causa o litigio; porque el órgano al que se le da jurisdicción especial puede actuar en materia que no sea litigiosa; algunas veces sólo basta una constatación. En el decreto 7.163 del 24 de julio de 1962 se hace esta diferencia: «Hasta tanto se designen los nuevos jueces electorales, sus funciones serán ejercidas por los jueces nacionales en lo federal que actualmente tengan competencia electoral, con apelación ante la Cámara Nacional Electoral.» Puede la ley, en virtud del artículo 67, inciso 17, de la Constitución, establecer jueces electorales o dar jurisdicción a los jueces federales sobre materia electoral.

Dice el artículo 67, inciso 17 de la Constitución: «Establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones...» Puede la ley, entonces, fijar a los jueces federales y cámaras federales, otras atribuciones, además del caso o causa previstos en los artículos 100 y 101; pero siempre para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia. Pero cosa distinta

ocurre con respecto a la Corte Suprema Nacional, la cual tiene establecida su jurisdicción tanto apelada como originaria en los artículos 100 y 101 de la Constitución, que solamente se refieren al caso o causa. El artículo 100 establece cuáles son las causas a que se refiere el artículo 101, el cual dispone que: «En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso.» Es cierto que el Congreso puede establecer reglas y excepciones, pero no ampliar la jurisdicción de la Corte más allá de lo que se refiere el artículo 100. Esto va, precisamente, para aquel sector que pide una tercera instancia ordinaria para ante la Corte Suprema Nacional en algunos casos de decisión de la Cámara Nacional Electoral. Significo así, que opinamos que la Corte Suprema Nacional no puede intervenir por el recurso ordinario de apelación en tercera instancia en materia electoral.

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — La Presidencia lamenta advertir al señor diputado que ha vencido el término de su exposición.

Sr. Rouzaut. — Concluyo, señor presidente, aun cuando mucho me falte decir sobre las disidencias que hemos formulado.

Creo que hemos proyectado un estatuto que persigue el imperio de la libertad en la convivencia social. Tengo la firme seguridad de que la totalidad de los miembros de esta Cámara están de acuerdo con la mayor parte de sus normas, y podría también afirmar, sin lugar a dudas, que están de acuerdo en todo lo que el estatuto reafirme la libertad del hombre.

Creo que nadie se resignaría a perder la libertad. Todos los que formamos parte de esta Cámara podríamos repetir las palabras de Estrada en su magnífico discurso sobre la virtud democrática: «Abnegación, tengámosla en buena hora cuando el dolor personal nos despedaza el alma; pero cuidado con ella cuando está comprometida la libertad, nuestra libertad, la de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Abnegación pedía Juan Manuel de Rosas; abnegación piden todos los tiranos, y ya sabéis para qué la piden. Una sola es lícita: la de morir por la libertad; la abnegación de Marcos Avelleda y Florencio Varela». (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Belgrano Rawson). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Señor presidente: la mayoría de la comisión ha expresado que, con la sola excepción de un sector de los representados en ella, todos los demás «han coincidido en algo fundamental cuya trascendencia medirá el país: un despacho común con la coincidencia en lo modular».

Somos un sector y estamos muy satisfechos, señor presidente, de nuestra discrepancia, porque marca una línea política inconfundible. Lamentablemente, no hemos podido acompañar a la mayoría en su dictamen, porque diferencias,

precisamente, medulares de concepción, en lo que debe ser un estatuto de los partidos políticos, nos han llevado a montar esta actitud de disenso.

Oponemos, al intervencionismo que campea en el despacho de la mayoría, la filosofía anti-intervencionista de nuestro dictamen propio, concretado en la simplicidad de la norma legal, en el mínimo contralor de Estado, en la eliminación de todo atisbo de discriminación ideológica y, fundamentalmente, en la neutralidad de sus previsiones.

Nuestro dictamen tiende a tutelar el bien jurídico de los ciudadanos, cual es el derecho político a expresarse de acuerdo a su voluntad soberana de elegir los candidatos que más consulten a sus ideas e intereses, y de intervenir en los actos electorales sin proscripciones ni interdicciones practicadas en el exclusivo interés de la fuerza eventualmente gobernante.

Afirmo, además, que nuestro dictamen está concebido, no sólo —y esto es lo importante— en concordancia con los principios políticos democráticos, sino también —y esto lo subrayo, señores diputados— en función de la realidad concreta, de la experiencia vivida y de las circunstancias precisas del actual acontecer político nacional.

Obligadamente, no podemos concordar con el despacho de la mayoría, por tres razones fundamentales: primero, porque ese dictamen deja subsistente la llamada justicia nacional electoral creada por decreto ley 7.163/62, que será la encargada de aplicar este estatuto; segundo, porque a pesar de que se expresa en el informe del dictamen de la mayoría de que ahora en más este estatuto «quedará en manos del Poder Judicial», nosotros sostenemos que es una declaración nominal, toda vez que se desconoce la realidad concreta, porque en los hechos no existe el Poder Judicial Electoral de la Nación, como lo voy a demostrar a través de esta exposición, y, tercero, y fundamentalmente, porque contrariamente a lo que se expresa de que se eliminan las proscripciones, hay cláusulas en este dictamen de la mayoría que posibilitan las interdicciones políticas, como ser los artículos 3º inciso b), 21, 22 y 63, inciso c).

Nuestro primer disenso radica en que el dictamen de la mayoría deja subsistente la llamada Justicia Nacional Electoral, corporizada en este momento por la Cámara Nacional Electoral juzgadora en última instancia, toda vez que los jueces electorales no han sido designados y actúan interinamente como tales los jueces federales de sección (artículo 40 del decreto ley 7.163/62).

Se sostiene que la Justicia Electoral integra el Poder Judicial de la Nación. Pero esto no es más que una declaración formal, desprovista de realidad. En los hechos la Justicia Electoral constituye un cuerpo extraño segregado del Po-

der Judicial y directamente ligado al Ministerio del Interior, como se admitiera a una delegación del MID cuando fue consultada por el ministro sobre el estatuto. Por lo demás, existen múltiples aspectos organizativos y funcionales que ponen de relieve el carácter anómalo ambiguo y, en definitiva, no judicial de la llamada «justicia electoral» corporizada actualmente por la Cámara Nacional Electoral.

Primero: los requisitos exigidos a los miembros de la Cámara Electoral son distintos a los que le son exigidos a los jueces que integran las Cámaras Nacionales de Apelaciones. Para los que integran las Cámaras Nacionales de Apelaciones, la ley les exige ocho años de ejercicio de la profesión de abogado, en tanto que por el decreto ley que creó la Cámara Nacional Electoral se les exige a sus miembros tan sólo seis años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.

Segundo: las disposiciones atinentes a la presidencia. La presidencia de la Cámara Nacional Electoral es permanente; en cambio las presencias de las Cámaras Federales, auténticamente incorporadas al régimen judicial de la Nación, no son permanentes, sino que son rotativas anualmente. Además, se reconoce la existencia de vicepresidencias.

Tercero: en la Cámara Nacional Electoral la división en salas es facultativa; en cambio, en las cámaras judiciales la división en salas es obligatoria.

Cuarto: las facultades disciplinarias de la Cámara Nacional Electoral respecto de los letrados, profesionales, litigantes, etcétera, son mucho mayores que las de las cámaras nacionales federales que integran el Poder Judicial de la Nación, ya que la Cámara Nacional Electoral puede aplicar arresto hasta de treinta días; en cambio las cámaras judiciales tan sólo pueden aplicar arrestos hasta cinco días.

Quinto: las designaciones de los miembros de la justicia electoral se hacen por intermedio del Ministerio del Interior (decreto ley 8.163/62, artículo 19); en cambio, la designación de los jueces que integran las cámaras nacionales judiciales se hacen por intermedio del Ministerio de Educación y Justicia (ley 14.439, artículo 12, inciso 14).

Sexto: las relaciones de la justicia electoral con el Poder Ejecutivo se establecen por intermedio del ministerio político del Poder Ejecutivo, cual es el Ministerio del Interior (decreto ley 7.163/62, artículo 19); en cambio, las relaciones del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo no se entablan sino sólo por intermedio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a través del Ministerio de Educación y Justicia (ley 14.439 citada).

Séptimo: en cuanto a los gastos de instalación y funcionamiento de la justicia electoral, se han incorporado al anexo 25 del presupuesto, que es el anexo atinente al Ministerio del Interior (decreto ley 8.163/62, artículo 19).

Octavo: la Cámara Electoral confecciona el proyecto de presupuesto de la justicia electoral y lo eleva al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio del Interior (decreto ley 7.163/62, artículo 99, inciso k). En cambio, el presupuesto del Poder Judicial es proyectado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elevado al Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Hacienda (artículo 12 de la ley de contabilidad y decretos 975/59 y 5.948/59).

En virtud de todo esto, así como del origen de la justicia electoral nacional, salido, como sabemos, de un decreto ley suscrito por el ex ministro del Interior del gobierno defacto, el doctor Carlos Adrogué, es lícito afirmar que no obstante su modo de designación y su inamovilidad, y a pesar de la declaración formal del decreto ley 6.407/63 de que esta cámara integra el Poder Judicial de la Nación, lo cierto es que a pesar de eso las personas a quienes se les han otorgado facultades omnimodas en punto a la vida —y a la muerte— de los partidos políticos, no tienen status de magistrados judiciales.

El hecho verdadero, público y notorio, patentizado por disposiciones legales como las que dejo señaladas, es que esas personas tienen la condición de meros subordinados del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, con el que mantienen relaciones directas y personales, al margen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como consecuencia de ello y de su demostrada parcialidad, la Cámara Nacional Electoral constituye una pseudomagistratura totalmente descalificada. En el mundo forense nadie cree que los integrantes de dicha cámara sean jueces en la estricta y elevada acepción del vocablo.

Hay numerosas razones que justifican este concepto.

Me limitaré, porque he dicho que voy a hacer el examen de estos asuntos a la luz no sólo de la teoría política sino de la realidad concreta y de la experiencia reciente, a enunciar cuatro casos en que ha intervenido esta Cámara Nacional Electoral, para demostrar su grado de parcialidad en los procesos electorales que le ha tocado presidir.

a) Con motivo de las proscripciones decretadas por el gobierno defacto contra la Unión Popular para el comicio del 7 de julio de 1963, se dispuso que este partido no podía concurrir con candidatos a electores de presidente y vicepresidente y electores de gobernador y vicegobernador de las provincias (decreto ley 4.046/63). Posteriormente se extendió esta prohibición a todos los partidos que, bajo cualquier denominación, presentaran los mismos candidatos a electores para presidente y vicepresidente y para gobernador y vicegobernador que hubiera pretendido oficializar la Unión Popular o que hubieran sido afiliados a esa agrupación o participantes en ella (decreto ley 4.874/63).

A raíz de estas disposiciones en el último proceso electoral, en Entre Ríos ocurrieron cosas de

extraordinaria gravedad, porque con motivo de toda esta legislación proscriptiva, se eliminó totalmente la lista de candidatos a electores para presidente y vice y para gobernador y vice de la provincia del Partido Tres Banderas, por decisión de la Cámara Nacional Electoral.

Contemporáneamente en la Capital Federal, en primera instancia, se impugnó la lista de electores a presidente y vice del Partido Conservador Popular, pero la justicia electoral en la Capital Federal solamente señaló los nombres que debían ser excluidos de las listas y reemplazados por otros, pero no se canceló la lista entera. En cambio, en Entre Ríos, se eliminó totalmente la lista y no se permitió computar —ya vamos a ver en qué forma violatoria de la ley— las boletas del Partido Tres Banderas correspondientes a electores de presidente y vice y de gobernador y vice de la provincia. Lo extraordinario del caso es que no sólo ocurrió esto sino que por disposición de la Cámara Nacional Electoral veinticuatro horas antes de la elección se enviaron telegramas a todos los presidentes de comicios para que al practicar el escrutinio provisorio en las mesas receptoras de votos se anularan las boletas del Partido Tres Banderas que incorporaran candidatos a electores para presidente y vice y para gobernador y vice, contrariando la ley electoral que dispone expresamente que las autoridades de mesa no pueden anular ningún voto, sino solamente observarlos. Tan sólo en el escrutinio definitivo presidido por la Junta Electoral Nacional o por la Junta Electoral Provincial se pueden pronunciar nulidades de votos.

Vale decir que en este caso, la Cámara Nacional Electoral, que va a ser la encargada de aplicar este estatuto, violando la propia ley electoral de la Nación, dispuso la comunicación telegráfica para que se anularan esos votos en las propias mesas receptoras. Con motivo de esto ocurrió una grave confusión, porque con la llegada del telegrama en las mesas el mismo día de la elección, algunas autoridades resolvieron excluir todas las boletas y no sólo la fracción correspondiente a presidente y vice y gobernador y vice, y de este modo se distorsionó totalmente el resultado electoral en la provincia de Entre Ríos.

Estos fueron los procedimientos de esta cámara nacional que nosotros sostenemos no forma parte del Poder Judicial de la Nación, ni es un tribunal de justicia, como se lo califica en el despacho de la mayoría.

b) El gobierno defacto dictó disposiciones violatorias, como aquí se ha dicho, de las constituciones provinciales. Incluso en Entre Ríos, que es un caso similar al que mi compañero de bancada señaló para Río Negro, la Constitución dispone la elección directa de gobernador. Ocurrió que por una disposición del gobierno defacto se abrió una instancia de apelación ante esta Cámara Nacional Electoral, incluso para las

decisiones de los tribunales provinciales electorales, que son tribunales de última y definitiva instancia, como en el caso de Entre Ríos, de acuerdo con la Constitución Nacional. Se revisaron resoluciones del tribunal electoral de la provincia, y esta Cámara Nacional Electoral, que se dice pertenece al Poder Judicial de la Nación, no hizo ninguna observación contra ese tremendo atropello a la institución de una provincia. Si formara parte del tribunal de justicia de la Nación, de ningún modo, por más disposición o decreto ley que existiese, hubiera admitido una aberración jurídica de esta naturaleza. Hubiera declarado la inconstitucionalidad de la norma y se hubiera declarado inhábil para conocer de los fallos de los tribunales electorales provinciales. No ocurrió así, por supuesto.

c) En Corrientes ocurrió un caso también extraordinario, porque a raíz de un acuerdo electoral entre el radicalismo intransigente y la Unión Popular, el juez electoral dictó una resolución por la cual se excluían del comicio las listas de electores de ambos partidos para presidente y vice y gobernador y vice, por estar en violación con las normas de la proscripción. Nuestro partido fue a elecciones, no obstante, y recién a las nueve de la mañana del mismo día del comicio (la elección comenzó a las ocho) se rehabilitó su lista, perjudicándose extraordinariamente sus posibilidades electorales, no obstante que obtuvo un volumen extraordinario de votos.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Ferreira. — Estas son todas las alternativas que ha protagonizado la llamada justicia electoral.

Yo podría citar otros antecedentes, como los ocurridos con respecto a nuestro nombre, pero en homenaje a la brevedad no los voy a citar, porque hay otros puntos de este dictamen que es necesario exhibir. Sólo diré que la reciente decisión de la Cámara Nacional Electoral, de no reconocer el nombre de MIR para nuestro partido, por sobre las cuestiones formales que el caso revela, la intención última es privarnos del vocablo «radical» para crear la impresión de que histórica, doctrinaria y políticamente, no guardamos relación alguna con el yrigoyenismo. Absurda tentativa de modificar la historia mediante un «decreto», arbitrariamente llamado sentencia, buscando negarnos la condición —que nos pertenece— de continuadores de la gran línea político-social trazada por el gran caudillo.

Sin perjuicio de lo dicho, que constituye nuestra impugnación básica contra la llamada «justicia electoral», interesa agregar otras consideraciones confirmatorias y también decisivas:

a) La Cámara Nacional Electoral cuesta muchos millones de pesos al país (más de 65 mi-

llones), no obstante lo cual merece ser calificada de ociosa, porque las causas propiamente dichas —no las de carácter político— en que ha debido pronunciarse desde el año 1962, año de su creación, no alcanzan a cincuenta. Es decir, que un promedio de veinticinco causas anuales propiamente dichas, no justifica de ninguna manera la creación de esta Cámara Nacional Electoral;

b) En lo que respecta a cuestiones electorales (no ya partidarias), la presencia de la Cámara Nacional Electoral supone la posibilidad de interferencias en el ámbito propio de las juntas electorales. El sistema vigente atribuye a esas juntas la condición de tribunal de alzada. No obstante, en el último proceso electoral la cámara pretendió atribuirse facultades de tercera y suprema instancia, como lo evidencia el episodio ocurrido en la provincia de Buenos Aires con relación a la interpretación de computar o no, a los fines de distribuir las bancas, el voto en blanco.

En ese episodio, la Cámara Electoral quiso modificar el criterio de la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires, creando de este modo la posibilidad de un serio conflicto que finalmente se superó debido a que la junta insistió en su conocida posición, e hizo prevalecer su tesis. La Cámara Nacional Electoral, quedó desautorizada y desairada;

c) En cuanto a las apelaciones interpuestas contra los fallos de los jueces federales en las provincias, obligan a traer a la Capital Federal —donde tiene su sede la Cámara Electoral— los expedientes que en recurso se elevan. Esta contingencia crea también una dificultad extraordinaria y, sobre todo, origina un peligro cierto cuando determinados conflictos o contenciones se suscitan al filo de una elección. Estos, en definitiva, para que sean resueltos, obligan a que los expedientes se remitan a la Capital Federal y luego se los reexpida al punto de origen para que tenga ejecutoriedad la resolución final. A veces, como en el caso de Entre Ríos y Corrientes, que he mencionado anteriormente, suelen llegar en la víspera o el mismo día del acto comicial, con las consecuencias dañosas que es de imaginar para los partidos;

d) Los jueces federales en la actualidad son jueces del Poder Judicial de la Nación, pero, además, son jueces electorales interinos. En consecuencia, están sometidos a una doble superintendencia: a la superintendencia de la respectiva cámara judicial como cuerpo integrante del Poder Judicial de la Nación, y a la superintendencia de la Cámara Nacional Electoral como cuerpo ligado al ministerio político del gobierno. Esta doble superintendencia en realidad encierra un grave peligro, toda vez que se pueden crear situaciones irregulares, lesivas del *status* de los jueces y perjudiciales

para el eficiente funcionamiento de la administración de justicia.

El segundo motivo de disenso con el dictamen de la mayoría se vincula también con la subsistencia de esta cámara nacional en relación con el sistema de restricción o de prohibición que se establece para los partidos políticos.

De allí que nuestra posición, que marca a fondo el dictamen de la mayoría, debe quedar precisamente caracterizada porque queremos declinar toda responsabilidad política por lo que pueda acontecer en el futuro, en virtud de la aplicación de las normas que seguramente va a sancionar por mayoría esta Honorable Cámara.

Sostengo, a pesar de lo que se expresó enfáticamente desde la bancada de la primera minoría, en el sentido de que se ha eliminado por completo toda posibilidad de proscripción política y electoral en el país, que los artículos 39, inciso b), 21, 22 y 63, inciso c), encierran en su seno la semilla que hará germinar en lo futuro las proscripciones políticas y electorales en el país.

De este conjunto de disposiciones, señor presidente, resulta que para decidir si un partido cumple o no las exigencias del estatuto, deben tenerse en cuenta no solamente los aspectos «formales», sino también los aspectos «reales» (artículo 21). Vale decir, que interesa la doctrina política expuesta en los documentos públicos del partido y, además, su actividad fáctica desarrollada «por la vía de sus organismos o autoridades estatutarias» (artículo 22, inciso 1º).

En otros términos, la suerte del partido está librada a lo siguiente: primero, a su programa escrito; segundo, a la «actividad» de las «autoridades» y de los «candidatos» no desautorizados por aquéllas (artículo 63, inciso c).

En esta parte, el despacho parece haberse inspirado en la doctrina de la «duplicidad programática» sustentada por nuestra Corte Suprema de Justicia, en un fallo muy conocido y al cual más adelante me he de referir.

La denegación o cancelación de la personería ocurre, de conformidad con el dictamen de la mayoría, no sólo cuando un partido político realiza determinados actos físicos, concretos, materiales, encaminados a la destrucción del estado democrático, sino también cuando alguna «autoridad» o «candidato», no desautorizado por ese partido político, «auspicia» actos violatorios de los principios democráticos (artículo 22, inciso 1º) o «elogia» los violatorios de principios republicanos cometidos por «régimen» presentes o pasados (artículo 22, inciso 2º, letra c).

Adviertan los señores diputados la latitud extraordinaria que tienen estas cláusulas y que pueden llevar de cualquier manera a una proscripción muy fácil de las agrupaciones políticas. No es necesario, entonces, que medie un peligro claro y actual para las instituciones vigentes, ni que se hayan ejecutado «actos» propiamente dichos.

Precisamente, cuando esta Cámara estudió el problema de la derogación de las leyes represivas, se habló aquí del caso de agrupaciones que pueden tener signos antidemocráticos y totalitarios, pero con arreglo a una conocida jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y en la medida en que ese partido político no represente un peligro claro y presente, no tendría que ser objeto de represión individual alguna.

En cambio, por este estatuto de los partidos políticos, se consagra la teoría contraria. Es decir, la tesis de la peligrosidad aunque sea inactual, es decir, que no sea presente ni clara, para proscribir la actividad de un partido político, toda vez que considera violatorio del régimen democrático el «elogio» a actos violatorios de los principios republicanos producidos por regímenes presentes o pasados.

Es necesario, señor presidente, que se advierta la gravedad y peligro de una cláusula de esta naturaleza.

Basta la mera pronunciación de frases o la enunciación de ideas que a criterio de los juzgadores comporten «auspicio», «adhesión» o «elogio», para que caigan fulminados por estos artículos que autorizan las proscripciones de las agrupaciones políticas. La conducta prohibida que puede originar la denegación o cancelación de la personería, es la «violación de los principios democráticos» (artículo 22, inciso 1º), la violación de los «principios republicanos» (artículo 22, inciso 2º, c). Así lo expresa, con esta extraordinaria latitud conceptual en esta materia tan delicada, el dictamen que aconseja la mayoría de la comisión.

Sr. Grau. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — Con mucho gusto lo haría si se me descontase el tiempo. Lamentablemente, debo concluir ya mi exposición, porque se vence el término reglamentario.

La principal característica del sistema proyectado es la absoluta imprecisión de la terminología empleada, y esto es lo más peligroso, como veremos luego, porque es la renuncia a una facultad legislativa indelegable del Congreso de la Nación: ser preciso en las normas de las leyes que dicta.

Con la imprecisión de la terminología empleada en el dictamen, se instituye un medio tendiente a posibilitar la interpretación discrecional de los miembros de la llamada Cámara Nacional Electoral. Por ello comencé mi exposición señalando y caracterizando bien la condición de esta cámara nacional para luego relacionarla con algunas normas medulares del despacho de la mayoría y sostener que no se eliminan en él las proscripciones en la vida política del país.

Nadie está en condiciones, señores diputados, de establecer por anticipado qué ha de entenderse por violación de los «principios demo-

cráticos» o «republicanos». Trátase, en efecto, de conceptos polémicos, insusceptibles de definición técnica y dotados de contenido político, no jurídico. Hace pocos momentos escuché de labios del diputado socialista señor Solari el concepto de lo que es democracia para el socialismo. Ese concepto puede ser distinto, sin dejar de ser democrático, para otras agrupaciones políticas. Y en este estatuto se sanciona con la eliminación de la vida política activa del país al partido que viole los principios democráticos, cuando todos los que tenemos filiación democrática no estamos absolutamente contestes ni uniformemente de acuerdo en lo que debe entenderse por principios democráticos y republicanos.

La latitud extraordinaria de esta cláusula es la que encierra el peligro que yo estoy señalando en esta Honorable Cámara. Para nosotros un régimen democrático es perfectamente compatible con la ley de asociaciones profesionales actualmente en vigencia, y ayer un diputado de esta Cámara, el doctor González Bergez, de la Federación de Partidos Centro, calificó a la ley de asociaciones profesionales como una ley totalitaria. También ha sido calificada así por el actual vicepresidente de la República. En consecuencia, nuestro partido, que en el gobierno auspició esta ley y que la defendemos ahora, podría ser, para el concepto de estos tres señores jueces de la Cámara Nacional Electoral, proscrito en cualquier momento de la vida política argentina porque estamos «adhiriendo», «auspiciando» o «elogiando» un instrumento legal que, de acuerdo a una determinada y particular concepción del régimen democrático, tipifica una expresión de totalitarismo. ¡Y esto se transfiere a la interpretación de la Cámara Nacional Electoral!

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Ferreira: la Presidencia le señala que hace cinco minutos expiró el término reglamentario para su exposición. Por ello lo invita amablemente a cerrar su pensamiento.

Sr. Ferreira. — Voy a tratar de terminar mi exposición en otros cinco minutos.

A raíz del argumento que estoy desarrollando, sé que se me puede objetar que en el artículo 22 se incluye una enumeración de supuestos en los que mediarían violación de los principios republicanos. Pero adviertan los señores diputados que se trata de una enumeración no taxativa sino ejemplificativa. Ello se infiere del adverbio «especialmente» que se utiliza en el despacho antes de la enumeración de los «hechos y actos» que se configuran como violatorios de los principios republicanos o democráticos. Por ello los supuestos que se indican no son excluyentes de otros que pueden ser incorporados por vía de una interpretación traslativa de la Cámara Nacional Electoral, la que quedaría facultada para asimilar infinitos supuestos de violación.

Ya ven los señores diputados el peligro extraordinario que existirá para la suerte y para la vida de los partidos políticos, de aprobarse este dictamen que auspicia la mayoría.

La hipótesis que contiene el inciso a) del artículo 22, y que considera como violatorio del régimen democrático «la concentración del poder político, social o económico», confieso que para mí es totalmente ininteligible. Sencillamente, no se sabe qué se quiere auspiciar con esta norma, y esto tendrá que ser interpretado discrecionalmente por la Cámara Nacional Electoral.

La hipótesis contenida en el inciso c) del artículo 22 es una amenaza directa y evidente que tiene dedicatoria precisa para fuerzas políticas actuantes; esto es, el justicialismo o el peronismo. Creo que éste es el aspecto más grave del dictamen de la mayoría, y es en el que reside la verdadera amenaza proscriptiva.

El precepto incurre en un error conceptual irrisorio. Como ejemplo de violación de los «principios democráticos» enuncia la violación de cualquier principio «republicano», o bien la adhesión o elogio a regímenes que hubieran violado principios republicanos, como si la democracia desapareciera porque no se adopta el régimen republicano en un determinado sistema político; como si la República fuese la única forma política posible de la democracia. Quisiera que los señores diputados que auspician este dictamen y esta cláusula nos dijeran qué opinaría Winston Churchill si consideráramos que deja de ser democrático porque su país no es republicano.

Sr. García. — Son otras condiciones...

Sr. Ferreira. — Además, no se entiende bien qué quiere decir «regímenes». Si quiere decir «gobiernos», cabe preguntarse: ¿cómo puede materializarse el supuesto de proscripción fundada en adhesión o elogio al «régimen presente», esto es, al gobierno actual? La hipótesis admitida por los autores del despacho parecería ser la siguiente: hay un acto del gobierno actual, ley o decreto que, por un lado, debe ser cumplido como expresión imperativa y formal de la voluntad del Estado, pero que al mismo tiempo si la Cámara Electoral lo considera antirrepublicano, puede someter a proscripción al partido que lo elogie. Esto parece un récord mundial de la antijuridicidad. Los ejemplos de los incisos e) y h) del artículo 22 son absurdos. Se trata de actos estatales, leyes, decretos, sentencias, que, en todo caso podrán ser cometidos por los poderes públicos mas no por los partidos políticos. Sin embargo, se habla de leyes, de decretos y de sentencias que pudieran violar el régimen democrático republicano, y por eso se van a proscribir partidos políticos cuando en realidad quienes normalmente pueden dictar las leyes, decretos y sentencias no son los partidos políticos, sino los órganos jurisdiccionales del Estado.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — No me haga ser injusto; no he concedido interrupciones a otros diputados por falta de tiempo. Si no, lo haría con mucho gusto.

Pero el precepto que va en serio es el contenido en el inciso de la letra c) del art. 22. Si se parte de la base de que el «régimen» peronista implicó la violación de principios republicanos, lo que ha sido proclamado reiteradamente por los hombres de este gobierno y que es presumible sea aceptado por la interpretación de la Cámara Nacional Electoral, bastará que —cualquiera sea el programa escrito del peronismo— una «autoridad» o un «candidato» (no desautorizado) de esa agrupación política haga el «elogio» genérico e indiscriminado de la obra del «régimen» del presidente Perón, para que la proscripción sobrevenga, incluso un día antes de las elecciones, porque es claro que el que elogiase toda la obra de Perón sin salvedades, elogia las partes supuestamente antirrepublicanas y antidemocráticas de esa obra.

Es cierto que en el caso del Partido Obrero —y aquí voy a examinar brevemente la doctrina de la Corte Suprema en cuanto a la duplicidad programática—, la Corte Suprema consagró el principio de la duplicidad programática. Según su tesis, cuando un partido político presenta un programa formalmente democrático pero en los hechos desarrolla una concreta actividad dirigida a la destrucción de la democracia, debe entenderse que el programa «real y verdadero» prevalece sobre el «programa ficticio» y autoriza la denegación o cancelación de la personería. Esta es la doctrina de la Corte.

Lo que precisa ser subrayado es que tal doctrina fue expuesta con referencia exclusivamente a los llamados partidos subversivos que, según el alto tribunal, son aquellos que emplean como medios «la rebelión, el golpe de Estado, la huelga revolucionaria y otros medios igualmente ilícitos», o aspiran a tomar el poder «para provocar la disolución revolucionaria de las instituciones» (*Fallos de la Corte*, t. 253, p. 133). Sólo respecto de tales partidos es válida la tesis de la duplicidad programática. El despacho de la comisión, por tanto, se aparta ilegítimamente del criterio de la Corte Suprema de Justicia al extender esta tesis de la duplicidad programática a situaciones como la del artículo 22, inciso 2, letra C. Insisto. Sería suficiente entonces que un orador no desautorizado hiciera públicamente el elogio genérico y sin salvedades del «régimen» peronista para que, de acuerdo con el dictamen que examinamos, entrara en vigor una tesis que la Corte elaboró con el exclusivo fin de excluir de la vida política argentina a los partidos subversivos.

En concreto, y para terminar, el punto jurídico de crítica, en resumen, es que, habida cuenta de su total y deliberada vaguedad, el artículo 21, inciso 1º e inciso 2º, letra c), del artículo

22, significa que el Congreso declina sus facultades de legislar en esta materia y transfiere un poder discrecional de restricción o de prohibición a los tres miembros que forman la mayoría de la Cámara Nacional Electoral. Los conceptos «violación de principios democráticos» y «violación de los principios republicanos» son inasibles e indefinibles; carecen de acepción jurídica. Representan, en consecuencia, una puerta abierta para que por ella penetre destructivamente —si se le ocurre— la voluntad omnímoda del organismo seudojudicial competente que va a estar llamado en definitiva y en última instancia a decidir sobre esta materia fundamental. Este Congreso, con la sanción que se le aconseja dar, traspasa la potestad restrictiva sin establecer una norma clara y precisa, propiamente jurídica, que pueda servir de standard a quienes dictarán la decisión. De este modo se viola el artículo 14 de la Constitución, de cuyo texto surge que sólo el Poder Legislativo, mediante disposiciones certeras e inteligibles, puede limitar los derechos humanos, entre los que figura el de asociación política.

Se viola además el debido proceso electoral sustantivo. «Una persona es privada de su libertad sin el debido proceso legal cuando resulta adversamente afectada por el ejercicio de una discreción legislativa irrestricta puesta en manos de los ejecutores de la ley», afirma con lúcida conciencia jurídica el tratadista Tresolini en su conocida obra *American Constitutional Law*, página 122.

Digo también que esta declinación de la potestad legislativa del Congreso al omitir precisar normas inteligibles y concretas para estos casos esenciales de la vida o de la muerte de los partidos políticos, está violando el principio republicano de la división de los poderes porque en definitiva se le deja solamente a una institución seudo judicial la interpretación en última instancia de estas cuestiones fundamentales para la vida política del país.

Con arreglo a una doctrina uniforme, que tiene su origen en el derecho de los Estados Unidos y que ha sido consagrada entre nosotros, hay invalida delegación de facultades legislativas cuando se sanciona una «ley incompleta» como es ésta que vamos a sancionar, que en razón de la vaguedad y la imprecisión de sus términos equivale a conferir a los órganos de ejecución la facultad discrecional de decidir libremente cuándo existe y cuándo no existe violación legal. Tal es lo que acontece con el despacho que auspicia la mayoría de la comisión.

Los artículos 22 y 63, inciso c), contienen lo que técnicamente se denomina una «delegación indefinida», o sea que significan tanto como haber transferido a un cuerpo dependiente del Ministerio del Interior la atribución de crear la restricción o la prohibición en cada uno de los casos que se susciten. Se aplica, pues, la tesis

que el ex procurador general de la Nación doctor Sebastián Soler desarrolló en el caso «Raúl Oscar Mouviel». «Fallos», tomo 237, página 636): «Es necesaria la existencia de leyes dictadas por el Congreso lo suficientemente definidas y precisas como para que (la actuación de sus ejecutores) no se traduzca —empleando la expresión del justice Cardozo— en un vagar a voluntad entre todas las materias posibles.»

Señor presidente: en una reunión con periodistas, el 16 de octubre pasado, el actual subsecretario de Justicia de la Nación, doctor Billinghurst, frente a una pregunta concreta que se le formuló, expresándole «si era verdad que el Poder Ejecutivo quería contar con una justicia amiga», respondió concretamente: «¿Y si así fuera? Nadie puede negar que la justicia cumple, en cierta medida, una función de alta política de Estado. Es una opinión personal —dijo el subsecretario de Justicia de la Nación— que he sostenido en mi cátedra de derecho constitucional en la Universidad del Noreste.»

Esas expresiones, que han causado estupor en la conciencia jurídica del país, revelan la verdadera motivación del proyecto de reforma o de reestructuración de la Corte del mantenimiento por un año de 40 jueces sin acuerdo y de la supervivencia de la llamada «justicia electoral nacional». Señor presidente: se trata de tener una justicia amiga...

Con esto nosotros no podemos complicarnos. Aquí nadie se puede engañar ni confundir; nadie puede dejar librada a la suerte de las armas —como se ha dicho— la posible aplicación no honesta de este estatuto. Los legisladores de la Nación no podemos dejar librada a la eventualidad del entorchocar de las armas la aplicación correcta de las leyes, que tenemos que dictar clara y precisamente para la vida del país, en este caso por vía del estatuto de los partidos políticos.

Niego en consecuencia, para terminar, que este estatuto elimine las proscripciones. Con él sólo se sutilizan los medios para consumarlas. Se lo hace mediante un traspaso de la potestad del Congreso a una cámara nacional electoral, ligada al ministerio político del Poder Ejecutivo, que usará la delegación indefinida que se le concede —si se aprueba este despacho—, traduciendo ello en un vagar a voluntad entre todas las formas posibles de proscripciones e interdicciones políticas.

Dejamos así fundamentado nuestro disenso, en lo modular, con el dictamen que auspicia la mayoría. Queremos marcar con esto una línea política inconfundible frente a este acto que va a consumir la Cámara de Diputados de la Nación. Lo que acontecerá con la aplicación de las disposiciones de este estatuto no se nos podrá imputar, y desde ya declinamos toda responsabilidad por las consecuencias tremendas que tendrá para la vida republicana y democrática del país. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Señor presidente: nuestro bloque ha expuesto ya por medio de tres de sus miembros, con claridad y con alguna extensión —la permitida por el debate y el reglamento—, la fundamentación del hecho de que esta bancada sea firmante en general del despacho mayoritario. Como presidente del bloque, me toca simplemente agregar a las exposiciones anteriores algunas reflexiones aclaratorias del sentido de nuestro voto y reafirmar nuestra posición teórica respecto a este problema, relacionándola con el realismo político que nos ha llevado a adoptar en esta emergencia tal actitud.

La posición teórica del justicialismo frente al problema constitucional de la sanción de un Estatuto de los Partidos Políticos fue expuesta ya en el año 1949, en ocasión de un debate extenso que culminó con la sanción de la ley 13.645, Estatuto de los Partidos Políticos de aquel entonces. Esa posición teórica no ha variado un ápice. Y pretendo explicar esto, porque en aparente contradicción con aquella posición teórica nosotros somos firmantes de un despacho que en alguna medida contradice aquella concepción doctrinaria, que fue la invariablemente sostenida por el justicialismo.

En oportunidad de aquel debate participaron, entre otros hombres de la Unión Cívica Radical, que era un partido unitario y también minoritario en ese momento, los diputados Ricardo Balbín, Oscar López Serrot, Alfredo Vítolo, José Pérez Martín y Silvano Santander; participaron también el representante de las fuerzas de centro, diputado Reynaldo Pastor, y diversos diputados de la bancada mayoritaria, entre los que se destacaron Vicente Bagnasco y Raúl Bustos Fierro.

Desde 1946 las minorías venían solicitando la sanción de un Estatuto de los Partidos Políticos, y en ocasión de ese debate quedaron perfectamente planteadas las posiciones de los dos grupos en que en ese entonces se dividía la Cámara. Paradójicamente la posición minoritaria representada por el radicalismo unido entonces, era favorable a la sanción de un estatuto completo de los partidos políticos, que diera por sí nacimiento u origen a los partidos, que reglara su vida, su funcionamiento, su existencia y su extinción.

La tesis justicialista es la misma que seguimos sosteniendo ahora, es decir, que un Estatuto de los Partidos Políticos ubicado en la pura teoría sólo puede ser un pequeño código reglamentario del ejercicio de determinadas funciones electorales por los partidos políticos, pero que el nacimiento, la extinción, la vigencia y la caducidad de las fuerzas políticas —que son los conglomerados sociales representativos de la opinión pública— son anteriores a la ley y no pueden tener su origen en ella.

Esta es la esencia de la teoría republicana y esto es, evidentemente, irrefutable. La única causa del nacimiento y de la extinción o muerte de los partidos políticos es la soberanía popular, ejercitada por medio del sufragio.

Parodiando una frase con que Hipólito Yrigoyen contestara alguna vez a los presidentes Pellegrini y Figueroa Alcorta, diría —aunque quizá no fuera totalmente adecuado al momento político actual—, que sólo la verdad del sufragio puede restablecer la paz de la Nación. Pero, además de esto, es de la más pura esencia del sistema republicano que sólo la soberanía popular, expresada por el pueblo entero en el momento de la emisión del voto, mandante único de los actos del gobierno, puede dar nacimiento, vigencia o muerte, según las preferencias populares y las circunstancias históricas de que se trate, a las fuerzas políticas.

De cualquier manera, en aquel debate quedaron perfectamente delimitadas ambas posiciones, y en definitiva se sancionó un estatuto que en nueve o diez artículos, brevemente, reglamentaba determinados aspectos vinculados con el ejercicio de actividades electorales y con el control del funcionamiento de los partidos políticos.

Esa tesis, expuesta someramente dado lo avanzado del debate y el escaso tiempo de que dispongo para usar de la palabra, sigue constituyendo la posición en que está ubicado el justicialismo. Pero, en cuanto al estatuto que nos toca ahora analizar, hay urgencia nacional en elaborarlo y sancionarlo cuanto antes, dado que es éste un momento muy especial de la vida argentina. Por ello, sin modificar en absoluto nuestra posición teórica, hemos optado por apoyar en general el dictamen mayoritario, que auspicia en realidad un estatuto de tipo de los códigos de fondo, al que nos oponemos teóricamente. Pero creemos que en este momento constituye un instrumento apto para la integración del cuerpo electoral de la Nación y para algo mucho más importante aún, que es el logro —tan difícil a veces, según pareciera— de la concordia argentina para emprender la marcha hacia adelante.

Ha habido otros estatutos vigentes antes del que consagró la ley 13.645. El gobierno defacto del general Uriburu, por medio de un decreto ley, estableció un Estatuto de los Partidos Políticos que anticipaba la tesis que luego sostuvo en 1949 la bancada minoritaria en ocasión del debate a que me he referido, y que, paradójicamente, está vertebrado en la línea de la más pura esencia totalitaria, sustrayendo a la soberanía popular el manejo del nacimiento, de la vigencia y de la extinción de los partidos políticos. Esa tesis ha sido defendida por varios sectores y por muchos partidos que se dicen o se proclaman permanentemente como campeones de la democracia.

Ese estatuto, por medio del cual se pudo hacer el juego del veto a candidatos de la Unión Cívica Radical, y a raíz del cual la Unión Cí-

vica Radical proclamó su abstención, fue el primero de los estatutos sobre esta materia que tuvo vigencia en el país. Pero ese primer septembrinato argentino fue claramente superado por el que yo llamaría, con absoluta propiedad, el segundo septembrinato, porque a través de estatutos posteriores se superó con creces el veto de personas, que fue lo máximo que se atrevió a hacer aquella revolución en contra de la voluntad popular, y en el segundo período se llegó, en cambio, a una proscripción total con diferentes nombres. Se llegó a la proscripción de toda una fuerza política. Ese problema está hoy vigente y es el que todos los sectores de la Cámara están tratando de solucionar. Desde nuestro punto de vista no se ha encontrado otro medio —ubicados con plena lucidez política— que tratar de elaborar un acuerdo político que, desde el punto de vista legislativo, merece quizás una cantidad de críticas acertadas, con algunos de cuyos artículos estamos en disidencia y pedimos su supresión, su suplantación o su modificación. Pero, en esencia, como aparato jurídico, puede ser el instrumento indispensable para la armonía argentina.

Como lo dijo el señor diputado Serú García, ayer o anteayer, la bancada justicialista entiende que es la regla de juego para que este país comience a marchar hacia adelante, para que se integre el cuerpo electoral de la Nación y comencemos a trabajar, de una vez, en serio. Este es el sentido profundo y la razón de nuestra firma en el despacho mayoritario.

Debo significar que la inquietud por esta sanción, en este momento de la vida argentina, provino del Poder Ejecutivo, pero debo destacar también, lamentándolo, que el proyecto originario del Poder Ejecutivo, en los tres o cuatro artículos esenciales, alrededor de los cuales se mueve toda la trama de un estatuto, era netamente proscriptivo. El artículo 22 actual, que en el proyecto originario era el 19, tenía una clara intención proscriptiva. Los miembros del bloque hemos tenido oportunidad de analizarlo y de criticarlo mano a mano con los asesores del señor ministro del Interior, específicamente con el doctor Linares Quintana, que no sé si tiene la paternidad absoluta del proyecto, pero que colaboró fundamentalmente en su redacción. Hemos tenido ocasión de comparar con los asesores del Ministerio del Interior esta encrucijada actual, en que el justicialismo es un poco la víctima protagonista, con alguna encrucijada parecida en que se encontró el partido radical, destacándoles que ese artículo 19 era el renegar, por un lado, de las bases democráticas que ha sustentado el radicalismo con fuerza histórica, y el olvidar muy rápida y fácilmente cómo los derrotados, fuera de los hechos de armas, no deben ser perseguidos permanentemente, especialmente si son un sector mayoritario y de vocación nacional, como es el nuestro y como lo fue el radical.

Ese proyecto del Poder Ejecutivo ha sido mejorado, según nuestro punto de vista, en este trabajo realizado en común en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lográndose este instrumento perfectible y, por lo tanto, criticable, pero razonablemente apto para reconstruir la vida política argentina.

He escuchado recién, en nombre de un despacho minoritario, totalmente diverso al que nosotros firmamos, el alegato del señor diputado Ferreira. Quiero refutar enérgicamente lo que él ha dejado traslucir y lo que podría considerarse como rastros que pudieran quedar en el Diario de Sesiones, para que algún mal juez, prevaricador y enemigo de la concordia argentina, pudiera hacer valer como elemento para establecer proscripciones.

En la discusión en particular quedara aclarado el sentido de algunos de los artículos, varios de los cuales pediremos que se supriman, pero que aun sancionados con nuestro voto en contra, de ninguna manera permitan afirmar que ha sido intención del cuerpo entero, de los tres redactores del anteproyecto y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que este estatuto tuviera el espíritu proscriptivo que el señor diputado Ferreira le ha dado.

Admiro y respeto el celo del señor diputado Ferreira para que de este país desaparezan las proscripciones, pero encuentro desacertado que se afirme —cuando todos los sectores que hemos firmado, aun con disidencias de todo tipo, este despacho y estamos acordes en que este estatuto es el medio idóneo para terminar con las proscripciones— que éste es un estatuto proscriptivo. Huelga decir que si para nosotros tuviera el menor asomo proscriptivo, si se hubiera visto esa intención, nuestra firma no estaría al pie del dictamen.

No tengo ninguna duda de que a través del análisis hecho alrededor de si el artículo 22 debe subsistir, debe ser reformado o suprimido, quedará aclarada esta rotunda posición de nuestro bloque y del cuerpo entero.

El proyecto del Poder Ejecutivo ha sido mejorado; nuestras disidencias parciales serán explicadas oportunamente por los miembros de este bloque en el debate en particular. Hay tres artículos esenciales en los que hacemos hincapié para que desaparezcan o sean reformados. El primero de ellos es el artículo 22, porque como ya se dijo, es prácticamente una desagradable y dolorosa lección para todos los partidos políticos argentinos. Aparte de poco elegante, lo creemos una desagradable confesión inconducente y, por otra parte, incompleto y jurídicamente impreciso.

De cualquier manera, si el artículo 22 subsistiera, quiero recordar, por lo que ha dicho el señor diputado Ferreira, que el inciso h) es una demostración total de que las proscripciones desaparecen con este estatuto, puesto que ese inciso las condena y puede llevar a la elimina-

ción de la vida política argentina de aquellos partidos que auspicien las proscripciones electorales.

De tal manera es tan clara la intención del estatuto de ser antiproscriptivo, que una de sus previsiones será sancionar con la caducidad a aquellos partidos que auspicien en sus programas las proscripciones políticas.

También nos oponemos al artículo 3º —y no voy a repetir aquí los argumentos porque han sido, extensa y brillantemente, expuestos por el señor diputado Ferreira— y a dejar en manos de la justicia electoral el manejo de este difícil momento argentino, que tendrá que ser recompuesto por los hombres políticos, como lo estamos tratando de hacer aquí, con vocación de grandeza.

La política —así lo entiende el justicialismo y especialmente esta bancada— es la más completa y noble de las vocaciones humanas. No dudo que ese es el entendimiento a que han llegado cada uno de los señores diputados. No tendríamos ningún asomo de duda si el manejo de este estatuto estuviera en manos de hombres políticos que han sufrido la derrota o experimentaron la satisfacción del triunfo; pero una justicia electoral, innecesaria por otra parte, desde el punto de vista económico, en la inmensa mayoría de las provincias argentinas, resulta peligrosa y sospechosa, teniendo como tenemos los jueces de la Constitución, con las secretarías electorales correspondientes, y que nos merecen plena fe, aunque el grueso de ellos no tienen ningún parentesco político ni ideológico con nuestra bancada.

Estamos, entonces, a punto de sancionar un estatuto de los partidos políticos que, repito, para nosotros es la simple y necesaria regla de juego, el acuerdo nacional político de todos los sectores, transición política después de la cual, integrados el cuerpo electoral de la Nación y esta Cámara con limpieza política, tanto en el acto comicial como en la antesala preelectoral, espero que demos una ley orgánica de los partidos políticos realmente ajustada a la esencia republicana y a las verdaderas necesidades de los partidos.

El momento argentino exige alguna otra reflexión última que quiero hacer. Con este estatuto logramos recomponer el cuerpo electoral de la Nación, entendernos sobre la base de un acuerdo de grandeza política para lograr que el país se encauce en lo político. Pero no basta sólo eso, evidentemente, para que el país se encauce. En este proceso nos corresponde responsabilidad a todos los que integramos los poderes del Estado —el Poder Legislativo es cogobierno—, pero interesa la reflexión de fondo, sobre todo al partido que detenta ahora el manejo del Poder Ejecutivo del gobierno federal, para que, con la misma vocación para la comprensión o la limpieza puesta en el trabajo de las comisiones y aquí en la sanción de este estatuto, con la

misma vocación que pueda mostrarse para el tratamiento del problema político, con la misma urgencia y el mismo realismo se traten los problemas sociales, de tremenda, necesaria y urgente resolución. Con un estatuto de los partidos políticos que facilite el juego limpio no hacemos sino establecer el armazón, el aparato, la estructura para marchar hacia adelante. Pero si los graves problemas que hacen zozobrar al grueso de la familia argentina no son enfocados con igual realismo y urgencia, por más estatuto de los partidos políticos que sancionemos habremos zozobrado todos.

Estamos viviendo en este momento —tengo que decirlo— un verdadero momento de prueba. Ayer mismo, el anunciado retorno de Perón al país ha conmovido a la opinión pública, como nos conmovió a todos, y no podía ser de otra manera. Frente a ello, yo quiero hacer la reflexión a los que han sido y siguen siendo adversarios políticos nuestros para que, ante ese problema que está innegablemente metido en la realidad nacional, demuestren irrevocablemente su voluntad por la concordia, aunque no cedan una sola de sus banderas. Ese momento de prueba lo he visto ayer presentarse ante el anuncio de la inminencia de la presencia de Perón, que es ingrediente bueno para unos, malo para otros, pero ingrediente imprescindible de la realidad argentina, porque él es parte de nuestro movimiento y éste es parte importante de nuestra realidad.

Nuestro movimiento está tendiendo su mano desde hace más de un año en esta Cámara, y la está tendiendo también la clase trabajadora. Cuando ha salido un plan de lucha lo ha sido en nombre de reivindicaciones populares justas, frente a circunstancias de las que no tiene culpa un gobierno, sino que es responsabilidad de todos los gobiernos y fruto de una aguda situación nacional e internacional. Pedimos que todos los sectores se vuelquen a la consideración de ese problema, el más importante, con la misma grandeza con que nosotros tendemos la mano al régimen al que, por otra parte, también sabemos criticar con valentía.

He visto angustia y zozobra en algunos de nuestros adversarios ante el anuncio del retorno de Perón —angustia y zozobra que comprendo—, pero en otros he visto encono y rencor, y de aquí es fácil pasar al odio, que en el país no ha hecho sino destruirnos y dividirnos.

Que quede en claro, para terminar, que el peronismo, por medio de este estatuto y a través de mis palabras, tiende la mano al grueso de nuestros adversarios en la República, porque entendemos que así podremos marchar superando mezquindades y parcialidades. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Ferreira. — Pido la palabra para una breve aclaración personal, por haber sido aludido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una breve aclaración, tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — El señor diputado Luco ha aludido reiteradamente a mis palabras. Yo respeto las desprevénidas afirmaciones del señor diputado Luco, y solamente quiero dejar constancia de que los hechos dirán sobre la realidad de nuestras afirmaciones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Señor presidente: ya diversos compañeros de bloque han explicado con claridad cuál es la posición de nuestro sector con respecto al dictamen que se está debatiendo. Mis palabras simplemente están dirigidas a afirmar algunos conceptos vinculados al sentido de nuestro voto relacionado con el estatuto de los partidos políticos.

En primer lugar, señor presidente, quiero decir que nuestro voto significa que aceptamos a los partidos políticos como la energía motriz de todo el mecanismo político del país. Es decir que rechazamos la concepción de los teóricos de la democracia clásica, que veían en ellos simplemente a facciones o grupos de división que tendían a romper la necesaria homogeneidad de la Nación. Por el contrario, nosotros entendemos que —en nuestro país, sobre todo— los partidos políticos deben cumplir una misión fundamental en el sentido de que deben ser la palanca, las herramientas que produzcan la auténtica integración de la Argentina y de los argentinos.

Aceptamos, pues, de pleno, la idea de que los partidos políticos responden a una necesidad de hecho de la democracia, puesto que la opinión necesita de sus programas para tomar conciencia de los problemas nacionales y, en definitiva, quizá, para tomar conciencia de sí misma. Afirmamos la necesidad democrática de su presencia protagónica en el escenario de la vida nacional, enriqueciendo una idea general del derecho que ampare a todos, invocando una visión política de conjunto y por encima de las organizaciones de actividades, intereses o profesiones que pretenden arrastrar, detrás de las ventajas sectoriales que buscan, de las decisiones que quieren imponer o de los privilegios que pretenden defender, al conjunto de las decisiones políticas e, incluso, a la legislación misma.

Ayer escuchamos al señor diputado Vedia referirse a las etapas intermedias de la organización democrática de un país; y al señor diputado Muniagurria, vincular el proceso de la organización democrática a los grupos de presión. Nosotros creemos que en el debate se ha deslizado un equívoco, por cuanto la existencia de esas etapas intermedias, de la que se alegraba el señor diputado Vedia, puede alegrar a los hombres de la democracia en la medida en que ellas se circunscriban a una acción que realicen de acuerdo con la organización general de la

democracia, pero de ninguna manera cuando se salen del campo limitado de su actividad, en un desbordamiento que atente contra la vida nacional. Esto no conduce a alimentar una energía del Estado, a alimentar esa idea general de derecho, sino que, por el contrario, tiende al desorden y a la indisciplina. Estos grupos se vinculan de esta manera al régimen de gobierno, como poderes paraestatales —diría yo poderes parasitarios—, que lesionan la auténtica vida democrática de un país.

Y he escuchado en la tarde de hoy la exposición del señor diputado Oreja que, pienso, tendríamos que analizarla en profundidad, leyendo con meditación sus palabras, porque han de tener alguna finalidad. El diputado Oreja señaló la inconveniencia de lo que, dice, son nada más que reglamentarismos que tienden a aprisionar la vida de los partidos políticos, y, al mismo tiempo, dijo que ha llegado la hora de que los grupos de presión o factores de poder tengan una jerarquía de tipo institucional en la Argentina.

Yo me explico perfectamente la posición conceptual del señor diputado Oreja porque, personalmente, pienso que el MID, en estos momentos, se manifiesta en la vida de la Nación como grupo de presión más que como partido político.

Pero quiero dejar perfectamente sentado que nos negamos a reconocer a la democracia en la pretensión de alimentar sólo una ideología de clase o un sistema de defensa de intereses particulares que promueva la creación de una política paraestatal, que nada más sirva para defender intereses o privilegios sectoriales, que tienden a defenderse siempre y a no ceder nunca.

Significa también nuestro voto que nos hacemos cargo de una de las críticas más comunes que se producen contra los partidos políticos, en el sentido de que muchas veces su organización está reñida o no consulta adecuadamente las reglas de una ortodoxia democrática, o que su estructura interior suele ser autocrática y oligárquica.

Hemos escuchado complacidos esta mañana al señor diputado Casas —conceptos reiterados expresamente por el señor diputado Luco— cuando exponía la vocación del Partido Justicialista y, con ello, la de todos los sectores que pueden integrarlo, de conformar su actividad política dentro de los cánones de una auténtica democracia interna de los partidos.

Consideramos que esa actitud sí es un tendido de mano hacia los otros sectores políticos. Si es sincera y si tiene una auténtica vocación para la democracia, constituye una prenda de pacificación para los argentinos, porque pensamos que es necesario, que es absolutamente imprescindible —aunque tengamos que resistir la crítica de quienes pretenden que el mundo de los partidos políticos quede en el campo de un liberalismo que no quieren para otras cosas—

que se constituyan en comunidades de hombres libres y no en bloques de conquistadores autoritarios, de acuerdo a leyes que expresamente regulen su actividad.

Pretendemos con este estatuto realizar una mínima acción de protección para los afiliados de todos los partidos políticos, que pueda salvaguardar los derechos inalienables de la persona humana, como mejor forma de luchar contra toda especie de dictadura espiritual. Afirmamos que nuestro pueblo, que tiene una vocación para la libertad y la democracia, no hubiera caído en etapas negras de nuestra historia si hubiera tenido, auténticamente, la oportunidad de definirse y manifestarse democráticamente en el propio seno del partido gobernante de turno. Por eso, son necesarias estas normas que aseguren la vida democrática interna de los partidos políticos.

Es decir que afirmamos una necesidad moral de la política pero, al mismo tiempo que afirmamos esa necesidad de una ética política, alertamos también contra los compañeros de ruta de todos los extremismos, que sólo creen advertir en los partidos políticos contradicciones, ambiciones o mezquindades. Estos son los conocidos apolíticos de todos los tiempos argentinos. Estos son los hombres que, frente a las primeras dificultades de la brava lucha política, se separan de la militancia y de la acción y se recubren de una aureola de moralidad para afirmar que la política ensucia o que la política enloda los más altos ideales del hombre. Es por eso también, porque no coincidimos con esa gente, porque decimos con profunda convicción que la militancia política constituye con seguridad una valedera presunción de autenticidad democrática y de conducta moral, que nos oponemos a que puedan los partidos políticos llevar candidatos extrapartidarios, por más relevantes que sean sus condiciones. Porque queremos también, de paso, evitar los hombres providenciales que puedan caer como paracaidistas en el seno de un partido y luego en el de la Nación, con el ánimo de pretender salvar a todo el país, y postrarlo en definitiva.

Quiero recordar aquí una frase de Mounier. Dice así: «Demasiados idealistas, demasiados pacifistas, demasiadas almas hermosas y demasiados nobles corazones han hecho de lo espiritual un lugar de refugio para los diversos reumatismos que confiere la existencia. Al primer dolor se sumergen en lo ideal y, en compañía de los grandes espíritus de todos los siglos y de todas las religiones, previamente vaciados de su carne y de su llama, reducidos al estado de fantasmas morales, se construyen una triple y santa coraza contra su misión de hombres.»

Lo dicho precedentemente no significa, por supuesto, que nos enrolemos en la concepción positivista de la política, cuya característica es la de marginar todo lo que se llame principios

trascendentales, vale decir, metafísicos, religiosos o morales de la política, ni mucho menos que se nos pueda confundir con el maquiavelismo, cuyo rasgo dominante es el cinismo y no admite ninguna subordinación de la política a la moral e, incluso, después de Hegel, es la expresión superior de la ética, y todos los medios de que se vale, aunque aplaste a inocentes, son éticos, siempre que sirvan para lograr la victoria. Porque entonces, de acuerdo a esa concepción, se cumpliría lo que se llama la voluntad de la historia.

Escuchaba ayer con gusto al señor diputado Musacchio dando quizás la pauta diferencial más clara en la evidencia de la separación o división de la UCRI. El sostenía que el gobierno de Arturo Frondizi había tenido aspectos positivos y aspectos negativos. Y entre los aspectos negativos dijo que se había apartado, al servicio de una ideología, de lo que era una realidad sociológica argentina.

Para nosotros, la realidad argentina tiene cuerpo y espíritu, es decir, tiene problemas que hacen directamente a lo económico y problemas que hacen directamente a lo social y a lo moral. Al apartarse Frondizi de esa realidad sociológica argentina, comprendimos nosotros que estaba destruyendo en la mentalidad, en la opinión pública, en el concepto de todos los argentinos, verdaderos objetivos nacionales que se habían estado madurando, que habían estado en estudio y que estaban naciendo, que quizás todavía estaban faltos de diferenciación absoluta, pero que ya empezaban a constituir una realidad en la Argentina.

Nosotros empezábamos, desde la llegada de Frondizi, desde muy diversos sectores políticos, a hablar un lenguaje común con distintos partidos vinculados a aspectos importantes que hacen al desarrollo de la nacionalidad, al progreso de nuestras ideas y al apuntalamiento de factores morales que nunca debemos dejar de lado.

Esa realidad, ese olvido de los aspectos sociológicos, populares y morales por parte del gobierno de Arturo Frondizi, como evidencia de aspectos negativos de su gobierno, se da, pues, como pauta de una diferenciación que se viene produciendo en el marco de la UCRI.

Surgen también del despacho nuestra aceptación y nuestra defensa del apoyo económico que debe brindar el Estado a los partidos políticos, que proviene de la necesidad de la presencia de los partidos en la escena nacional, a que antes me había referido, y también a la necesidad de liberarlos de compromisos reñidos con las altas finalidades que deben cumplir.

Aquí está una de las diferencias fundamentales del proyecto en minoría con el despacho de la mayoría.

Nosotros hemos tenido especial preocupación en el despacho de la mayoría de brindar a los partidos políticos las posibilidades de su desenvolvimiento económico para que puedan realizar

la prédica de sus ideas, y para que puedan ser —como lo quería el señor diputado Solari— los partidos de ideas que educarán al pueblo y que procurarán levantar el nivel intelectual de sus afiliados, y para que pudieran dirigirse a todo el país utilizando los medios de difusión del pensamiento a fin de informarle qué es lo que piensan con respecto a cada problema. Nada de eso, por el contrario, dice el despacho de la minoría.

Afirmamos también con nuestro voto al despacho de la mayoría el pluralismo político, porque no concebimos a la democracia sin partidos, ni tampoco en el monopolitismo; nos negamos a las mutilaciones en que se asienta toda estructura totalitaria. Significa que entre el alienamiento de la libertad de los regímenes totalitarios y el peligro cierto de dificultar la acción del gobierno por la existencia de diversos partidos políticos que se contradicen en sus ideas, hemos preferido correr este último riesgo. Pero también significa el pluralismo un compromiso de todos los sectores para evitar que las incoherencias propias y naturales del sistema impidan la realización de una obra de gobierno y se convierta entonces a un régimen político en una fórmula estática, que atente contra el desarrollo de los pueblos.

La defensa del pluralismo constituye pues, para nosotros, una obligación común a todos los partidos políticos. Si se piensa que vivimos una época marcada por la necesidad de instaurar la democracia social, en la que la democracia concebida como el régimen de la razón empieza a ser una dura prueba de fuerza; si deseamos que los derechos del hombre dejen de ser meras prerrogativas individuales para convertirse en verdaderos créditos que tienen contra la sociedad; si estamos de acuerdo en que la libertad no es un hecho preexistente que debe protegerse, sino una finalidad que hay que conquistar porque no se trata de asegurar la libertad política sino de liberarlo al hombre de todas las formas de opresión; si estamos de acuerdo también en que el fundamento de la democracia no es simplemente el de la libertad del hombre sino el de la dignidad del hombre libre; y si vemos al mismo tiempo la necesidad que hay en este país de justicia social; si comprendemos la necesidad de igualar las oportunidades; si vemos la necesidad de distribuir mejor los recursos y los ingresos y, al mismo tiempo, nos preocupamos del enorme cúmulo de obstáculos que se oponen a estos objetivos, nos daremos cuenta de que es imprescindible que todos los partidos políticos armonicen su acción para permitir que gobierne el gobernante y realizar la oposición adecuada, lógica, correspondiente y el control debido de ese gobierno.

Para todo esto es necesaria una gran energía del Estado; pero el Estado no puede utilizar más energía que la que emana de las voluntades populares, y esas voluntades populares no pueden orientarse homogéneamente en las grandes

soluciones nacionales y no pueden concretarse en firmes y decididos objetivos nacionales cuando se las desperdicia o se las desorienta en aventuras frívolas, que nada tienen que hacer con las verdaderas finalidades de la política.

El pluralismo, pues, señor presidente, comporta diversos compromisos. En primer lugar, la búsqueda de la voluntad popular no puede realizarse de tal manera que la lucha por el poder prevalezca sobre el ejercicio del poder; y no puede prevalecer sobre un sistema de valoración ética sobre el que debe asentarse el pluralismo. La oposición que busca aplastar a un gobierno lo lanza a una estéril lucha defensiva.

La propaganda no puede contener rasgos hitlerianos. Es decir, decir lo contrario de lo que se piensa o de lo que se hace; ni tampoco ser de aquella que Manheim calificaba de totalitaria, cuando estaba sugerida por la consideración de un nivel medio muy bajo de la mentalidad popular.

Es imprescindible que nos demos cuenta todos de las dificultades que tiene la pretensión de instaurar una auténtica democracia social en un país, juntamente con la aplicación de un sistema pluralista. Es necesario un juego limpio; es necesario que se diga lo que se piensa; es necesario que en todas las manifestaciones de la vida política se esté actuando de manera correcta, permitiendo realizar el ejercicio del gobierno en plenitud, sin caer jamás en la mentira y en la demagogia.

Es necesario también, señor presidente, precaverse por parte de todos los sectores de lo que Fröm llama una actitud política patológica, —paranoica, dice— que consiste en confundir lo posible con lo probable.

Aquí quisiera referirme a una crítica de la que nos vamos a ocupar a fondo durante la discusión en particular. Buena parte del discurso del señor diputado Ferreira ha estado referida a la imprecisión de algunas frases del despacho de la mayoría. Y se refirió concretamente a la frase que habla del régimen republicano o a la que se refiere al régimen democrático. La construcción de buena parte de su discurso estuvo precisamente fundada en esa expresión que calificó de vaga e imprecisa.

Sr. Villanueva. — Y contradictoria.

Sr. Alfonsín. — Y contradictoria. Pero yo me he fijado en que el despacho de la minoría, el que firman los señores diputados Gómez Machado, Achiary y Ferreira, contiene una cláusula —quizás la más importante del dictamen— en la que habla del reconocimiento de los partidos políticos. Una de las condiciones fundamentales que tiene que reunir ese partido político es, según el inciso b) del proyecto, la presentación de la declaración de principios del partido, la que no deberá contener manifestaciones contrarias al régimen republicano, representativo, etcétera. Vale decir que en su propio despacho incurren

en el mismo error, de acuerdo a su criterio, que imputan a la mayoría. Este es el tipo de propaganda que no se puede hacer, señor presidente.

En el régimen pluralista la lucha entre los partidos políticos y, más precisamente, la naturaleza de la oposición varían según el cuadro general de la doctrina que se sustenta. Duverger señala tres tipos diferentes según estén en juego principios fundamentales, principios secundarios o, simplemente, rivalidades. Y encuentra los ejemplos en diversos países del mundo. Por principios fundamentales se lucha en la Francia e Italia; por principios secundarios en Inglaterra, y por rivalidades entre los partidos republicano y demócrata en los Estados Unidos.

Y sostiene luego que el régimen de los Estados Unidos, en el que no se lucha, reitero, por principios fundamentales ni secundarios, se da en un medio que impide el fanatismo, la demagogia y las exageraciones.

Creo que puede ser así, pero haríamos mal, a mi juicio, en pretender extraer de esta comprobación una especie de norma general que comporte un criterio para aplicar a la realidad de los distintos países. Creo que en nuestro país puede observarse una tendencia, que reputo peligrosa, entre diversos partidos que no difieren fundamentalmente en sus principios, vale decir que no luchan entre sí por principios fundamentales, sino que muchas veces extreman la nota para buscar pautas de diferenciación, exagerar ante la opinión pública sutiles discrepancias y distorsionar, en algunas oportunidades, la misma realidad. Diversas son las técnicas empleadas, pero la más común consiste en confundir las posibilidades prácticas inmediatas con las reformas de estructuras a largo plazo, invocándose el tiempo de las urgencias sociales sin medir el tiempo histórico de las grandes realizaciones. Otra táctica común es realizar la oposición por compartimientos, sosteniendo separadamente las reivindicaciones sociales de diversos grupos económicos, muchas veces contradictorios entre sí. Esto se ha dado en diversos países del mundo, y en nuestro país ha sido una actitud sumamente generalizada.

El problema consiste en que, en la democracia pluralista, que defendemos apasionadamente, la actitud de diversos partidos políticos va enfrentando a los que quieren realizar una oposición realmente constructiva, a los que valoran el esfuerzo de la nacionalidad, del pueblo, en su búsqueda de desarrollo y progreso, con la actitud de esos partidos que actúan demagógicamente. Aquellos sectores se percatan de inmediato de que la noble actitud que mantienen en el control estricto y en la oposición constructiva les crea, al mismo tiempo un problema de tipo electoral.

Esto es lo que señala Burdeau: los partidos políticos se encuentran ante la alternativa que

les merece el deber de tolerancia que implica el juego democrático y la necesidad política de plegarse a fuerzas predominantes. Es preciso que hagan todo lo posible, sin comprometer nada; todo lo posible, puesto que la voluntad del pueblo debe cumplirse; no comprometer nada, porque la minoría debe conservar sus posibilidades.

Nuestro partido está sumamente satisfecho de este dictamen, no sólo porque de alguna manera le puede caber el altísimo honor de traer a la consideración de la Honorable Cámara un estatuto que afirmamos que de ninguna manera es proscriptivo, sino también porque en el transcurso del debate y, sobre todo, en el transcurso del examen largo, intenso y prolijo que se efectuó en la comisión se han puesto de acuerdo en lo fundamental todos los sectores de la Cámara, con una sola excepción.

Coincidimos con lo que se ha dicho aquí respecto a que, por sí solo, este estatuto no ha de asegurar la posibilidad de una democracia integral. Pero estamos seguros de que afirma las bases de la democracia política, y estamos convencidos de que será respetada y cumplida la voluntad del legislador.

Declaraciones de nuestro comité nacional, de nuestra convención nacional y de la plataforma de nuestro partido hablan de nuestra voluntad de integrar sin exclusiones el cuerpo electoral de la Nación. Siempre hemos dicho que queríamos ir a los procesos electorales sin procripciones, sin pactos y sin frentes que los desnaturalizan.

En este instante pretendemos cumplir con una promesa que hemos hecho a la opinión pública en el transcurso de la campaña política. Estamos convencidos de ser comprendidos por todos los sectores de la Cámara y estamos también seguros de que en la medida en que todos comprendamos la necesidad de actuar en la democracia para alcanzar su aspecto integral y social podremos superar esta hora casi angustiada que vive el país, pero que es también la hora de la esperanza argentina, la hora en que estamos asentando las bases de la paz social y de una tranquilidad popular, que no la queremos como remanso donde se pierden las inquietudes, sino que la anhelamos para buscar con ella las más altas manifestaciones del espíritu, las más grandes confrontaciones de ideas. Seguiremos así unidos los argentinos, con la cordialidad de los diversos partidos políticos, sumando esfuerzos para hacer cierto el auténtico progreso del país. *(¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)*

Sr. Presidente (Mor Roig). — De acuerdo con lo oportunamente resuelto por la Honorable Cámara, corresponde votar en general el dictamen de la mayoría de las comisiones.

Sr. Luco. — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — En la casa hay 107 señores diputados.

Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

—Después de unos instantes:

Sr. Presidente (Mor Roig). — No habiendo número en el recinto, pero sí en la casa, por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Se pasa lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar en general el dictamen de la mayoría de la comisión.

—Resulta afirmativa de 101 votos; votan 113 señores diputados. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Mor Roig). — A continuación se va a votar las inserciones solicitadas durante el transcurso del debate por los señores diputados Jofré, Pizarro y Oreja.

Sr. Di Leo. — Sería conveniente que en cada caso se enunciara de qué tratan esas inserciones, para saber si es posible acordarlas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega al señor diputado Jofré se sirva enunciar en qué consiste la inserción que ha solicitado.

Sr. Jofré. — Se trata de la transcripción de un artículo de Kelsen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado Jofré.

—Resulta afirmativa de 97 votos; votan 115 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde votar ahora la inserción solicitada por el señor diputado Pizarro, de un decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba.

Sr. Pizarro. — Y de una nota de la democracia cristiana pidiendo la derogación del decreto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

—Resulta negativa de 63 votos; votan 117 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado Oreja, de tres cuadros estadísticos sobre partidos políticos.

—Resulta negativa de 61 votos; votan 117 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se hará la inserción acordada por la Honorable Cámara (1).

4

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — En conversaciones mantenidas entre los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales estimamos prudente

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice.

pasar a un cuarto intermedio de una hora, a los efectos de que, reunida la comisión con los autores de distintas observaciones al despacho que se acaba de aprobar, se trate de buscar una coincidencia para facilitar el debate en particular.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración la moción del señor diputado Belgrano Rawson, de pasar a cuarto intermedio por una hora para posibilitar la discusión en particular.

Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Si no estuviese dispuesto ya por la Honorable Cámara, pienso que sería atinado que también en esta ocasión —si el señor diputado Belgrano Rawson no tiene inconvenientes— se ampliara la moción, en el sentido de que la sesión se levantaría a las 24 y se reanudaría mañana a las 10.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ya está así establecido, señor diputado.

La Presidencia recuerda que también, oportunamente, la Comisión de Labor Parlamentaria resolvió, inmediatamente después de votarse en general el estatuto, celebrar una reunión para aunar criterios sobre la mejor manera de conducir el debate en particular.

Sr. Belnicoff. — Deseo preguntar si el sentido de la moción es que no se van a hacer observaciones en el recinto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No, señor diputado. El cuarto intermedio es para que la Comisión de Asuntos Constitucionales pueda aunar criterios acerca de las distintas modificaciones propuestas.

Sr. Domingorena. — ¿Se necesitará quórum para reanudar la sesión, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia presume que sí, señor diputado, puesto que habrá que entrar a votar de inmediato.

Se va a pasar a cuarto intermedio por una hora.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 18 y 30.

—A la hora 20 y 27:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales nos ha hecho saber que está realizando un minucioso estudio de las observaciones que a su seno han llegado con referencia al dictamen del estatuto de los partidos políticos, y que ese estudio forzosamente le habrá de requerir un lapso mayor del que, en principio, habíamos fijado.

Como de todas maneras el procedimiento significa ganar tiempo para la discusión en particular, por cuanto, sin duda, todos los sectores han de procurar ponerse de acuerdo sobre los textos que serían motivo de discusión en el caso de que no se llegase a soluciones que complacieren a los distintos sectores, me parece conveniente extender el cuarto intermedio resuelto con anterioridad por la Honorable Cámara, hasta el día de mañana a las 10. Debo manifestar, con respecto a este temperamento, que todos los sectores consultados han prestado su conformidad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, se pasará a cuarto intermedio hasta mañana a las 10.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 30.

sentativo de los intereses proletarios, dirigida no sólo contra los partidos burgueses, sino incluso contra todos los demás partidos obreros. Esta palabra procede del nombre del partido que ejerce la dictadura; pero actualmente no sólo sirve para designar el carácter de la soberanía en un determinado Estado, sino que se ha convertido en concepto genérico. Lo mismo puede decirse de aquella otra dictadura análoga a la del bolchevismo, en su estructura y nacimiento, aun cuando de finalidades antitéticas ejercida en Italia por el partido burgués de los fascistas, victorioso en su lucha contra los partidos proletarios. En efecto, el «fascismo» no sólo constituye actualmente una determinada estructuración del poder soberano en cierto Estado, sino que representa el tipo de la dictadura de un partido burgués, opuesta a la dictadura del proletariado.

Si se contempla la nueva forma política desde el punto de vista de su desenvolvimiento y relación con la democracia inmediatamente anterior, precisa comprobar que es justamente del seno de esta democracia de donde ha surgido la autocracia moderna. El «Estado de partidos» se ha convertido en «Estado de un solo partido», esto es, en dictadura de partido, desde el momento que un partido único ha alcanzado el poder para ejercerlo exclusivamente por sí mismo, excluyendo a todos los restantes. Estos son aniquilados, y se impide por todos los medios posibles la formación de partidos nuevos. Los cargos públicos de mayor importancia son ocupados por miembros del partido dominante, el único al que se reconoce existencia jurídica. Su organización es la única que influye de modo decisivo en la formación de la voluntad estatal. Es posible que el partido esté reconocido por el orden jurídico, especialmente por la Constitución; pero no es preciso; su influencia sobre los órganos de la legislación y ejecución estatales puede ser extrajurídica. En ese caso, la fase decisiva de la formación de voluntad estatal se relega a un estadio prejurídico. Mas esto también ocurre en el Estado de partidos, puesto que también en éste desempeñan cierto papel las asambleas y resoluciones adoptadas en el seno de los partidos; pero su importancia es menor porque la decisión definitiva (y nunca del todo previsible) se realiza en el procedimiento dialéctico del Parlamento, en el que actúan fuerzas de varia dirección. Esta concurrencia es lo que falta por entero en la dictadura de un partido, aun suponiendo que subsista una corporación legislativa, pues se pone buen cuidado en que ésta se halle constituida en todo o en su mayor parte por los miembros del partido dominante.

Puesto que lo importante es la organización del partido gobernante, la cuestión de la forma constitucional se relega a segundo término. Tanto la monarquía como la república se convierten en formas puramente externas vaciadas de todo contenido material propio; tanto la una como la otra ofrecen idéntica posibilidad de que en su interior se desenvuelva una dictadura partidista. En efecto, de las tres dictaduras típicas actualmente existentes, dos de ellas mantienen la fachada republicana: Rusia y Alemania, y una la de la monarquía: Italia.

Por lo mismo, es de importancia subalterna averiguar si la dictadura de partido se ha impuesto por vía revolucionaria, suplantando la Constitución vigente y sustituyéndola por una nueva que expresaría más o menos claramente el verdadero carácter del nuevo poder; o si se ha establecido por procedimiento legal, por ejemplo, llamando al jefe del Estado —monarca o republicano— al poder, al líder o líderes

del partido dictatorial, el cual conseguiría luego por uno u otro procedimiento dentro de la legalidad, un decreto de plenos poderes que le permitiría adoptar medidas dictatoriales; en ese caso, la Constitución sigue formalmente en vigor, con alguna que otra reforma, y subsiste la continuidad en el proceso de formación jurídica. Materialmente, la dictadura significa siempre, cualquiera que sea el procedimiento (legal o revolucionario) de su instauración, una plena ruptura con el precedente sistema democrático o su afín el monárquico-constitucional.

Esto se traduce en primer término en la plena supresión de la libertad personal y política. Todas aquellas instituciones tan características del Estado de derecho que servían para proteger al individuo contra los arbitrarios ataques de los órganos estatales o de los partidos, son radicalmente eliminados o pierden toda eficacia real. Tampoco queda lugar para la participación efectiva de los súbditos en la creación de las normas, por lo menos en las generales, de las leyes. Si existe un órgano colegial legislativo distinto de la jefatura del partido (encargada de la dirección del Estado), sus miembros son nombrados directamente por el gobierno; o existe tal falta de libertad en la elección que ésta viene a ser, en el fondo, una forma de nombramiento. Aquí radica precisamente la nota decisiva del carácter autocrático de esta forma estatal. Por lo que respecta a su ideología justificativa, las actuales dictaduras se distinguen por características nada leves. El bolchevismo se atiende, en principio al menos, a la ideología democrática, de la que echa mano hasta cierto punto en la elección de las autoridades. Incluso llega a caracterizarse como la «verdadera democracia», al presentarse como dictadura de una clase, cuya finalidad es la supresión de toda oposición de clases, y, por consiguiente, el establecimiento de la libertad plena y perfecta. El ideal democrático de la libertad subsiste, al menos, por referencia a la finalidad última de su política: la realización del socialismo; pues éste es un ideal de masas que se ha convertido en efectivo poder político, en la lucha por la democracia y en la democracia por la que luchó, con la imprescindible ayuda del sufragio universal e igualitario.

No ocurre así en la segunda forma de dictadura partidista: el fascismo en su lucha contra el socialismo o, mejor, contra las masas que luchaban por el socialismo, tenía que dirigirse principalmente contra la democracia, que ponía en peligro el poderío político de la burguesía, puesto que ofrecía a las masas grandes posibilidades de acción, aun cuando éstas no fuesen lo suficientemente intensas para conseguir por sí solas la realización del socialismo. Por eso, en la realidad, también el bolchevismo socialista pasa de la democracia a la dictadura; de ese modo, la ideología democrática queda desamparada tanto por las extremas derechas como por las extremas izquierdas. El fascismo lleva su lucha contra la democracia y el socialismo bajo la bandera de la idea nacional. Aquí tenemos una distinción importante entre ambas clases de la moderna autocracia. En un caso, se trata de una dictadura de partido proletario socialista; en otro, la dictadura es burguesa y nacionalista. De aquí resulta que el fascismo, al rechazar el punto de vista específicamente socialista de la lucha de clases, no quiere pasar, como el bolchevismo, por ser dominio de una clase, sino que se afirma, contrariamente, como representante de la totalidad de un pueblo unificado en nación. Y justamente en esta invocación a la unidad, en esta exi-

gencia de superación, de ignorancia o de negación de las antítesis de clases —las cuales existen y actúan de hecho, a pesar de que se quiera desconocerlo— en la proclamación de una idea capaz de unir a todos los miembros del Estado, que puede ser alzada ante el extranjero como signo diferenciador y que sirva, por tanto, para elevar a su más alto punto la propia conciencia nacional, en todo eso radica una de las condiciones esenciales del fascismo. En el Estado fascista no impera ya la ideología democrática, sino un ideario aristocrático-autocrático, más o menos consciente y consecuentemente desenvuelto. Allí impera la idea de que una élite es la llamada a ejercer la función directora, y la idea, o, mejor, la creencia en la naturaleza carismática de una personalidad (o «caudillo»), a la que de manera misteriosa y sobrenatural se le ha otorgado la gracia de dirigir la cosa pública. Existe la tendencia, al menos en el dominio de la ejecución, a que los órganos estatales sean designados por nombramiento del caudillo, o a nombrar para esos cargos a sus lugartenientes. El principio «autoritario» sustituye al democrático; pasa a primer plano la exigencia de la disciplina y de la obediencia incondicional al superior jerárquico, e incluso la administración civil recibe un carácter esencialmente militar.

A la militarización del Estado precede la militarización del partido. Es más, esta última es el supuesto esencial de la apropiación del poder por el partido. Una de las características esenciales de la dictadura fascista consiste en que se halla protegida por una milicia formada por miembros del partido militarmente organizados, uniformados y armados; todo ese aparato militar favorece su acceso al poder. La dictadura se encuentra luego con el problema político de establecer una relación adecuada entre la milicia del partido y el ejército regular del régimen anterior. Ambas milicias, que llegan a constituir una unidad en la medida de lo posible, son como la espina dorsal del Estado fascista, el cual acepta conscientemente el carácter de Estado militarista, lo cual se ve con suficiente claridad en la educación de su juventud.

El bolchevismo coincide con el fascismo en su actitud fundamentalmente antipacifista. En política exterior, ambos son imperialistas. Aquél, con la finalidad de extender el imperio del socialismo por la revolución mundial; éste, desde el punto de vista de la expansión y predominio nacionales. En consecuencia, uno y otro demuestran un claro desvío hacia toda forma de organización internacional cuya finalidad sea la exclusión de la guerra, y cuya consecuencia resulte ser el mantenimiento del statu quo, y que, además, esté fundada sobre el principio democrático de la igualdad de todos los Estados, prescindiendo de su extensión territorial y de sus instrumentos de poder político. El bolchevismo y el fascismo son por igual enemigos de la sociedad de naciones, porque uno y otro son adversarios, encubierto el uno, declarado el otro, de la democracia.

Pero, a pesar de esta repulsa de la democracia —tan marcada especialmente en el ámbito ideológico—, el fascismo se ve obligado a hacer ciertas concesiones a este principio irresistible de la formación de voluntad social. En la dictadura, el caudillo siente la necesidad de recabar el asentimiento —al menos tácito— de amplias masas ciudadanas, a las que se estima inadecuado conceder una participación activa en la dirección del Estado. Y ese asentimiento, o la apariencia del mismo, se provoca ya en la forma tradi-

cional del plebiscito, o en la más moderna de fiestas y manifestaciones de masas. No hay que maravillarse, pues, de que también el fascismo, olvidando su posición esencialmente antidemocrática, se declare, imitando a su fraternal enemigo el bolchevismo, la «auténtica democracia».

Hay un hecho que demuestra hasta qué punto esta ideología se halla alejada de la realidad: la dictadura partidista —y en este punto no hay la menor diferencia entre sus dos tipos representativos— no solo aniquila la libertad política, sino ante todo y con especial energía, la libertad intelectual, tan esencial a una democracia. Diríjese en primer término contra la libertad de prensa, porque conoce la importancia extraordinaria de la opinión pública para la solidez del poder, y por eso ahoga sin contemplaciones toda manifestación adversa o simplemente desfavorable. El bolchevismo ha dado el ejemplo en la elaboración sistemática de las representaciones políticas dominantes en las masas, con todos los medios de una propaganda ejercida por órganos estatales. Ha comenzado por poner al servicio del gobierno la producción consciente de ideologías no sólo por medio de la prensa, sino por manifestaciones públicas, radio, cine, teatro e instituciones análogas. En este respecto, el fascismo ha seguido sus huellas sin reserva alguna. Compréndese que un sistema semejante no puede dejar de influir sensiblemente en la escuela y la enseñanza, y que la libertad de la ciencia no puede ser respetada por él. La ciencia es puesta al servicio incondicionado de los intereses del poder público, en tanto que es susceptible de ello; y la ciencia lo es, sin duda alguna.

No puede decirse lo mismo de la religión, la cual mantiene su libertad más fácilmente que la ciencia en la dictadura partidista. El bolchevismo se limita a separarla del Estado y a limitar su eficacia a la esfera privada. No impide su ejercicio, pero tampoco la propaganda antirreligiosa, la cual se endereza especialmente contra el cristianismo, como ideología protectora del orden social burgués. También el fascismo garantiza la libertad religiosa; pero favorece abiertamente la religión cristiana, a la que trata de poner abiertamente al servicio de su poder. El fascismo trata sobre todo de entenderse con la Iglesia católica, como potencia internacional. Incluso allí donde la población católica no es más que una minoría en oposición en la mayoría protestante, el fascismo se esfuerza por la firma de un concordato.

La oposición de la dictadura partidista a la democracia no es tan grande en lo que respecta a la idea de igualdad, como en lo referente a la de la libertad. En verdad, no es reconocido el principio de la igualdad política en el sentido de una igualdad de los derechos políticos de todos los ciudadanos, la cual va unida de modo inseparable a la libertad política. El bolchevismo excluye de todo derecho político a categorías enteras de ciudadanos. El fascismo establece, de acuerdo con su ideología aristocrática y autoritaria, una articulación jerárquica sumamente diferenciada de los funcionarios públicos, y un complicado sistema de honores y dignidades. Y allí donde el fascismo enlaza la idea nacional con el principio racista, o hace basar aquélla en éste, realiza íntegramente una selección de determinadas partes de la población para impedirles el acceso a los cargos públicos y el ejercicio de ciertas profesiones.

Por esta razón se aspira intensamente a provocar en el país una igualdad intelectual, en el sentido de una uniformidad de las inteligencias. También en

este punto es absoluta la coincidencia en ambos tipos de la dictadura partidista. Lo único que varía es el aparato ideológico. En un caso, es la idea socialista de la naturaleza colectiva del hombre; en el otro, es la idea, deducida del nacionalismo, del Estado «totalitario», es decir, del Estado que regula autoritariamente todas las relaciones sociales: tales son las dos opuestas ideas que justifican la uniformidad intelectual de todos los súbditos. En ambos casos, la tendencia a comprender del modo más completo posible al individuo por el orden coactivo del Estado, tiene que conducir necesariamente a una estandarización de la vida cultural.

La oposición más saliente entre ambos tipos de dictadura partidista existe por relación a su actitud ante la igualdad material o económica de los ciudadanos. Bolchevismo y fascismo se hallan en una relación positiva ante el orden económico socialista y capitalista, respectivamente. Pero urge advertir que así como la dictadura proletaria tiene que quedar muy atrás de su ideal marxista de una economía planificada, por razones técnicas y políticas, tampoco la dictadura burguesa está decidida a mantener sino a costa de ciertas reformas el sistema actual, basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libre concurrencia; pues advierte que sin esas reformas el régimen capitalista no puede subsistir. En ese sentido ha realizado ensayos muy dignos de ser tenidos en cuenta. Tampoco pueden ser menospreciados los enérgicos esfuerzos realizados por el fascismo para suavizar eficazmente las desigualdades de las clases, por medio de su política social. Precisamente porque combate al socialismo, se afana lo indecible por quitarle la base de sus argumentos más burdos. En esto suele ir tan lejos, que

incluso arrebató el nombre al adversario, y se llama a sí mismo socialismo, a la manera del bolchevismo, que se encubre con el título de democracia. Por lo demás, esta adaptación espontánea o forzada a los fines del adversario puede ser de efectos mucho más profundos de lo que cabe sospechar. Y no parece imposible que el fascismo, la forma política adoptada por la burguesía en la lucha de clases, se revele en último término como la vía adecuada para imponer una economía colectivista dirigida y planificada —en lo que consiste la médula del socialismo— en lugar de la anarquía económica del capitalismo. Hay motivos para creer que el realizador de este movimiento no ha de ser precisamente el proletariado, como piensa la teoría marxista; esta función, en efecto, puede ser realizada por la burguesía —aunque, de seguro, no por su gusto— si ésta acierta a darse cuenta de la insostenibilidad de esta forma económica; e incluso cabe afirmar que la burguesía constituye una condición más favorable para el logro definitivo de esa misión, ya que el proletariado no dispone, naturalmente, del gran número de fuerzas calificadas que se requieren para efectuar el paso de una a otra forma de producción. El fascismo es quizá el instrumento político de la burguesía para asegurarse la dirección de este proceso, que ha de conducir inexorablemente a su desaparición como clase. Y por paradójico que parezca, el nacionalismo fascista es, probablemente, por la fuerza incomparablemente mayor de integración que posee, una garantía más segura de realización del socialismo que la ideología originaria de éste.

Del libro *Teoría general del Estado*, del doctor Hans Kelsen (traducción de Luis Legaz Lacambra), Editora Nacional, México, 1959, páginas 464 a 470.